

DEFINICIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA ARBITRAL

JURISPRUDENCIA: COLOMBIA–ESPAÑA–MÉXICO

TOMO IX

HERNANDO HERRERA MERCADO

IBAÑEZ
Centro de Arbitraje y Conciliación CCB
Corporación Excelencia en la Justicia
CIAC Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial
Universidad del Rosario
Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá
Universidad Externado de Colombia

Aviso de lectura:

El texto que se presenta a continuación corresponde a un extracto o muestra representativa de la publicación. Para consultar la obra completa en sus más de 900 páginas, los interesados pueden adquirir el libro directamente con el Grupo Editorial Ibáñez, en el siguiente enlace:

https://xn--grupoeditorialibaez-c4b.com/preventa-definiciones-jurisprudenciales-en-materia-arbitral

Título: Definiciones jurisprudenciales en materia arbitral. Jurisprudencia Colombia – España – México

Año: 2026

Autor: Hernando Herrera Mercado

Editorial: Grupo Editorial Ibáñez

Sinopsis de la obra:
Definiciones jurisprudenciales en materia arbitral. Jurisprudencia: Colombia — España — México, la más reciente entrega de la serie Arbitraje 360° concebida por el jurista Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

Esta publicación analiza cómo la jurisprudencia de las Altas Cortes ha delineado, fortalecido y otorgado previsibilidad y certeza jurídica al ecosistema arbitral. Mediante una prolija tarea de investigación y taxonomía jurídica, el autor compila y sistematiza extractos de más de 1.400 nociones arbitrales fundamentales emanadas de los tribunales de tres jurisdicciones relevantes de Hispanoamérica: Colombia, España y México.

Organizada a la manera de un diccionario conceptual, con estricto orden alfabético de la A a la V, la obra brinda al lector un acceso inmediato y riguroso a las providencias hito sobre materias cruciales como la arbitrabilidad, la validez del pacto arbitral, los poderes de los árbitros, la asistencia judicial y los contornos de los medios de impugnación y anulación de laudos. Más que una recopilación de citas, el texto constituye un instrumento práctico de consulta cotidiana, una guía comparada y una brújula metodológica para árbitros, jueces, litigantes, la academia y los estudiantes de la materia.

DEFINICIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA ARBITRAL

Colección Arbitraje 360°

Tomo IX

Hernando Herrera Mercado
Fabricio Mantilla Espinosa
Directores Académicos



DEFINICIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA ARBITRAL

Jurisprudencia: Colombia–España–México

HERNANDO HERRERA MERCADO

IBAÑEZ
Centro de Arbitraje y Conciliación CCB
Corporación Excelencia en la Justicia
CIAC Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial
Universidad del Rosario
Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá
Universidad Externado de Colombia

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

Herrera Mercado, Hernando, autor

Definiciones jurisprudenciales en materia arbitral: jurisprudencia: Colombia - España - México / Hernando Herrera Mercado. -- Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez, 2026.

928 páginas.

ISBN 978-958-502-853-1 -- 978-958-502-855-5 (digital)

1. Arbitraje - Fundamentos 2. Conciliación - Aspectos jurídicos - Colombia 3. Conciliación - Aspectos jurídicos - México 4. Conciliación - Aspectos jurídicos - España 5. Resolución de disputas (Derecho) - Colombia 6. Resolución de disputas (Derecho) - México 7. Resolución de disputas (Derecho) - España 8. Derecho comparado

CDD: 347.09 ed. 23 CO-BoBN– a1182184

© Hernando Herrera Mercado

© Grupo Editorial Ibañez

Imprenta: Carrera 69 Bis No. 36-20 Sur
Tels: 601-2300731 – 601-2386035
Librería-café La Soledad Parkway: Calle 37 No. 19-07
Tels: 601-7025760 – 601-7025835
Librería: Calle 12 B No. 7-12. L. 1
Tels: 601-7018621
Bogotá, D.C. – Colombia
www.grupoeditorialibanez.com

ISBN: 978-958-502-853-1
ISBN e-book: 978-958-502-855-5

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro por cualquier proceso reprográfico o fónico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo.

Ley 23 de 1982

Diagramación electrónica: Yaneth Guarín A.
Diseño de portada: Vanessa Peña A.

A Eloisa Braun, mi primera nieta, y con quien he empezado este extraordinario abuelazgo.

CONTENIDO

Prólogo Eduardo Silva Romero, presidente del Instituto de Derecho Mercantil Internacional de la Cámara de Comercio Internacional. 13

Presentación de Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia 15

Presentación de Alejandro Venegas Franco, ex vicerrector y ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario..... 17

Presentación de Juan Carlos Botero Navia, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana 19

Palabras del autor Hernando herrera mercado 23

LISTADO DE DECISIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA ARBITRAJE

A 29

B 43

C 44

D 63

E 71

F 80

G 85

H 86

I 88

J 96

L 97

M 102

N 106

O 112

P 116

Q 124

R 125

S 132

T 135

V 138

EXTRACTOS DE DECISIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA ARBITRAL

A 143

B 242

C 246

D 393

E 451

F 522

G 556

H 563

I 569

J 629

L 634

M 661

N 683

O 721

P 745

Q 812

R 815

S 868

T 891

V 907

Prólogo Eduardo Silva Romero, presidente del Instituto de Derecho Mercantil Internacional de la Cámara de Comercio Internacional.

El Derecho es lenguaje. Esta afirmación, que fuera uno de los estandartes de la Escuela Histórica del Derecho (de Savigny), es, hoy día, nos parece, una evidencia. Los juristas, por ende, son aquellos que, luego de consagrar mucho tiempo al estudio de numerosos textos (antes se trataba de horas y más horas en bibliotecas), dominan los términos y las expresiones del lenguaje jurídico.

El Derecho del Arbitraje, como rama imperfecta (pues adjetiva) del Derecho, no es la excepción. Los (quizás mal llamados) "especialistas en arbitraje" son, por tanto, quienes conocen los términos y las expresiones del lenguaje arbitral, incluidas, para utilizar la terminología de este extraordinario libro, las "definiciones jurisprudenciales en materia arbitral".

Una precisión preliminar es necesaria. El Derecho del Arbitraje no se reduce a lo que las leyes sobre arbitraje mal que bien dicen sobre la materia. Como toda rama del Derecho, el Derecho del Arbitraje es un cuerpo en constante movimiento. Sus reglas y principios evolucionan inevitablemente al ritmo de los cambios sociales. Y es por ello que, también nos parece, solamente las cortes estatales pueden, a fin de cuentas, definir con alguna esperanza de precisión sus términos y expresiones. Sabemos que el Derecho no existe sin su aplicación y sanción.

En un proyecto, hasta donde nosotros sabemos, sin precedentes, el Doctor y Jurista Hernando Herrera Mercado se ha dado la colosal tarea de compilar, en este volumen, extractos de decisiones jurisprudenciales en materia arbitral que definen los diferentes términos y las diferentes expresiones usualmente empleados en la materia. La jurisprudencia escogida proviene de tres Estados en los que el arbitraje, como mecanismo de resolución de litigios, ha cumplido, a pesar de todo, un rol esencial en el mantenimiento de la paz social: Colombia, España y México. Nadie podrá negar, en efecto, el papel que las cortes de estas tres naciones han desempeñado en el desarrollo del Derecho del Arbitraje y la práctica arbitral.

A manera de diccionario, esto es, en estricto orden alfabético, de A a V, el Doctor Herrera nos ofrece extractos de sentencias de las cortes colombianas, españolas y mexicanas que aclaran el sentido de los conceptos necesarios para entender la materia arbitral. Nos atrevemos a sugerir que, como ocurre con los diccionarios, los extractos de esta obra, finamente elegidos por un gran conocedor del arbitraje, no deben ser leídos en orden. Este libro permite el raro placer (como la Rayuela de Cortázar) de saltar de una parte a otra, de un extracto a otro, de una definición a otra. El estilo del libro brilla por su concisión y la consecuente claridad.

En todo caso, es menester subrayar que la lectura de estos extractos, en el orden que se quiera, forman un fabuloso cuadro impresionista que le permitirá al lector dominar el lenguaje arbitral. De nuestra lectura, de todas maneras, debemos subrayar el sentimiento de que, en todos los extractos leídos, encontramos la inveterada tensión entre la esencia contractual del arbitraje y su naturaleza irremediablemente procesal. Los extractos del Doctor Herrera, en otras palabras, no explicitan la reflexión teórica subyacente sino la sugieren.

La generosidad del Doctor Herrera al ofrecernos este libro debe ser aplaudida. Dicha generosidad, sin embargo, no sorprenderá a nadie. El Doctor Herrera ha tenido una estrecha relación con el arbitraje y la justicia en general durante toda su brillante carrera. Una breve reseña de su rico recorrido lo demuestra: el Doctor Herrera ha sido y es un reconocido árbitro nacional e internacional; profesor de la materia arbitral en numerosas universidades; Presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia; Presidente de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá; miembro de comisiones ante la CCI y la CIAC; etcétera

Cualquier persona que quiera profundizar su conocimiento del Derecho del Arbitraje debe leer este libro.

EDUARDO SILVA ROMERO

París, julio de 2026

Presentación de Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia

El destacado jurista, catedrático y árbitro nacional e internacional, Hernando Herrera Mercado nos presenta esta nueva obra que hace parte de la colección Arbitraje 360 grados, pero esta vez con un significativo alcance en materia de derecho comparado, que no tiene antecedente similar, y de allí su valia para la doctrina local e internacional en materia arbitral.

La obra se extiende en más de 800 páginas para integrar un juicioso tejido metodológico orientado al preciso perfilamiento de un extenso número de definiciones jurisprudenciales en materia arbitral, para una vez delineadas con fino rigor, desarrollarlas particular y autónomamente mediante los extractos de las respectivas jurisprudencias en la misma temática arbitral.

El trabajo brinda buena cuenta de sus antecedentes, pues permite apreciar nítidamente que requirió muchas horas de dedicación al análisis de integración que seguramente fue el que permitió articular la definición emanada de la jurisprudencia arbitral, con su correspondiente explicativo incorporado en el extracto jurisprudencial. Empero, este trabajo no se acomodó simplemente a agotar su alcance dentro de las fronteras patrias, sino que su pretensión se extendió a la jurisprudencia mexicana y a la española, en la misma materia.

El ejercicio de investigación, depuración e identificación de decisiones judiciales hito sobre varias temáticas esenciales para la efectividad y estabilidad del arbitraje, acredita con suficiencia la amplia experiencia del autor como abogado y árbitro, condición que asegurará la amplia divulgación de la obra. En adición, la obra recoge decisiones trascendentales sobre diversas discusiones en materias tales como arbitrabilidad, validez del pacto arbitral, condiciones para acudir al arbitraje, alcance de los poderes de los árbitros y anulación de laudos arbitrales, entre otras, todo cual lo robustece su contenido.

Huelga afirmar que este trabajo intelectual está llamado a convertirse en un referente obligado para quienes estudian, adelantan labores de docencia y se desempeñan profesionalmente en el mundo del arbitraje. Sus páginas ofrecen una vista panorámica del estado del arte sobre una amplia diversidad

de temas, enriquecido con una valiosa perspectiva comparada a partir de la experiencia de jurisdicciones como México y España. Precisamente por ello, no solo sistematiza el conocimiento existente, sino que también estimula la reflexión crítica y abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la teoría y la práctica arbitral.

Me asiste la convicción de que la génesis de esta obra se ubica en las discusiones emanadas de las lecciones que el autor imparte con plena competencia en centros universitarios tanto del país como en el exterior, y que este trabajo por ello mismo está llamado a convertirse en un semillero permanente de nuevas definiciones y de nuevos desarrollos de la jurisprudencia en materia arbitral, y de allí su inmensa proyección hacia el futuro.

Quienes hemos tenido cercanía con los temas arbitrales, encontramos en esta obra una brújula para orientar los análisis y las decisiones en los nuevos laudos, que podrán resultar enriquecidos no solo con las perspectivas domésticas, sino también con las internacionales.

Celebro entonces el contenido de esta publicación, pues resultara de gran provecho para la comunidad académica, a la vez que destaco el hecho de que el sello editorial del Externado de Colombia que la acompaña, ponga de presente los vínculos de trabajo y afecto del autor con esta Casa de Estudios, la cual se siente orgullosa de participar en la divulgación de uno de los más importantes raciocinios arbitrales que se hayan llevado a efecto en los últimos tiempos en suelo patrio.

HERNANDO PARRA NIETO.

Presentación de Alejandro Venegas Franco, ex vicerrector y ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario

Del libro "Definiciones jurisprudenciales en materia arbitral" se pueden hacer diversas y positivas observaciones, algunas vinculadas con la prolija investigación adelantada en tres países (Colombia, España, México), también con la cuidadosa selección de descriptores de providencias debidamente reflejadas en un índice que permite una ágil ubicación de los temas cruciales alrededor del arbitraje o con la transcripción de los acápites más sobresalientes de los pronunciamientos judiciales respecto al arbitraje. Pero más allá de esos aspectos, todos muy relevantes, resulta muy destacable el propósito que anima la publicación de la cual se me ha solicitado hacer una sucinta presentación.

Puede describirse en que la interacción o interlocución entre las autoridades judiciales y el sistema arbitral supere la "irritable dualidad "que mencionaba Bruno Oppetit en su clásica obra de la Teoría del Arbitraje, a la cual tuve oportunidad de hacer mención en algún escrito hace ya varios años[1].

Un ejercicio como el contenido en este libro permite establecer con amplitud los niveles de interlocución entre el arbitraje y las autoridades jurisdiccionales cuando estas intervienen resolviendo recursos de anulación o acciones de tutela o frente a determinaciones arbitrales, en el sistema de control existente frente a las decisiones arbitrales. Esa interlocución permite además verificar la calidad de los pronunciamientos judiciales que si bien no son infalibles tampoco son mayoritariamente errados, quizá como resultado de la pretendida especialidad o por las condiciones de los árbitros.

Un ejercicio como el contenido en este libro podría contribuir a atenuar el escepticismo sobre el arbitraje, que corresponde al título de una célebre publicación de un gran jurista que devela sus inquietudes sobre este sistema.

---

1 Venegas Franco, Alejandro. *Ideas y ponencias.* Bogotá: Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. 2020.

No se trata que la interlocución entre la jurisdicción ordinaria y el sistema[2] arbitral sea el de antagonistas sino de protagonistas con diferentes orígenes en el desarrollo de una función de resolución de conflictos, puede revestir polaridad pero no polarización y a eso contribuye el contenido del presente libro.

Esta publicación continúa la serie que bajo la denominación 360 grados aborda diferentes temas del arbitraje dirigida por los profesores Hernando HERRERA MERCADO y Fabricio MANTILLA ESPINOSA, dos distinguidos profesionales y destacados árbitros.

2 MUÑOZ SABATÉ, Luis. *Diálogo con un escéptico en materia de arbitraje.* Madrid: Editorial La Ley, 2011.

Presentación de Juan Carlos Botero Navia, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana

Hay libros jurídicos destinados a ser leídos de principio a fin y otros concebidos para permanecer abiertos sobre el escritorio. *Definiciones jurisprudenciales en materia arbitral. Jurisprudencia: Colombia–España–México*, de Hernando Herrera Mercado, pertenece a esta segunda y exigente categoría: la de las obras que se convierten en instrumentos cotidianos de trabajo.

La obra cumple una función particularmente valiosa: transforma un conjunto vasto y disperso de decisiones judiciales de tres países en una herramienta ordenada, inteligible y de consulta inmediata. Mediante un cuidadoso sistema alfabético de voces, identifica los asuntos, individualiza las decisiones y pone ante el lector el fragmento jurisprudencial en el que se encuentra formulado el criterio relevante.

La aparente sencillez del método no debe ocultar la magnitud de la tarea. Seleccionar jurisprudencia exige conocerla; clasificarla supone comprenderla; y asignar a cada extracto una voz que permita encontrarlo requiere, además, discernir cuál es la cuestión jurídica que verdaderamente resuelve. El resultado no es una acumulación de citas, sino una arquitectura de conceptos construida a partir de las palabras de los tribunales.

Basta observar algunas de sus entradas. Bajo expresiones como "Barreras del recurso de anulación", "Bases de la impugnación vía anulación" o "Bases del arbitraje", el lector encuentra la identificación precisa de la providencia y, a continuación, el pasaje que condensa la posición judicial. En pocos instantes puede establecer, por ejemplo, cuáles son los límites que separan el recurso de anulación de una nueva instancia, o qué cargas de claridad, suficiencia y correspondencia argumentativa recaen sobre quien impugna un laudo.

Esa forma de organizar el conocimiento convierte el libro en un instrumento de excepcional utilidad práctica. El árbitro podrá verificar rápidamente la manera en que los tribunales han delimitado una institución; el abogado

litigante encontrará apoyo para construir o contrastar una argumentación; las partes y sus asesores podrán comprender mejor el alcance de las reglas que gobiernan el proceso; y los estudiantes tendrán acceso directo al lenguaje mediante el cual la jurisprudencia da contenido concreto a las categorías aprendidas en el aula.

Por supuesto, ningún extracto sustituye la lectura integral de una providencia cuando el análisis del caso así lo exige. Pero esta obra cumple una función previa que resulta decisiva: señala el camino, identifica la fuente y sitúa ante los ojos del lector el núcleo de la decisión. En un entorno jurídico caracterizado por la dispersión de información, esa capacidad de selección constituye una forma superior de utilidad.

Otro de los mayores méritos de la obra reside en el equilibrio con el cual incorpora decisiones de Colombia, España y México. La presencia sustancial de jurisprudencia procedente de los tres países ofrece una perspectiva comparada auténtica, que permite advertir coincidencias, contrastes y matices entre sistemas pertenecientes a una tradición jurídica común. Ese enfoque resulta especialmente fecundo en el arbitraje, disciplina naturalmente abierta a la circulación de conceptos y experiencias entre jurisdicciones. El lector puede reconocer problemas compartidos, identificar soluciones convergentes y examinar las respuestas particulares que los tribunales de cada país han elaborado. Esto, además, convierte a la obra en material de consulta en toda Hispanoamérica y más allá.

La obra expresa, asimismo, las singulares cualidades de su autor. Hernando HERRERA MERCADO posee un conocimiento excepcionalmente amplio del derecho y una reconocida capacidad para hacer comprensibles ideas muy complejas, como lo hizo durante años desde los micrófonos de Caracol Radio. Su trayectoria vinculada al arbitraje es excepcional: la dirección de instituciones arbitrales, la participación en organismos nacionales e internacionales, el ejercicio como árbitro en un número extraordinario de controversias y la creación de programas académicos dedicados a la formación especializada en esta materia. Esa experiencia explica la seguridad con la que el autor reconoce, dentro de una masa formidable de jurisprudencia, aquello que resulta verdaderamente útil para el profesional y para el estudiante.

Como decano y profesor del curso de Proceso Arbitral de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, he tenido además el privilegio de incorporar su magisterio a mis clases. En ellas, su experiencia profesional, su dominio de las instituciones jurídicas y su capacidad para explicar los problemas más complejos han enriquecido de manera extraordinaria la formación de nuestros estudiantes.

Definiciones jurisprudenciales en materia arbitral refleja esa combinación poco frecuente de experiencia, erudición, claridad y sentido práctico. Es una obra de consulta, pero también de comprensión; una recopilación, pero, ante todo, una ordenación inteligente y accesible del conocimiento jurisprudencial comparado.

El Grupo Editorial Ibáñez entrega así a la comunidad jurídica una herramienta invaluable, destinada a acompañar el trabajo de árbitros, abogados, partes, académicos y estudiantes. Un libro que no se limita a reunir jurisprudencia: la selecciona, la organiza y la convierte en conocimiento inmediatamente utilizable.

Palabras del autor Hernando Herrera Mercado

El insomnio ha sido históricamente catalogado como una afección preocupante, soslayándose por completo que tal fenómeno también posee un cierto carácter benéfico. Seguramente sobre sus complicaciones se han diagnosticado y escrito centenares de párrafos de autoría médica, y frente a los cuales no voy a polemizar, mucho menos premunido de la condición de mero abogado no habilitado para menoscabar los criterios de la ciencia propia de los galenos. Pero si me reservaré el privilegio, de dignificar el insomnio -o la llamada vigilia no forzada-, como catalizador excepcional que propicia la creatividad intelectual.

De lo anterior parto, porque en esas horas, en las que el resto del planeta pernota y escapa de las tareas del ajetreo laboral, se puede originar un especial entorno para dar cuenta, sin distracción alguna, del pensamiento recursivo, del divergente, o del creativo. Justamente, nos centraremos en ello, toda vez que la presente publicación es hija fidedigna de esa instancia. Hija del insomnio, hija del silencio, hija del aislamiento de la madrugada, y de la paz que discurre en esas horas que ordinariamente se destinan al reposo.

Dicho lo anterior, sigamos avanzando en lo cognitivo. Diría que esta publicación, también, es hija del deseo. El obsesivo deseo de hacer visible la necesaria complementariedad entre el arbitraje y la llamada justicia ordinaria (campos en los que por fortuna profesional he tenido la posibilidad de interactuar). Exhibiéndolos, entonces, no como entes excluyentes, sino como mecanismos que están en permanente simbiosis. Lejos de competir, evidenciamos una clara sinergia entre ambos sistemas, e incluso, si se quiere, una estrecha relación de colaboración que desemboca en su mutuo enriquecimiento doctrinario. Desde esa perspectiva, se solidifica la aplicación del derecho, y en consecuencia, se otorga mayor seguridad jurídica a la resolución de controversias. Tan provechosa interrelación, hace que el arbitraje aporte especialización técnica, flexibilidad y rapidez a la resolución de disputas; y que los jueces desempeñen una tarea indispensable para darle al arbitraje, mediante el despliegue de la figura de la llamada asistencia judicial o auxilio judicial (y que se puede dar en los eventos de nombramientos de

árbitros, cumplimiento de medidas cautelares, revisión de laudos arbitrales vía el recurso de anulación o del amparo constitucional-, mayor solidez.

En esa precisa línea conceptual, esta obra pretende eliminar esa falsa dicotomía o rivalidad entre el arbitraje y la justicia ordinaria, exhibiendo un campo en el cual sus dinámicas operativas no se excluyen, sino que conviven en una relación de profunda complementariedad, interactuando como dos engranajes esenciales de un mismo motor. Ciertamente, aunque bien se puede decir que los árbitros dictan resoluciones definitivas, la excepcional intervención de las cortes ordinarias al conocer de la impugnación contra el laudo, o para garantizar la ejecución de lo decidido en el arbitraje, ha originado otra rica doctrina que ha delineado el arbitraje.

En tal medida, la llamada jurisprudencia sobre el arbitraje, ha traído la estandarización de criterios de la intervención judicial en torno a tal figura, establecido fronteras claras de los recursos contra laudos, y originado precedentes que han aportado mayor predictibilidad al arbitraje. Todo lo que, volvámoslo a decir, ha incrementado la seguridad jurídica del ecosistema arbitral. De allí, evidentemente, que podamos acuñar el termino de "jurisprudencia arbitral", y definirlo como un conjunto de criterios, principios e interpretaciones jurídicas emanadas de los tribunales judiciales sobre el arbitraje, y cuyo conocimiento resulta de obligatorio conocimiento para quienes vivimos imbuidos en el mundo del arbitraje en aras de darle mayor firmeza, consistencia y estabilidad. Ciertamente, toda vez que con la emisión del laudo no se agota del todo la resolución de la controversia sometida a conocimiento de los árbitros, reservándose su eventual revisión o ejecución a los jueces, convendremos en que resulta oportuno que resulta imperativo profundizar en el dicho judicial sobre el arbitraje, y como lo intenta hacer esta obra, presentar en un solo cuerpo, de forma organizada, las nociones arbitrales emanadas por los jueces. Esa es, claramente, en síntesis, la razón de esta publicación. Publicación, que como antes se manifestó, surgió del insomnio, y que pretende mostrar los vasos comunicantes entre el arbitraje y los tribunales estatales. Para ello, ya en lo que hace de la metodología, este libro es igualmente un ejercicio de clasificación. Esto es, buscar ordenar y organizar conceptos, que aquí se concretan mediante categorías arbitrales lógicas establecidas por el suscrito, a fin de facilitar la comprensión, análisis y aplicación por los expertos en el tema arbitral de los pronunciamientos arbitrales sobre la materia. Por ello, el presente escrito compendia, si se quiere, un estructurado ejercicio de "taxonomía jurídica", entendido como ejercicio de clasificación y ordenamiento, en aras, de hacer materia de gran conocimiento las más preclaras nociones arbitrales surgidas de las cortes.

El resultado está a la vista de todos: un ambicioso diccionario arbitral, surgido del hallazgo, análisis y cotejo de centenares de sentencias y pronunciamientos emanados por tribunales y jueces de tres países de alta cultura jurídica, como lo son: Colombia, España y México. Para tal propósito, se revisaron un muy grueso número de pronunciamientos que se decantan en las más de novecientas páginas que posee esta publicación, y que aterrizan en más de 1.450 nociones arbitrales que se exponen a continuación. Para rematar, señalaría que gracias a por nuestra experiencia arbitral, y en consecuencia luego de tantas jornadas y trámites cursados, que esta obra será de utilidad, y, por sobre todo, servirá de herramienta en los diversos roles del arbitraje (a árbitros, secretarios o litigantes), precisamente a fin de seguir consolidando y preservando nuestro arbitraje en los foros nacionales e internacionales. Por último, quiero agradecer a los doctores Fabricio Mantilla y Ana María Mahecha su revisión de estos textos.

Miami, Estados Unidos, julio de 2026

LISTADO DE DECISIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA ARBITRAJE

A

Abstención de fijar agencias en derecho a pesar de declarar el recurso de anulación infundado–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 52930. Colombia.

Acceso a la justicia permanente y la arbitral–Sentencia C-060/01. Corte Constitucional. Colombia.

Acceso a la justicia y mecanismos alternos–Sentencia C-242/97. Corte Constitucional Colombia.

Acción de tutela contra centros de arbitraje–Sentencia T-783/13. Corte Constitucional. Colombia.

Acción de tutela contra laudo internacional y la inaplicabilidad de los requisitos especiales de procedencia. Sentencia T-354/19. Corte Constitucional. Colombia.

Acción de tutela contra laudo arbitral. Sentencia SU103/22. Corte Constitucional. Colombia.

Acción de tutela o amparo constitucional contra laudo arbitral. Sentencia SU.033/18. Corte Constitucional. Colombia.

Aclaración del laudo–Sentencia No. 3/2012–STSJ ICAN 1033/2012.Tribunal Superior de Canarias. España.

Acreditación de indebido análisis probatorio arbitral–Sentencia T-058/09. Corte Constitucional. Colombia.

Acreditación de independencia de los árbitros frente a las partes–Sentencia No. 49/2020–STSJ M 9479/2020. Tribunal Superior de Madrid. España.

Acreditación de la violación de congruencia del laudo arbitral–Sentencia No. 21/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

B

Barreras del recurso de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020160013800 (57.785). Colombia.

Bases de la impugnación vía anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2015-00148-00 (55.477). Colombia.

Bases del arbitraje – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2007-00061-00(34543). Colombia.

Bases del deber de información – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2015-00148-00 (55.477). Colombia.

Buena fe en el arbitraje. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

C

Caducidad como causal de anulación a pesar de mediar declaratoria de nulidad absoluta del contrato–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2018-00011-00 (60716). Colombia.

Caducidad de la acción como causal de anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 52556. Colombia.

Caducidad de la anulación–Sentencia 27/2025–STSJ M 15115/2025. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. España.

Caducidad de la ejecución del laudo arbitral. Precedente, Registro 33671. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Caducidad del arbitraje–Sentencia 15/2023–STSJ AND 6815. Tribunal Superior de Andalucía. España.

Calidad de parte y de tercero en el proceso arbitral–Sentencia C-170/14. Corte Constitucional. Colombia.

Campo de acción de la anulación–Sentencia No. 89/2013. Tribunal Superior de Madrid. España.

Campo de acción de la anulación- Sentencia No. 73/2013. Tribunal Superior de Madrid. España.

Campo de acción del principio de congruencia en el arbitraje–Sentencia No. 27/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Campo de acción del recurso de anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2003-00062 01 (25811). Colombia.

Canon de control de la motivación de los laudos – Sentencia No. 13/2022. Tribunal Superior de Canarias. España.

D

Deber de imparcialidad del árbitro–Sentencia No.28/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Deber de los tribunales de arbitramento de respetar los precedentes judiciales–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020160013 8-00 (57.785). Colombia.

Deber de relevación de los árbitros–Sentencia No. 49/2020–STSJ M 9479/2020. Tribunal Superior de Madrid. España.

Deber de revelación del árbitro- Tesis aislada, Registro 162067. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Deber legal de motivación de los laudos arbitrales- Sentencia No. 65/2021. Tribunal Constitucional. España.

Deberes de motivación del laudo arbitral – Sentencia No. 20/2018–STSJ M 3981. Tribunal Superior de Madrid. España.

Deberes de revelación y de información exigibles a las instituciones llamadas a administrar el arbitraje–Sentencia No. 49/2020–STSJ M 9479/2020. Tribunal Superior de Madrid. España.

Deberes del árbitro–Sentencia No. 47/2022–STSJ CAT 10454/2022. Tribunal Superior de Cataluña. España.

Debida argumentación del laudo arbitral–Sentencia No. 85/2018 – STSJ CAT 9712/2018- Tribunal Superior de Cataluña. España.

Debida motivación del laudo arbitral–Sentencia No. 63/2021–STSJ M 10765/2021. Tribunal Superior de Madrid. España.

E

Efecto de la anulación–Sentencia No. 21/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Efecto de la exclusión de la jurisdicción por pactar arbitraje–Sentencia No. 01/2026–STSJ GAL 769/2026. Tribunal Superior de Galicia. España.

Efecto de la expiración del plazo para laudar–Sentencia No. 75/2014. Tribunal Supremo de Cataluña. España.

Efecto de la indebida valoración probatoria en el proceso arbitral–Sentencia No. 19/2012–STSJ M 6899/2012. Tribunal Superior de Madrid. España.

Efecto de la renuncia tácita al arbitraje sobre la controversia. Amparo directo en revisión 6916 / 2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Efecto de la similitud argumentativa en anulación y tutela–Sentencia T-608 de 1998. Corte Constitucional. Colombia.

Efecto de las instancias de arreglo anteriores al arbitraje–Sentencia No. 15/2012–STSJ CV 3915/2012. Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. España.

Efecto de las previsiones contractuales pactadas como requisito previo para la convocatoria de arbitraje – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2008-00032-00 (35288). Colombia.

Efecto de los requisitos previos a la realización de arbitraje–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2008-00032-00(35288). Colombia.

Efecto de no sustentar causales de anulación invocadas–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020030003301. Colombia.

F

Factores de la competencia arbitral – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 10012326000200100310l (20.472). Colombia.

Facultad de convenir arbitraje en curso de proceso judicial. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México

Facultades de los árbitros–Sentencia C-378/08. Corte Constitucional. Colombia.

Facultades de los árbitros–Sentencia No. 89/2013. Tribunal Superior de Madrid. España.

Facultades de los árbitros en medidas cautelares–Sentencia No. C-431/95. Corte Constitucional. Colombia.

Facultades de los árbitros. Contradicción de tesis 8/2015. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Facultades del juez de la anulación–Sentencia No. 22/2024–STSJ MADRID 5322/2024. Tribunal Superior de Madrid. España.

Facultades del juez de la anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2015-00060-00(53585). Colombia.

Facultades del Juez que conoce la anulación del laudo–Sentencia T-136/03. Corte Constitucional. Colombia.

Facultades que comprende la designación judicial de árbitro–Sentencia No. 1/2025–STSJ CL 1193/2025. Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. España.

Falta de agotamiento de etapas previas de arreglo directo – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2008-00032-00 (35288). Colombia.

G

Garantía de audiencia en el procedimiento arbitral. Contradicción de tesis 7790/2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Garantía de defensa y contradicción en el arbitraje- Sentencia No. 3/2026–ATSJ 9/2026. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. España.

Garantía de imparcialidad e independencia del deber de información–Sentencia C-305/13. Corte Constitucional. Colombia.

Garantía del debido proceso en el proceso arbitral–Sentencia T-800/04. Corte Constitucional. Colombia.

Garantías en el arbitraje–Sentencia No. 29/2019–STSJ M 6988/2019. Tribunal Superior de Madrid. España.

Garantías en el proceso arbitral–Sentencia 77/2021- STSJ M 10535/2021. Tribunal Superior de Madrid. España.

Gastos de funcionamiento del arbitraje. Amparo en revisión 755/2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Grado de afección del orden público en el laudo. Amparo en revisión 755/2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

H

Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento como causal de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 110010326000201600138-00 (57.785). Colombia.

Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido como causal de anulación (antes de la ley 1563 de 2012) – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 12202. Colombia.

Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo como causal de anulación– Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 41001-23-31-000-2000-9334-01(19334). Colombia.

Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso como causal de anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 52556. Colombia.

Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso como causal de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2011-00064-01. Colombia.

Habilitación arbitral – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020070001200. Colombia.

Habilitación convencional para el arbitraje–Sentencia C-242/97. Corte Constitucional. Colombia.

Habilitación general a los árbitros–Sentencia C-305/13. Corte Constitucional. Colombia.

I

Identidad del procedimiento para el reconocimiento y la ejecución de laudos. Contradicción de tesis 8/2015. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Identidad objetiva de las pretensiones en el arbitraje. Sentencia No.410/2010. Tribunal Supremo. España.

Idoneidad del recurso de anulación para impugnar el laudo–T-972/07. Corte Constitucional. Colombia.

Igualdad de las partes en el trámite arbitral. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Igualdad de trato en el arbitraje como causa de nulidad del laudo. Tesis aislada, Registro 2025648. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Imparcialidad de los árbitros–Sentencia No. 21/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Imparcialidad e independencia de las instituciones arbitrales–Sentencia No. 63/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Imperium de los árbitros. Contradicción de tesis 8/2015. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Implicaciones de la escogencia del arbitraje–Sentencia No. 11/2020–STSJ M 3140/2020. Tribunal Superior de Madrid. España.

Implicaciones de la renuncia a la jurisdicción en materia arbitral. Contradicción de tesis 7790/2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Implicaciones de la representación de abogado en el arbitraje–Sentencia No. 57/2021-STSJ M 9205/2021. Tribunal Superior de Madrid. España.

J

Juicio de anulación del laudo arbitral–Sentencia No. 3/2025–STSJ CLM 1168/2025. Tribunal Superior de Castilla la Mancha. España.

Juicio de congruencia en materia arbitral (antes de la ley 1563 de 2012)–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020030000501. Colombia.

Juicio de la anulación–Sentencia No. 88/2013. Tribunal Superior de Madrid. España.

Juicio especial de ejecución de laudo arbitral. Contradicción de tesis 250/2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Justiciabilidad de los laudos arbitrales cuando un sujeto de la administración pública afirma que se viola el orden público. Solicitud Facultad de atracción 30/2017. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Justificación del arbitraje. Amparo en revisión 755/2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Justificación del arbitraje. Tesis aislada, Registro 2022900. Pleno En Materia Civil del Primer Circuito. México.

Justificaciones para la improcedencia de la anulación del laudo–Sentencia No. 63/2021–STSJ M 10765/2021. Tribunal Superior de Madrid. España.

L

Labor del juez de la anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 32.903. Colombia.

Laudo arbitral agota la actuación de los árbitros. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Laudo arbitral con falta de congruencia–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2002-0010-01(22193). Colombia.

Laudo arbitral con incongruencia citra petita–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2008-00032-00(35288). Colombia.

Laudo arbitral contrario al orden público–Sentencia No. 33/2019–STSJ GAL 7455/2019. Tribunal Superior de Galicia. España.

Laudo arbitral contrario al orden público. Amparo directo en revisión 71/2014. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Laudo arbitral e incongruencia – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2002-0010-01(22193). Colombia.

Laudo arbitral equiparable a sentencia judicial. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Laudo arbitral y comparación de la suspensión de sus efectos en los dos recientes regímenes arbitrales – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2015-00148-00 (55.477). Colombia.

Laudo arbitral. Contradicción de tesis 8/2015. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

M

Marco de acción de la anulación de laudo arbitral–Sentencia No. 46/2019–STSJM 12788/2019. Tribunal Superior de Madrid. España.

Marco de acción de la función del juez de la anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2012-00087-00(45791). Colombia.

Marco de acción del principio de congruencia en el arbitraje – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2007-00061-00(34543). Colombia.

Marco de acción del principio *Kompetenz-Kompetenz*–Sentencia SU500/15. Colombia.

Marco de la anulación del laudo–Sentencia No. 29/2012 -STSJ CAT 5856/2012. Tribunal Superior de Cataluña. España.

Marco de la tutela contra laudos arbitrales–Sentencia T-466/11. Corte Constitucional. Colombia.

Marco del arbitraje–Sentencia–T-443/08. Corte Constitucional. Colombia.

Margen de configuración legal del proceso arbitral–Sentencia C-572A/14. Corte Constitucional. Colombia.

Margen de interpretación arbitral–Sentencia T-466/11. Corte Constitucional. Colombia.

Materia arbitral convenida por las partes–Sentencia No. 19/2012–STSJ M 6899/2012. Tribunal Superior de Madrid. España.

Materia arbitral ligada a lo transigible–Sentencia No. T-057/95. Corte Constitucional. Colombia.

N

Naturaleza contractual del convenio arbitral–Sentencia No. 73/2013. Tribunal Superior de Madrid. España.

Naturaleza convencional del arbitraje. Tesis aislada, Registro 2020940. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Naturaleza de interpretación prejudicial andina – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2016-00063-00 (56845) . Colombia.

Naturaleza de la anulación–Sentencia No. 3/2012–STSJ ICAN 1033/2012. Tribunal Superior de Canarias. España.

Naturaleza de la función arbitral. Contradicción de tesis 8/2015. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Naturaleza de la función del árbitro–Sentencia C-242/97. Corte Constitucional. Colombia.

Naturaleza de la intervención judicial en el arbitraje–Sentencia No. 85/2018 – STSJ CAT 9712/2018- Tribunal Superior de Cataluña. España.

Naturaleza de las causas de anulación judicial de un laudo–Sentencia No. 43/2023–STSJ Madrid 13587/2023. Tribunal Superior de Madrid. España.

Naturaleza de los errores in procedendo–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 17.369. Colombia.

Naturaleza de los motivos de la anulación–Sentencia No. 3/2014. Tribunal Superior de Asturias. España.

Naturaleza de los recursos contra el laudo–T-408 de 2010. Corte Constitucional. Colombia.

O

Objeción a institución arbitral–Sentencia No. 26/2012–STSJ M 9664/2012. Tribunal Superior de Madrid. España.

Objetivo de la regulación arbitral. Registro: 30473149–Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Objetivo del deber de información–Sentencia C-305/13. Corte Constitucional. Colombia.

Objetivos de la anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020080003100 (35.287). Colombia.

Objeto de examen en la anulación–Sentencia No. 51/2021–STSJ 7799/2021. Tribunal Superior de Madrid. España.

Objeto de la anulación–Sentencia No. 54/2021- STSJ M 9022/2021. Tribunal Superior de Madrid. España.

Objeto del recurso de anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2007-00063-00(34594). Colombia.

Obligación de los árbitros–Sentencia No. 23/2012–STSJ M 9715/2012. Tribunal Superior de Madrid. España.

Obligación de motivar la decisión arbitral–Sentencia No. 29/2019–STSJ M 6988/2019. Tribunal Superior de Madrid. España.

Obligación de motivar los fallos en derecho y en conciencia–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 15.097. Colombia.

Obligación de presentar la solicitud de remisión al arbitraje con la contestación de la demanda. Amparo directo en revisión 6916 / 2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

P

Pacto arbitral como manifestación del principio de voluntariedad del arbitramento–Sentencia T-511/11. Corte Constitucional. Colombia.

Pacto arbitral e inexistencia–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556). Colombia.

Pacto arbitral e inoponibilidad – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556). Colombia.

Pacto arbitral y nulidad absoluta – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556). Colombia.

Pacto arbitral y nulidad relativa–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556). Colombia.

Pacto arbitral y principio de planeación del contrato estatal – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 5001-23-31-000-1998-00135-01(17859). Colombia.

Pago de honorarios de los árbitros en dos fases–C-451 de 1995. Corte Constitucional. Colombia.

Papel del arbitraje–Sentencia T-140/14. Corte Constitucional. Colombia.

Parámetros de la decisión arbitral. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Parámetros para el juicio del árbitro–Sentencia No. 43/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Parámetros para surtir notificaciones en el proceso arbitral–Sentencia No. 17/2022 -STSJ M 5815/2022. Tribunal Superior de Madrid. España.

Particularidades del arbitraje. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Q

Quebrantamiento del concepto de orden público atribuido a desequilibrio en el arbitraje–Sentencia No. 22/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Quebrantamiento del deber de motivación en el arbitraje–Sentencia 50/2022. Tribunal Constitucional. España.

Quebrantamiento del deber de revelación de uno de los árbitros–Sentencia 11/2026- STSJ M 5458. Tribunal Superior de Madrid. España.

Quebrantamiento del precedente en un laudo–Sentencia T-186/15. Colombia.

Quebrantamiento del principio de igualdad en el arbitraje–Sentencia No. 29/2012 -STSJ CAT 5856/2012. Tribunal Superior de Cataluña. España.

R

Rasero de análisis para el juez de la anulación o de la ejecución del laudo. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Rasgos distintivos del laudo arbitral. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Razón del arbitraje. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

Razón del recurso de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 110010326000 2006 00012 00 (32.514). Colombia.

Razonabilidad y coherencia de la decisión arbitral–Sentencia T-244 de 2007. Corte Constitucional. Colombia.

Razonamiento para la mayor rigidez de imposición de costas en la anulación arbitral–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2001-0027-01 (20.356). Colombia.

Reafirmación de la autonomía de la voluntad en el arbitraje–Sentencia No. 18/2022- STSJ M 5894/2022. Tribunal Superior de Madrid. España.

Rechazo a alegación de inexistencia de convenio arbitral–Sentencia No. 1/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Rechazo al reconocimiento del laudo arbitral. Conflicto Competencial 207/2018. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Rechazo de la anulación–Sentencia No. 63/2021–STSJ M 10765/2021. Tribunal Superior de Madrid. España.

Rechazo de la caducidad como causa de anulación del laudo por violación del orden público. Amparo en revisión 755/2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

S

Saneamiento de la ocurrencia de vicio en la actuación arbitral–Sentencia No. 22/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Selección del secretario de la lista del centro de arbitraje en el que se adelanta el procedimiento arbitral–Sentencia C-305/13. Corte Constitucional. Colombia.

Semejanzas entre la decisión judicial y la arbitral–Sentencia No. 12/2024– STSJ CL 5005/2024. Tribunal Superior de Castilla y León. España.

Sentido de la anulación frente a laudo arbitral–Sentencia No. 2/2025–STSJ MU2243/20265. Tribunal Superior de Justicia de Murcia. España.

Sentido de la anulación.–Sentencia No. 27/2022- STSJ M 10137/2022. Tribunal Superior de Madrid. España.

Sentido de la revisión jurisdiccional de los laudos arbitrales–Sentencia No. 18/2022- STSJ M 5894/2022. Tribunal Superior de Madrid. España.

Sentido de las causas de anulación de laudo arbitral–Sentencia No.56/2021- STSJ M 9207/2021. Tribunal Superior de Madrid. España.

Sentido del arbitraje. Conflicto Competencial 207/2018. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Sentido del laudo. Conflicto Competencial 207/2018. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México

Separabilidad del convenio arbitral respecto del contrato principal–Sentencia No. 11/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Similitudes entre el laudo arbitral y la sentencia judicial–Sentencia C-378/08. Corte Constitucional. Colombia.

Similitudes y diferencias entre la función arbitral y la función judicial. Precedente, Registro 26081. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México.

T

Taxatividad de la anulación de laudos – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 15623. Colombia.

Taxatividad de la anulación. Sentencia No. 16/2012–STSJ CV 3916/2012. Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. España.

Taxatividad de los motivos de anulación–Sentencia No.78/2014. Tribunal Superior de Cataluña. España.

Taxatividad del recurso de anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 17797. Colombia.

Técnica del recurso de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2017-00007-00 (58.527). Colombia.

Terminación anormal del proceso arbitral–Sentencia No. 23/2012–STSJ M 9715/2012. Tribunal Superior de Madrid. España.

Terminación del procedimiento arbitral por decisión del árbitro–Sentencia No. 23/2012–STSJ M 9715/2012. Tribunal Superior de Madrid. España.

Terminación del trámite arbitral por transacción. Amparo en revisión 755/2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Terminación normal del proceso arbitral–Sentencia No. 23/2012–STSJ M 9715/2012. Tribunal Superior de Madrid. España.

Terminación por mutuo acuerdo del procedimiento arbitral. Sentencia No. 23/2012–STSJ M 9715/2012. Tribunal Superior de Madrid. España.

Término para la interposición de la anulación–Sentencia No. 39/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

Thema decidendi en el arbitraje–Sentencia No. 39/2014. Tribunal Superior de Madrid. España.

V

Validez de la renuncia al pacto arbitral luego de emitido el laudo–Sentencia No.410/2010. Tribunal Supremo. España.

Validez del convenio arbitral contenido en un contrato de adhesión – Sentencia No. 20/2018–STSJ M 3981. Tribunal Superior de Madrid. España.

Validez del pacto arbitral – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 18.673. Corte Constitucional. Colombia.

Valor de precedentes judiciales en laudos arbitrales – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020160013800 (57.785). Colombia.

Valoración de la causa litigiosa por los árbitros–Sentencia No. 3/2014. Tribunal Superior de Asturias. España.

Valoración de las causas de anulación del laudo–Sentencia No.47/2022–STSJ M 15598/2022. Tribunal Superior de Madrid. España.

Valoración de pruebas en arbitraje y configuración de violación al debido proceso–Sentencia T-466 de 2011. Corte Constitucional. Colombia.

Valoración del procedimiento arbitral. Contradicción de tesis 7790/2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

Valoración probatoria en la anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 17797. Colombia.

Ventajas de la justicia arbitral–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020030004501. Colombia.

Verificación del cumplimiento del derecho de audiencia y de otras garantías en el procedimiento arbitral. Amparo en revisión 903/2023. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México.

EXTRACTOS DE DECISIONES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA ARBITRAL

A

Abstención de fijar agencias en derecho a pesar de declarar el recurso de anulación infundado. –Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 52930. Colombia."En consecuencia, esta causal no prospera y, por lo mismo, el recurso extraordinario tampoco, por lo cual la entidad recurrente habrá de ser condenada en costas, de conformidad con lo normado en el inciso tercero del artículo 165 del Decreto 1818 de 1998. No obstante, habida consideración de que el consorcio convocante no actuó dentro del trámite del recurso extraordinario de anulación, la Subsección se abstendrá de fijar agencias en derecho. Al respecto, la Sala ha considerado: "Pues bien, al Municipio de San Juan de Pasto y a ASMEPAS, en principio, les correspondía ejercer su defensa en relación con el recurso extraordinario de anulación que interpuso el Consorcio Promotor Peldaños y Construcciones, para lo cual el ordenamiento jurídico vigente prevé una única oportunidad procesal con tal propósito, esto es la presentación de los respectivos alegatos de conclusión; sin embargo, como se advirtió dentro del presente fallo, las entidades que integraron la parte convocada no hicieron manifestación alguna en relación con el aludido recurso extraordinario de anulación y no adelantaron actuación alguna durante su trámite procesal. En ese sentido, por elemental sustracción de materia, la Sala se releva de analizar la calidad de las alegaciones efectuadas por los apoderados de las entidades que integraron la parte convocada y, por consiguiente, se concluye que no hay lugar dentro del presente asunto a la fijación de agencias en derecho a favor de la parte convocada y a cargo de la parte convocante."

Acceso a la justicia permanente y la arbitral–Sentencia C-060/01. Corte Constitucional. Colombia. "En la medida en que toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia, estos estímulos legales al uso de los mecanismos alternativos de solución de los conflictos no pueden llegar al extremo de bloquear o afectar de manera desproporcionada la posibilidad de una persona de llevar su controversia ante los jueces".

ACCESO A LA JUSTICIA Y MECANISMOS ALTERNOS–SENTENCIA C-242/97. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "En forma excepcional, el Constituyente de 1991 decidió ampliar el ámbito orgánico y funcional de administración de justicia del Estado hacia otros órdenes, autorizando a los particulares solucionar las controversias a través de personas que revestidas transitoriamente de la función de administrar justicia, actúen en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para que profieran fallos en derecho o en equidad, en los términos que la misma ley señale."

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA CENTROS DE ARBITRAJE–SENTENCIA T-783/13. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "La acción de tutela contra los actos del CAC solo procederá excepcionalmente cuando se compruebe que las etapas del trámite arbitral o el recurso de anulación no son suficientes para proteger los derechos, o cuando quiera que se presente un perjuicio irremediable en las condiciones expuestas en esta providencia. Permitir que el amparo constitucional proceda maquinalmente ante cualquier decisión del centro de arbitraje representaría una barrera al acceso a la administración de justicia, que haría pasar por alto los principios de voluntariedad y habilitación propio de estos trámites, de acuerdo a los cuales las partes delegan a los árbitros para que estos decidan el alcance de todos los aspectos del pacto arbitral y resuelvan el conflicto. En lo que respecta a este asunto, teniendo en cuenta las fases y poderes consignados en la ley 1563 de 2012, se debe insistir en que la naturaleza de las funciones del CAC es de apoyo administrativo y que, en virtud del artículo 116 superior, bajo ninguna circunstancia puede ejercer funciones de carácter judicial."

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL. SENTENCIA SU103/22. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "Debido a lo anterior, se ha considerado que la procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales está sometida, en esencia, a los mismos requisitos de procedibilidad que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado respecto de las providencias judiciales. No obstante, la Corte ha sido enfática en señalar que la equivalencia entre laudos arbitrales y providencias judiciales no es absoluta. Esto, por cuanto no puede desconocerse la voluntad de las partes de apartarse de la jurisdicción ordinaria para someterse a la decisión de un tribunal de arbitramento y aceptar anticipadamente sujetarse a lo que allí se adopte[124]. Por ende, se ha determinado que, si bien en principio resultan aplicables a los laudos arbitrales las mismas causales, generales y específicas, para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, su examen debe ser más riguroso y estricto. En

este sentido, la sentencia SU-500 de 2015 señaló ""La razón para que, tratándose de acciones de tutela dirigidas contra laudos arbitrales, se predique esa lectura particular y más restrictiva de los requisitos de procedibilidad establecidos para la acción de tutela contra providencias judiciales, reside, fundamentalmente, en la consideración de que se está en un escenario en el cual se ha expresado la voluntad de los sujetos de apartarse de la jurisdicción ordinaria y someterse a la decisión que adopte un tribunal de arbitraje."

Acción de tutela contra laudo internacional y la inaplicabilidad de los requisitos especiales de procedencia. Sentencia T-354/19. Corte Constitucional. Colombia. "Frente a las acciones de tutela que se presenten contra laudos proferidos en Colombia con derecho sustancial extranjero, no es posible aplicar los requisitos de procedibilidad especiales propios de la acción de tutela debido a que el único parámetro de control al cual el juez constitucional puede sujetar su análisis es el orden público internacional de Colombia y, al estar la violación de este último contemplada como una causal de anulación, se hace indispensable agotar previamente dicho recurso."

Acción de tutela o amparo constitucional contra laudo arbitral. Sentencia SU.033/18. Corte Constitucional. Colombia. "La equivalencia -material- que existe entre el laudo arbitral y la providencia judicial, activa de manera excepcional la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, los cuales puedan verse afectados por las decisiones emanadas y el procedimiento llevado a cabo por los tribunales de arbitramento."

Aclaración del laudo. Sentencia No. 3/2012–STSJ ICAN 1033/2012. Tribunal Superior de Canarias. España. "Ello no obstante en el caso de la estricta aclaración ha de excluirse por definición 'el cambio de sentido y espíritu del fallo, toda vez que el órgano judicial, al explicar el sentido de sus palabras o adicionar lo que falta, debe moverse en el marco interpretativo de lo anteriormente manifestado o razonado' (STC 55/2002, de 11 de marzo, y jurisprudencia allí citada o STC de 14-7-2011)."

Acreditación de indebido análisis probatorio arbitral–Sentencia T-058/09. Corte Constitucional. Colombia. "... se origina cuando el supuesto legal del cual se deriva la decisión arbitral no tiene sustento en el material probatorio allegado al proceso; o de manera arbitraria se niega la práctica de las pruebas necesarias para llegar a una decisión en derecho."

B

Barreras del recurso de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020160013800 (57.785). Colombia. "Como es bien sabido, más allá del parecer que tengan los demás sujetos procesales respecto de la forma de razonar del Tribunal Arbitral y de si se comparte o no el fondo o la forma como éste dejó plasmados sus planteamientos en el laudo correspondiente, lo cierto es que resulta contrario a la técnica —y, naturalmente también, a las finalidades y a las posibilidades— del recurso extraordinario de anulación entrar a rebatir los aspectos sustanciales de la decisión adoptada por el Tribunal, olvidando que en esta instancia sólo resulta procedente, en principio, alegar defectos constitutivos de errores in procedendo, en relación con la adopción o con el contenido del laudo atacado."

Bases de la impugnación vía anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2015-00148-00 (55.477). Colombia. "Así las cosas, la impugnación del laudo por la vía del recurso de anulación supone que se cimente en las causales previstas en la ley, pero además que se sustente clara y suficientemente, de forma tal que el juez de anulación no se encuentre compelido a realizar un esfuerzo adicional para tratar de deducir la causal que se aduce. 2.9.- De la carga de sustentación se desprende que el impugnante debe expresar las razones que le sirven de fundamento para acusar el laudo de incurrir en la causal o causales que alega. 2.10.- Por supuesto que las razones que indique el recurrente deben configurar la causal que aduce y por lo tanto la causal invocada será la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé. 2.11.- Conjugando todo lo que se acaba de expresar resulta que la sustentación del recurso no consiste en la sola indicación del texto legal que consagra una determinada causal, como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna o de varias de las causales enlistadas en la ley, se aduzcan argumentaciones que en verdad no configuran ninguna de las previstas por el legislador."

Bases del arbitraje – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2007-00061-00(34543). Colombia. "Algunas de las notas predominantes de esta institución para resolver en derecho conflictos derivados y originados en un contrato estatal, se pueden concretar en los siguientes enunciados a saber: *i)* Es un mecanismo de heterocomposición de conflictos, que nace del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, expresada de manera recíproca al momento de contratar o posteriormente a la celebración del contrato. *ii)* Dicho pacto habilita a particulares denominados árbitros para resolver un conflicto de manera temporal y limitada a la materia, razón por la cual se convierten transitoriamente en verdaderos jueces del asunto en concreto. *iii)* Las partes -salvo excepción legal- renuncian a hacer valer sus controversias ante la jurisdicción institucional (D. 1818/98, arts. 144 y 146). *iv)* La materia y extensión del conocimiento de los árbitros se encuentra delimitada por las partes, y por la ley, en tanto solo procede sobre conflictos de carácter particular y económico con carácter transigible de que conozca o pueda conocer la jurisdicción contencioso administrativa en virtud de la acción de que trata el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo (concordante con el art. 68 de la L. 80/93), con las restricciones previstas en el ordenamiento jurídico. v) Es una justicia administrada por particulares en única instancia, cuya decisión expresada en una providencia denominada laudo, obliga a las partes que a ella se sujetan para resolver sus discrepancias, en tanto aquel tiene la misma naturaleza y efectos de las sentencias proferidas por la jurisdicción. *vi)* El arbitramento, por esencia, no contempla una segunda instancia y, por ende, sobre la decisión proferida por el tribunal de arbitramento, no es posible, por regla general, replantear el debate acerca del fondo del proceso, con el fin de que sea examinado por otra autoridad. A manera de conclusión se puede señalar que el ordenamiento jurídico estableció el arbitramento como una opción alternativa a la jurisdicción contenciosa administrativa, para dirimir las controversias generadas a propósito de los contratos estatales, regida por unos procedimientos y trámites propios, que activan de manera libre y voluntaria las partes del mismo y al cual quedan sometidos una vez celebrado el respectivo pacto arbitral."

Bases del deber de información – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2015-00148-00 (55.477). Colombia. "6.9.- Por ende, cualquier aproximación al deber de informar debe tener lugar desde la perspectiva del principio que le sirve de sustento y que no es otro diferente que el acceso a la justicia y

las garantías judiciales, razón por la cual las aristas a ser desentrañadas de este abstracto deber han responder a la teleología objetiva que persiguió el legislador con la instauración de tal compromiso para árbitros y secretarios designados: proveer mayores garantías en las causas arbitrales. 6.10.- Por ello la Ley prescribe que, con base en la información comunicada, en el término de cinco (5) días siguientes a la aceptación de una designación las partes podrán presentar reparos de imparcialidad e independencia del árbitro y, por ende, solicitar que éste sea relevado, lo cual sucederá si los demás árbitros encuentran fundadas las razones que sustentan la petición de reemplazo o el árbitro cuestionado las aceptare. En casos donde se trata de árbitro único la ley estableció que la competencia para resolver lo pertinente recae sobre el Juez Civil del Circuito del lugar donde funcione el tribunal de arbitramento. 6.11.- Toma nota la Sala del alcance amplio que el legislador concedió a esta facultad con que cuentan las partes pues la misma comprende tanto aquellas causales de impedimentos, inhabilidades, prohibiciones y conflictos de intereses traídos por los Códigos General del Proceso o Disciplinario Único como otras circunstancias que a juicio de las partes pueda ser consideradas como "dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del árbitro", lo cual, además de marcar diametral diferencia con las jurisdicciones ordinaria y contenciosa administrativa, revalida el carácter voluntarista del arbitramento al conceder un mayor radio de acción a las partes del pleito para cuestionar a sus juzgadores. De ahí, también, la amplitud del deber de informar, pues el árbitro no solo está compelido a revelar aquello que pueda ser constitutivo de impedimento o conflicto de intereses, sino cualquiera otra cuestión más amplia que permita la formación del criterio de imparcialidad e independencia en las partes. 6.12.- Ahora bien, en cuanto a la extensión de lo que se debe informar, la ley enuncia que los árbitros deben comunicar: "si coincide o ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos arbitrales o judiciales, trámites administrativos o cualquier otro asunto profesional en los que él o algún miembro de la oficina de abogados a la que pertenezca o haya pertenecido, intervenga o haya intervenido como árbitro, apoderado, consultor, asesor, secretario o auxiliar de la justicia en el curso de los dos (2) últimos años. Igualmente deberá indicar cualquier relación de carácter familiar o personal que sostenga con las partes o sus apoderados", en suma, se trata de un deber de comunicar información relevante y ésta es tal cuando deviene en necesaria para permitir la formación de un juicio plausible sobre las calidades y/o condiciones del designado, la misma que en caso de ser omitida y posteriormente conocida hubiera movido a cualquier persona razonable ubicada en la posición de las partes a plantear reparos de independencia o imparcialidad sobre el árbitro en salvaguarda de sus intereses.

6.13.- Por ende, se trata de un deber cualificado, por cuanto de él depende en buena parte la estructuración de la imparcialidad e independencia del Tribunal, de ahí que la información puesta de presente por el designado deba ser veraz, auténtica y completa, siendo veraz cuando corresponde con la realidad, auténtica cuando coincide con la fuente de la que se ha tomado y completa cuando contiene todos los datos inherentes al asunto informado, sólo así partes e intervinientes podrán formarse una idea sobre las condiciones particulares del árbitro como persona idónea para dirimir la causa puesta a su conocimiento. 6.14.- Tal cuestión atañe, intrínsecamente, a la naturaleza del arbitraje donde particulares que, antes, durante y después del juzgamiento de una causa siguen gestionando por su cuenta negocios particulares, pueden ver cómo sus intereses como sujeto privado se enfrentan (o identifican estrechamente) con alguno de los de las partes de la contienda arbitral. En eventos como estos es conclusión obligada que la neutralidad y probidad del designado estarán seriamente en entredicho, pues nadie puede ser juez de una causa en la que le asista alguna suerte de interés. 6.15.- Constatando tal realidad del arbitraje la ley no agotó el deber de informar en el momento de la aceptación de la designación, pues el mismo se extendió a todo el proceso arbitral, estando los árbitros y secretario obligados a informar "cualquier circunstancia sobrevenida" que pueda generar dudas de imparcialidad o independencia, ante lo cual las partes pueden dar trámite a una petición de remoción del árbitro, en los mismos términos arriba precisados. 6.16.- Es por esta razón que la ley sanciona con rigor la omisión del deber de informar, pues a voces del inciso tercero del artículo 15 de la misma obra legislativa se erigió como causal autónoma de impedimento el no haber revelado información que el árbitro o secretario debió suministrar al tiempo de la aceptación de su designación, cuando ello quede establecido a lo largo del proceso, lo anterior sin perjuicio de las consecuencias que puedan tener lugar en cuanto a la validez del laudo arbitral que se dicte."

Buena fe en el arbitraje. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México. Las partes están obligadas a observar el principio de buena fe en todos sus actos e intervenciones en el curso de las actuaciones arbitrales y a colaborar con el tribunal arbitral en el desarrollo del arbitraje. El cumplimiento de este principio implica que las partes actúen de manera honesta y leal dentro del proceso arbitral.

C

Caducidad como causal de anulación a pesar de mediar declaratoria de nulidad absoluta del contrato–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2018-00011-00 (60716). Colombia. "Un entendimiento integral y armónico de las normas que regulan el proceso, concebido como una serie de fases sucesivas encaminadas a producir una sentencia, exige que los requisitos legales para producir una decisión de fondo se hallen satisfechos, aun en el evento en que el juez declare de oficio la nulidad absoluta del contrato. En efecto, desde la admisión de la demanda, el juez debe verificar si fue presentada en tiempo y podrá rechazarla si fue extemporánea (art 169 del CAPCA y 143 del CCA). Incluso puede declarar de oficio la caducidad en la sentencia, si la encuentra probada, aun cuando se hubiere admitido y tramitado el proceso hasta la fase del fallo (arts, 187 del CPACA y 164 del CCA). Así, aunque el artículo 87 del CCA y ahora el 141 del CPACA no hayan previsto como requisito para que el juez declare la nulidad absoluta del contrato, que no hubiere operado la caducidad, no significa que ese presupuesto procesal no deba ser satisfecho, para proferir una decisión en ese sentido. Omisión que se explica en que se trata de un presupuesto procesal, que se requiere para adoptar cualquier decisión de fondo. (...) Como la demanda no fue presentada en tiempo y, no obstante ello, el Tribunal Arbitral declaró la nulidad absoluta del contrato, esto es, decidió de fondo la controversia, se configura la causal alegada en el recurso."

Caducidad de la acción como causal de anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 52556. Colombia. "Si bien el arbitraje como mecanismo alterno de solución de conflictos se rige por las normas especiales de la materia, es claro que en tratándose de litigios en los cuales se encuentre de por medio un contrato estatal debe darse aplicación a las disposiciones procesales que de forma especial regulan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, es decir, el previsto en el artículo 141 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y esto es así porque las normas que rigen los términos de caducidad son de orden

público y de obligatorio cumplimiento para todos sus destinatarios, razón por la cual "no le es dado a los árbitros interpretar cosa contraria, ni mucho menos a las partes desconocer estas disposiciones cuando habiliten a los particulares a actuar como árbitros".[3] Así que entonces, en el curso del proceso la acción que se ejerza ante el Tribunal de Arbitramento se sustituye al juez ordinario por otro habilitado transitoriamente por las partes para administrar justicia, el cual si bien se encuentra regido por una normativa especial, deberá sujetarse a las disposiciones procesales especiales que en materia administrativa regulan los términos de caducidad. La caducidad de la acción se define como aquel fenómeno jurídico que implica la imposibilidad de formular ante la jurisdicción unas determinadas pretensiones por haber dejado transcurrir el término que perentoriamente había sido señalado por la Ley para ejercer la correspondiente acción. Tal como se señaló en líneas anteriores, las normas que establecen los términos de caducidad de las acciones son de orden público y por lo tanto de obligatorio cumplimiento frente a todos sus destinatarios, son irrenunciables y no son susceptibles de ser modificados por las partes. La caducidad se estructura por el sólo hecho de haber transcurrido el término previsto en la ley para ello y debe ser declarada por el juez ya sea a petición de parte o de oficio cuando aparezca que ella ha operado. Así las cosas, una vez se da el supuesto de hecho previsto por la ley para que se inicie la contabilización del término de caducidad, éste indefectiblemente empezara a correr sin que las partes puedan variarlo o modificarlo. Es de anotar en éste punto que previamente a la inclusión de la causal a la que se alude, la jurisprudencia contencioso administrativa consideraba que en aquellos eventos en los que se había proferido un laudo arbitral cuando ya había operado la caducidad de la acción y el Tribunal no lo había declarado así, la nulidad de aquel debía alegarse con fundamento en la causal 8a del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, esto es, por haberse pronunciado el Tribunal arbitral sobre puntos no sujetos a su decisión, pues se estimaba que en estos casos al operar la caducidad de la acción el Tribunal carecía de competencia para resolver la controversia respectiva. Ahora, en vigencia de la nueva ley es claro que ésta hipótesis ya no podrá ser alegada bajo la causal 9a del artículo 41 de la ley 1563 de 2012, antes prevista en los numerales 8o y 9o del Decreto 1818 de 1998, pues ya la causal 2a de la Ley 1563 de 2012 regula de forma especial esa circunstancia específica."

Caducidad de la anulación–Sentencia 27/2025–STSJ M 15115/2025. Tribunal Superior de Justicia de Madrid. España. "Analizando ya con detenimiento la posible caducidad de la acción de nulidad planteada, se ha de indicar que, refiriéndose, asimismo, al término legalmente previsto

para la tempestiva presentación de la presente impugnación, atendiendo a las normas imperativas al respecto contenidas en los arts. 5.2º y 41.4º de la Ley de Arbitraje, dado que no se formuló la solicitud de complemento del art. 39 de la misma Ley, la presentación de la demanda de nulidad se hizo en fecha posterior a la ejecutividad y firmeza del Laudo en cuestión, por lo que su caducidad viene obligada en computación civil del plazo legalmente previsto de dos meses en atención a las previsiones al respecto contenidas en el art. 5.1 Del Código Civil, efectuada de fecha a fecha a contar desde el 12 de junio de 2024, siendo hábiles todos los días del mes de agosto para los plazos de caducidad de acción, y habiéndose presentado la demanda rectora del presente procedimiento y estando datada el 2 septiembre 2024, firmándose por la dirección letrada y su procurador en tal fecha, o sea una vez caducada ya la acción de nulidad. (...) Respecto del Laudo impugnado, nuevamente, se ha de señalar que la expresada caducidad impide, por esa misma y concluyente circunstancia impeditiva, que sea preciso el tratamiento del motivo de nulidad antes expuesto al haber devenido aquel inatacable, tal y como viene sosteniendo esta Sala en otros casos similares conocidos con anterioridad. Del análisis de la documentación obrante en el expediente seguido ante la Sala se comprueba como concurre la caducidad de la acción de nulidad ejercitada, siendo rechazada en este momento en atención a ello y por tal motivo precedente al análisis de la nulidad actuada y con carácter previo o preliminar". "(...) Por la presunta y concurrente caducidad de la acción de nulidad, se está en el caso de aceptar la referida excepción temporal formulada en lo referente a la caducidad aplicable a la demanda de anulación objeto del proceso. En su consecuencia, no procede analizar el motivo de nulidad argumentado por la parte demandante sobre la referida sostenida nulidad y concluir en la íntegra desestimación de la demanda contra el Laudo dictado en su día en el procedimiento arbitral objeto del recurso, de tal manera que la estimación del óbice u omisión imputable al demandante hace innecesario el análisis del resto de la motivación de la demanda propuesta"."

CADUCIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO ARBITRAL. PRECEDENTE, REGISTRO 33671. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. Por otro lado, adverso a lo que alegan las recurrentes, el hecho de que conforme al Código de Comercio el procedimiento de ejecución de laudo arbitral idealmente deba desahogarse en un plazo menor a los ciento veinte días para que opere la caducidad de la instancia, de modo alguno implica que dicha figura sea inaplicable o incompatible con el procedimiento de origen, al contrario es afín a su naturaleza ágil, pues sanciona la inactividad injustificada, siendo que en la

práctica los procesos no siempre se desahogan en los plazos previstos en la legislación, ya sea por la inactividad del juzgador o por la inactividad de las partes, como ocurrió en el juicio de origen, en el que transcurrió dicho plazo por la falta de impulso procesal de la parte actora; de ahí que, los plazos legales contemplados para la tramitación del juicio de origen no tornan inaplicable la figura de la caducidad de la instancia, cuya finalidad es precisamente, que las partes desahoguen los procedimientos en el mayor tiempo posible y éstos no se vuelvan perpetuos, en perjuicio de la seguridad jurídica y la administración de justicia. (...). Siendo que como se ha reiterado, el acto reclamado deriva de un procedimiento de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, en sede judicial, tramitado conforme a los juicios especiales sobre transacciones comerciales y arbitraje, es decir, ya no se está en la etapa del arbitraje, el cual culminó con el dictado del laudo que se pretende reconocer y ejecutar; de ahí que, en el caso no apliquen los principios y tesis jurisprudencial relativas al arbitraje que invocan las recurrentes, pues se insiste, el asunto ya no se encuentra ante el tribunal arbitral, sino ante un órgano jurisdiccional en el que se aplican los principios que rigen a los juicios mercantiles, como el de la caducidad de la instancia. (...). Sin que pase inadvertido lo alegado por las impugnantes en el sentido de que en el fallo impugnado el juez federal también consideró que la caducidad de la instancia decretada en el juicio de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral de origen, sí es proporcional y no constituye una carga gravosa o excesiva para la parte promovente; que la obligación de impartir justicia de la jueza responsable se desenvuelve sobre una pluralidad de asuntos y el interés de la parte quejosa sólo estaba en su expediente; que las quejosas tuvieron ciento veinte días hábiles para desahogar la carga de impulsar el procedimiento; y, que resulta inexacto sostener que la obligación de las partes de impulsar el procedimiento terminó en la etapa postulatoria.

CADUCIDAD DEL ARBITRAJE–SENTENCIA 15/2023–STSJ AND 6815. TRIBUNAL SUPERIOR DE ANDALUCÍA. ESPAÑA. "El relato de hechos probados, que resulta del análisis de la documental aportada por las partes, muestra que el procedimiento arbitral se prolongó, desde el escrito de contestación de la demanda (28 septiembre 2016) hasta el dictado del laudo (17 diciembre 2021), durante más de cinco años. Por tal razón se postula por la parte demandante la nulidad del laudo, invocando la caducidad del arbitraje conforme a lo pactado en el Acta de Constitución del Convenio Arbitral al excederse de forma injustificada la tramitación del procedimiento, por lo que la sumisión a arbitraje se habría extinguido y el laudo carecía de soporte. Desde otro punto de vista, la misma dilación se invoca como infracción sustancial de

las normas pactadas que habrían de regir el procedimiento. La pretensión de la demandante choca, en principio, con la regla general, consolidada jurisprudencialmente, según la cual a partir de la entrada en vigor de la Ley 11/2011, de 20 de mayo, la infracción del plazo para dictar laudo no es causa de nulidad, pues expresamente dice el artículo 37.2 que "salvo acuerdo en contrario de las partes, la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo dictado". La cuestión era discutida con arreglo a la Ley de Arbitraje de 2003, por cuanto conforme a su artículo 37.2.II, " la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo determinará la terminación de las actuaciones arbitrales [es decir, la caducidad] y el cese de los árbitros [es decir, su pérdida de jurisdicción]", lo que podría justificar la anulación del laudo extemporáneo. Pero la nueva ley excluye expresamente la sanción de nulidad, y así lo justifica la Exposición de Motivos, al indicar como una de las modificaciones que se introducen la de modular "una solución, a favor del arbitraje, para los casos en que el laudo se dicta fuera de plazo". Con todo, es cierto que esta regla general podría admitir excepciones. No cabría sostener que el vigente art. 37.2 LA impidiera a las partes salir de un arbitraje indefinidamente prolongado. Una dilación enorme de la tramitación del procedimiento podría, entiende la Sala, integrar la causa de nulidad establecida en el art. 41.1.d) LA, pues una de las garantías esenciales del arbitraje, que pueden sin duda formar parte de la causa del convenio arbitral, es la celeridad y certidumbre del tiempo en que la cuestión va a resultar resuelta. Dicho de otro modo, una dilación enorme o indefinida puede ser considerada como una vulneración esencial del acuerdo de las partes sobre el procedimiento, o de la propia Ley de Arbitraje. "

CALIDAD DE PARTE Y DE TERCERO EN EL PROCESO ARBITRAL–SENTENCIA C-170/14. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "El concepto de parte es restringido al escenario del proceso y se asume así tanto en su aspecto formal, como en su aspecto material, determinado en esencia por la relación jurídico-sustancial. Es decir, es parte no sólo quien asume la calidad de demandante o quien ostenta la de demandado en consideración a la pretensión objeto de debate, sino también quien se vincula al proceso de manera sobreviniente en razón de la naturaleza de la relación jurídico sustancial. Quien sea virtualmente ajeno a dicha relación sólo tiene calidad de tercero en los términos dispuestos por nuestra preceptiva procesal. La parte puede estar integrada por una pluralidad de sujetos, bien sea mediante litisconsorcio necesario con comunidad de suertes en el resultado y los efectos en el proceso (Art. 61 del Código General del Proceso), o del litisconsorcio facultativo si cada parte se concibe como una individualidad que aprovecha el proceso, sin comunidad

D

Deber de imparcialidad del árbitro.–Sentencia No.28/2014. Tribunal Superior de Madrid. España. "Como decíamos en la STSJ Madrid 31/2013, de 16 de mayo, ['la imparcialidad en el arbitraje que se predica en la Ley de Arbitraje viene siempre referida a los árbitros, no a la institución administradora del arbitraje. Así se señala en la exposición de motivos de esa ley al mencionar (apartado IV, párrafo tercero) 'el deber de todos los árbitros, al margen de quien los haya designado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partes en el arbitraje', refiriéndose posteriormente en su artículo 17, al regular la abstención y recusación, al deber personal de todo árbitro de ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial, sin que, en todo caso, pueda mantener con las partes relación personal, profesional o comercial, estando obligada 'la persona propuesta para ser árbitro' a comunicar 'todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia', teniendo obligación 'el árbitro, a partir de su nombramiento', de revelar a 'las partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida'. Por ello, los motivos de recusación del árbitro sólo son personales, no colectivos de la institución administradora del arbitraje, como se deduce del apartado 3 del mismo artículo 17 al establecer que 'un árbitro sólo podrá ser recusado si concurren en él circunstancias que den lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia, o si no posee las cualificaciones convenidas por las partes'."

Deber de los tribunales de arbitramento de respetar los precedentes judiciales–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020160013800 (57.785). Colombia. "La jurisprudencia del Consejo de Estado ha explicado que los fundamentos constitucionales del carácter vinculante y de la fuerza obligatoria de los precedentes judiciales se encuentran *(i)* en el principio-derecho a la igualdad —de trato y ante el derecho; *(ii)* en el principio de seguridad jurídica; *(iii)* en los principios de buena fe y protección de la confianza legítima y, finalmente, *(iv)* en el principio de publicidad de las actuaciones y de las decisiones jurisdiccionales. (...) Pues bien, los referidos

principios constitucionales, como suficientemente se explicó y concluyó en el acápite anterior de este pronunciamiento, resultan de obligatoria observancia para los tribunales de arbitramento habida consideración de la identidad de naturaleza jurídica existente entre el laudo arbitral y la sentencia judicial, por manera que los argumentos que se han esgrimido para justificar el deber de observancia de los precedentes judiciales respecto de los jueces, también son predicables, mutatis mutandi, de los árbitros, como a continuación pasa a verse. a. Principio-derecho fundamental a la igualdad. La obligación de respetar el sentido y las razones que sustentan las decisiones previas se encuentra íntimamente ligada a una exigencia que cabe formular respecto de toda actuación judicial -y, por ende, también respecto de los procesos arbitrales- con el fin de que pueda catalogarse como ajustada al ordenamiento y que no es otra distinta a que la decisión del juez o del árbitro debe venir fundamentada no en criterios ad-hoc, caprichosos o coyunturales, sino en principios generales o en reglas que puedan ser "universalizables" en la medida en que hayan sido formulados o tenidos en cuenta para la resolución de casos anteriores o se hayan construido para fallar un supuesto específico, pero con la perspectiva de poder aplicarlos a hipótesis semejantes en el futuro. (...) b. Principio de seguridad jurídica. En segundo término, además del principio de igualdad y estrechamente imbricada con él, constituye fundamento de la fuerza vinculante de los argumentos que sustentan los pronunciamientos judiciales o las decisiones arbitrales, la certeza que la comunidad jurídica aspira a tener en el sentido de que los jueces o los árbitros van a decidir los casos iguales de la misma forma, es decir, la garantía de que el ejercicio de la función jurisdiccional atienda a los dictados del principio de la seguridad jurídica como presupuesto de la estabilidad con la cual los ciudadanos precisan contar para ejercer sus derechos y libertades, así como para que se les asegure la vigencia de un orden justo –artículo 2 constitucional–. (...) c. Principios de buena fe y tutela de la confianza legítima. En tercer lugar, la obligatoriedad para el juez y para el árbitro de no desatender injustificadamente los pronunciamientos judiciales o arbitrales antecedentes y la misma seguridad jurídica a la cual se ha hecho alusión, constituyen elementos sin los cuales no es posible materializar dos principios que emanan del artículo 83 de la Constitución Política: la buena fe y la protección de la confianza legítima. De éstos se deriva, para los administrados, la garantía de que las autoridades del Estado no van a sorprenderlos con actuaciones que si bien aisladamente consideradas pueden estar provistas de fundamentos jurídicos, al ubicarlas en el contexto del que ha sido el sentido de las decisiones adoptadas frente a supuestos equiparables, en realidad resultan contradictorias, de suerte que

defraudan la expectativa legítima que en el interesado en la determinación se había creado con base en el comportamiento anterior de quien decide frente a situaciones de naturaleza similar. (...) d. Principio de publicidad. Y en cuarto y último término, el principio de publicidad que informa la actividad judicial, a voces de lo dispuesto por el artículo 228 superior, implica tanto para el juez como para el árbitro la obligación de motivar adecuada, coherente y suficientemente sus proveídos, carga de argumentación dentro de la cual se incluye la de considerar y referirse explícita y razonadamente a los pronunciamientos jurisprudenciales antecedentes en los cuales se encuentran argumentos que sustentan sus decisiones frente a casos análogos, como garantía tanto para los sujetos procesales cuanto para la comunidad en general, de que el ordenamiento está siendo interpretado y aplicado de manera consistente y uniforme."

DEBER DE RELEVACIÓN DE LOS ÁRBITROS.–SENTENCIA NO. 49/2020–STSJ M 9479/2020. TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "En total coherencia con esa prohibición la Ley establece una obligación correlativa: la obligación de la persona propuesta como árbitro y también del árbitro, a partir de su nombramiento, de ' revelar todas las circunstancias que puedan lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia' (art. 17.2 LA); más aún: el precepto precisa con mayor detalle el alcance de esa obligación para el caso de que el árbitro ya haya sido designado: entonces su deber consiste 'en revelar a las partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida'. En suma: el árbitro deberá proporcionar la información que pueda suscitar dudas sobre su imparcialidad o independencia con carácter previo a su aceptación, en la medida en que el art. 17.2 LA expresa claramente que esa obligación recae sobre 'la persona propuesta para ser árbitro'. Pero ese deber se mantiene a lo largo de todo el proceso de arbitraje, de manera que el árbitro ya nombrado está obligado a revelar 'sin demora' las circunstancias sobrevenidas -o anteriores pero no comunicadas- que pudieran afectar a su imparcialidad e independencia".

DEBER DE REVELACIÓN DEL ÁRBITRO- TESIS AISLADA, REGISTRO 162067. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. "La persona a quien se comunique su posible nombramiento como árbitro deberá revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad e independencia, quien podrá ser recusado si existen circunstancias que den lugar a dudas justificadas respecto de su imparcialidad e independencia o si no posee las cualidades convenidas por las partes."

DEBER LEGAL DE MOTIVACIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES. SENTENCIA NO. 65/2021. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. ESPAÑA. "En consonancia con el fundamento jurídico anterior, el deber de motivación del laudo no surge del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que solo es predicable de las resoluciones emanadas del Poder Judicial, sino de la propia Ley de arbitraje, que en su art. 37.4 así lo exige. El modo en que dicha norma arbitral está redactada se asemeja a la exigencia del art. 120.3 CE respecto a las resoluciones judiciales y, a primera vista, pudiera causar cierta confusión, haciendo pensar que tal deber de motivación del laudo está constitucionalmente garantizado. Sin embargo, la norma constitucional relativa a la necesaria motivación de las sentencias y su colocación sistemática expresa la relación de vinculación del juez con la ley y con el sistema de fuentes del Derecho dimanante de la Constitución. Expresa también el derecho del justiciable y el interés legítimo de la sociedad en conocer las razones de la decisión judicial que se adopta, evitando que sea fruto de la arbitrariedad y facilitando mediante su expresión el control por parte de los órganos jurisdiccionales superiores en caso necesario (así, por ejemplo, STC 262/2015, de 14 de diciembre, FJ 3). Ahora bien, como sostienen la demandante de amparo y el Ministerio Fiscal, la motivación de los laudos no está prevista en la Constitución ni se integra en un derecho fundamental (art. 24 CE). Es una obligación de configuración legal del que bien podría prescindir el legislador sin alterar la naturaleza del sistema arbitral. Por lo demás, que el art. 37.4 LA disponga que "el laudo deberá ser siempre motivado", no significa que el árbitro deba decidir sobre todos los argumentos presentados por las partes, como tampoco que deba indicar las pruebas en las que se ha basado para tomar su decisión sobre los hechos, o motivar su preferencia por una norma u otra, pues para determinar si se ha cumplido con el deber de motivación, basta con comprobar, simplemente, que el laudo contiene razones, aunque sean consideradas incorrectas por el juez que debe resolver su impugnación (STC 17/2021, de 15 de febrero, FJ 2). Asentado, por consiguiente, el arbitraje en la autonomía de la voluntad y la libertad de los particulares (arts. 1 y 10 CE), el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el art. 24 CE para la resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido en función del art. 10 CE. Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, las propias partes sometidas a arbitraje a las que corresponde, al igual que pactan las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar si el laudo debe estar motivado (art. 37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público. De esto se sigue que el órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral, como resultado del ejercicio de una acción extraordinaria

de anulación, no puede examinar la idoneidad, suficiencia o la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, porque, salvo que las partes hubieren pactado unas determinadas exigencias o un contenido específico respecto a la motivación, su insuficiencia o inadecuación, el alcance o la suficiencia de la motivación no puede desprenderse de la voluntad de las partes (art. 10 CE). Cabe, pues, exigir la motivación del laudo establecida en el art. 37.4 LA, pues las partes tienen derecho a conocer las razones de la decisión. En consecuencia, en aquellos supuestos en los que el árbitro razona y argumenta su decisión, habrá visto cumplida la exigencia de motivación, sin que el órgano judicial pueda revisar su adecuación al derecho aplicable o entrar a juzgar sobre la correcta valoración de las pruebas, por más que de haber sido él quien tuviera encomendado el enjuiciamiento del asunto, las hubiera razonado y valorado de diversa manera."

Deberes de motivación del laudo arbitral. – Sentencia No. 20/2018– STSJ M 3981. Tribunal Superior de Madrid. España. "Se invoca que el laudo objeto de anulación no ha resuelto todas las cuestiones planteadas por las partes y es que la principal cuestión, no era sino la inexistencia de convenio arbitral, no habiéndose resuelto sobre dicha cuestión ni a lo planteado en el escrito de esta parte, ni al contenido del contrato aportado y sus requisitos legales de validez, sino que simplemente se ha continuado con la tramitación dando por buenas todas las afirmaciones de la parte solicitante y desechando las de oposición sin más análisis. En cuanto a la motivación, conviene recordar los más elementales deberes de motivación, cuya infracción constituiría por sí sola una vulneración del art. 24.1 CE, tal y como aparecen identificados, con especial claridad, por todos, en el Fundamento Jurídico 3 de la emblemática STC 147/1999 -emblemática porque consagra una línea jurisprudencial conteste hasta la fecha, v.gr., entre muchas, SSTC 178/2014, de 3 de noviembre, FJ 3, y 16/2016, de 1 de febrero, FJ 5-, cuando dice: 'Procede recordar que el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, favorable o adversa, es garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos (SSTC 131/1990 y 112/1996), y que ello implica, en primer lugar, que la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión (SSTC 122/1991, 5/1995 y 58/1997). En segundo lugar, que la motivación debe contener una fundamentación en Derecho, esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación no arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto de un error patente, como si fuere 'arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable' no podría considerarse fundada en Derecho, dado que la

E

Efecto de la anulación–Sentencia No. 21/2014. Tribunal Superior de Madrid. España. "Debe recordarse, en primer término, que la acción de anulación de laudo arbitral diseñada en la Ley de Arbitraje no permite a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la que ahora se atribuye la competencia para el conocimiento de este proceso, reexaminar las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. La limitación de las causas de anulación del laudo arbitral a las estrictamente previstas en el artículo 41 de esa Ley de Arbitraje , restringe la intervención judicial en este ámbito a determinar si en el procedimiento y la resolución arbitrales se cumplieron las debidas garantías procesales, si el laudo se ajustó a los límites marcados en el convenio arbitral, si éste carece de validez o si la decisión arbitral invade cuestiones no susceptibles de arbitraje. Al respecto la STS de 15 de septiembre de 2008 establece que 'Como dice el auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2006: como punto de partida debe tomarse la especial función de la institución arbitral y el efecto negativo del convenido arbitral, que veta por principio la intervención de los órganos jurisdiccionales para articular un sistema de solución de conflictos extrajudicial, dentro del cual la actuación de los Tribunales se circunscribe a actuaciones de apoyo o de control expresamente previstas por la Ley reguladora de la institución; es consustancial al arbitraje, por lo tanto, la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por virtud y a favor de la autonomía de la voluntad de las partes, intervención mínima que, tratándose de actuaciones de control, se resume en el de la legalidad del acuerdo de arbitraje, de la arbitrabilidad -entendida en términos de disponibilidad, como precisa la exposición de Motivos de la Ley 60/2003- de la materia sobre la que ha versado, y de la regularidad del procedimiento de arbitraje; para ello, tal y como asimismo se señala en el Preámbulo de la vigente Ley de Arbitraje, se contempla un cauce procedimental que satisface las exigencias de rapidez y de mejor defensa, articulando el mecanismo de control a través de una única instancia procesal; esta mínima intervención jurisdiccional explica el hecho de que en el artículo 42.2 de la vigente Ley de Arbitraje, como también se hacía en el artículo 49.2 de su predecesora, se

disponga que frente a la sentencia que se dice en el proceso sobre anulación de un laudo arbitral no quepa recurso alguno, habiendo entendido el legislador que a través de una única instancia y con una sola fase procesal se satisface suficientemente la necesidad de control jurisdiccional de la resolución arbitral, que, evidentemente, no alcanza al fondo de la controversia, sino únicamente a los presupuestos del arbitraje y su desarrollo.'

EFECTO DE LA EXCLUSIÓN DE LA JURISDICCIÓN POR PACTAR ARBITRAJE–SENTENCIA NO. 01/2026–STSJ GAL 769/2026. TRIBUNAL SUPERIOR DE GALICIA. ESPAÑA. "Ante todo, debemos hacer constar que la nulidad de un laudo no puede venir referida a una mera discrepancia con la interpretación de una norma legal, ya que no es función de los tribunales corregir, como si de un recurso contra una decisión judicial se tratara, la aplicación de la norma efectuada por el árbitro y tan es así que el convenio arbitral, de carácter negocial expresivo de la libertad de las partes y que engarza, por tanto, con los artículos 1.1o y 10 de la C.E., produce exactamente el efecto de exclusión de la jurisdicción, cuya competencia para conocer del asunto se ve sustituida por la del árbitro, de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 y 63.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 11 y 22 de la Ley de arbitraje. No nos corresponde enjuiciar la corrección de la selección, interpretación y aplicación de la norma efectuada por el árbitro, salvo que afecte a algún derecho constitucional".

EFECTO DE LA EXPIRACIÓN DEL PLAZO PARA LAUDAR.–SENTENCIA NO. 75/2014. TRIBUNAL SUPREMO DE CATALUÑA. ESPAÑA. "Por último, es cierto que el art. 37.2 LA 2003 prevé que, si las partes no hubieren convenido otra cosa, 'los árbitros deberán decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación de la contestación a que se refiere el art. 29', con la posibilidad de prorrogar el término por tiempo no superior a los dos meses. Pero, tras la modificación efectuada por la Ley 11/2011, de 20 de mayo, también dispone que, salvo acuerdo en contrario de las partes -que en el presente caso no consta-, 'la expiración del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo no afectará a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo dictado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los árbitros', lo que se compadece plenamente con el contenido del art. 15 del Reglamento de la Asociación encargada de administrar el arbitraje (art. 14.1.b LA), que, como hemos dicho ya, constituye norma del arbitraje mientras no contradiga lo dispuesto en la LA (art. 4.b y 14.2 LA). Por tanto, no es posible atribuir a la aparente extemporaneidad del laudo -el hecho de que el plazo transcurrido desde la contestación de la demanda arbitral sea de ocho meses justos sugiere que el inicial de seis meses pudo ser prorrogado por el máximo de dos más- el efecto anulatorio pretendido por la demandante".

Efecto de la indebida valoración probatoria en el proceso arbitral.–Sentencia No. 19/2012–STSJ M 6899/2012. Tribunal Superior de Madrid. España. "Teniéndose en cuenta que, aun cuando se produzca la infracción de derechos fundamentales en la práctica de pruebas y éstas no sean esenciales para la decisión arbitral, se ha de tener en cuenta que, de conformidad con los arts. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 287 de la LEC 1/2000 , ello solo determinaría la nulidad de tales diligencias contaminadas y no la del procedimiento arbitral entero y de la decisión final del arbitraje, se ha de indicar que, de una parte, el motivo de nulidad ahora tratado tampoco puede prosperar ya que el Laudo no se basa esencialmente en las testificales referidas para alcanzar su decisión y, de otra, en que en el punto 43 del Laudo consta que el plazo máximo para dictar la decisión arbitral se fijó el 5-6- 2011 en atención al artº 38.1 del Reglamento de la Corte , habiéndose pronunciado el anterior 1-6-2011, explicándose en los puntos 44 a 47 de manera satisfactoria, suficiente para la Sala y exhaustiva, las circunstancias acontecidas para determinar la grabación de la testifical en cuestión."

Efecto de la renuncia tácita al arbitraje sobre la controversia. Amparo directo en revisión 6916 / 2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. Al respecto, es importante insistir en que, cuando se actualiza una renuncia tácita al acuerdo o pacto arbitral, tal renuncia tácita sólo puede imperar respecto del litigio que, específicamente, se somete a la potestad del órgano jurisdiccional estatal, pero no respecto de la totalidad de las controversias que hayan surgido o pudieran surgir entre las partes. Es decir, tratándose de una renuncia tácita al acuerdo arbitral, los efectos de esa renuncia se circunscriben exclusivamente a la materia sobre la que versa la litis planteada por las partes antes el juez estatal.

Efecto de la similitud argumentativa en anulación y tutela– Sentencia T-608 de 1998. Corte Constitucional. Colombia. "Así las cosas, no podría el juez constitucional, y en particular esta Sala de Revisión, invadir la órbita de competencia asignada por la ley al Tribunal Superior de Bogotá, decidiendo en forma paralela y casi simultánea sobre el mismo asunto: la presunta ilegalidad del laudo arbitral recurrido. Más aún, si como obra en las pruebas recogidas por esta Sala de Revisión (a folio 276), Fiberglass sustentó el recurso de anulación en varias de las causales consagradas en el artículo 38 del Decreto 2779/89, particularmente las contenidas en los numerales 2°, 8° y 9°, para lo cual utilizó, respecto de las dos últimas, los mismos fundamentos jurídicos que ahora promueven la acusación en sede de tutela; es decir, aquellos dirigidos a demostrar el error de interpretación del tribunal de arbitramento

al reconocer la existencia de un contrato de agencia comercial entre las partes y desconocer el de suministro".

EFECTO DE LAS INSTANCIAS DE ARREGLO ANTERIORES AL ARBITRAJE. SENTENCIA NO. 15/2012–STSJ CV 3915/2012. TRIBUNAL SUPERIOR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. ESPAÑA. "En dicha demanda se ejercita, como se ha relatado ampliamente en los antecedentes de hecho de la presente, la acción tendente a la anulación del laudo arbitral dictado el 6 de octubre de 2011, con fundamento en el artículo 41.1, apartado d) de la Ley 60/2003, de Arbitraje, por estimar que el procedimiento arbitral no se ajustó a al acuerdo existente entre las partes, y en concreto por no haberse cumplido los requisitos pactados especificados en la estipulación tercera de la escritura de compraventa de participaciones sociales y acciones de fecha 7 de octubre de 2002 del que trae causa el procedimiento arbitral, en la cuál se viene a establecer el procedimiento para poder acudir a la vía arbitral en orden a la reclamación de las indemnizaciones pretendidas en virtud de la referida escritura. Los referidos requisitos que se manifiestan en la demanda como incumplidos, vienen a centrarse en la necesaria notificación previa por escrito a la parte contraria de la indemnización pretendida, indicando con precisión y oportunamente documentadas sus causas e importes así como que si dicha reclamación no fuera expresamente aceptada por la contraria en treinta días naturales siguientes se entendería rechazada. Igualmente se añadía que, en el supuesto de existir oposición, la parte reclamante tendría derecho a acudir al procedimiento establecido en la cláusula novena, es decir, al procedimiento de arbitraje (dicha cláusula novena prevé el sometimiento a arbitraje en el marco de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Valencia). (...) La demanda de anulación mencionada debe ser desestimada porque el sustrato fáctico de la misma (supuesto incumplimiento de la contraparte del procedimiento previo de reclamación indemnizatoria pactado interpartes contenido en la cláusula tercera de la escritura pública de compraventa de participaciones sociales de 7 de octubre de 2002) no afecta ni incide en modo alguno en el procedimiento arbitral y, por ello, en el motivo invocado del art. 41.d) de la Ley de Arbitraje, como lo demuestra que al argumentar la parte actora la procedencia de la nulidad postulada no se invoque o cuestione la cláusula novena que es donde se recoge la sumisión al arbitraje sin que se condicione en la misma el acudir al mismo, siendo los invocados incumplimientos meros pactos interpartes de la forma de canalizar más eficazmente sus reclamaciones indemnizatorias previas a tener expedita la vía de reclamación arbitral pero, es de insistir, en modo alguno inciden en la existencia de pacto arbitral ni en el procedimiento mismo".

F

Factores de la competencia arbitral – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 10012326000200100310 1 (20.472). Colombia. "el primer elemento que debe valorarse para establecer la sujeción de la decisión arbitral al ámbito de su competencia es el pacto arbitral (...), ya que del mismo se deriva la voluntad de las partes de someter sus diferencias a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, como también la materia respecto de la cual ha de darse el pronunciamiento. El segundo factor determinante de la competencia de los jueces procede de la relación jurídico procesal que está delimitada por la demanda y su contestación, toda vez que en desarrollo del principio de congruencia debe existir una debida correspondencia entre lo pedido por las partes y lo decidido por el juez o árbitro. [L]a decisión proferida por el tribunal de arbitramento debe ajustarse a la materia arbitral enunciada por las partes, puesto que son ellas quienes expresamente señalan los límites dentro de los cuales pueden actuar válidamente; de manera que si los árbitros hacen extensivo su poder jurisdiccional transitorio, a temas exógenos a los queridos por las partes, atentarán contra este principio, puesto que estarán decidiendo por fuera del concreto tema arbitral".

Facultad de convenir arbitraje en curso de proceso judicial. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México. El artículo 609 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México reconoce el derecho de las partes a sujetar sus diferencias al juicio arbitral. Se establece en el numeral 610 del código procesal local que el acuerdo de arbitraje puede celebrarse antes de que haya juicio, durante éste y después de sentenciado, sea cual fuere el estado en que se encuentre; sin embargo, el acuerdo posterior a la sentencia irrevocable sólo tendrá lugar si los interesados la conocieren.

Facultades de los árbitros–Sentencia C-378/08. Corte Constitucional. Colombia. "Por mandato legal, los árbitros cuentan prima facie con las mismas facultades procesales de las que disponen las autoridades judiciales estatales, esto es, el poder: *(i)* de decisión para resolver

en forma obligatoria la controversia; *(ii)* de coerción, para procurar los elementos necesarios a fin de obtener el cumplimiento de la decisión, y *(iii)* de documentación o investigación para practicar pruebas, valorarlas y encontrar la verdad procesal indispensable para adoptar la decisión que corresponda."

Facultades de los árbitros en medidas cautelares–Sentencia No. C-431/95. Corte Constitucional. Colombia. "Dada la facultad constitucional en cabeza del legislador para limitar o ampliar el ámbito de competencia de los árbitros, señalando para el efecto el procedimiento y requisitos que se exigen para el efecto. Si el juez en su tarea de administrar justicia goza de la facultad de decretar medidas cautelares, lo puede hacer también el árbitro al ser investido del poder de administrar justicia. Al decretar el árbitro medidas cautelares, lo único que está haciendo es uso del poder de coerción con miras a lograr la efectividad de su decisión; al hacerlo, en ningún momento está usurpando una competencia que no le corresponda en forma privativa y excluyente a la justicia ordinaria."

Facultades de los árbitros. Contradicción de tesis 8/2015. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México. En ese sentido, los árbitros poseen 'autoridad' pero les falta 'potestad' que es atributo exclusivo del Estado y por ello, podrán realizar todos aquellos actos para los que baste la simple autoridad, y deberán solicitar la cooperación de los tribunales respecto de aquellos otros que requieran la potestad, como ocurre por ejemplo en materia de medidas o providencias cautelares y de ejecución en donde se requiere del auxilio de la jurisdicción estatal. Ello, pues la resolución arbitral no puede extenderse irrestrictamente a la sustitución de los particulares a los tribunales ordinarios. De ahí que los particulares, a pesar de que se hayan comprometido en árbitros, siempre contarán con la posibilidad de acudir a la autoridad jurisdiccional a someter a su conocimiento situaciones relacionadas con los propios arbitrajes. Ejemplo de ello es el caso del reconocimiento de laudo arbitral que es el acto formal realizado por la autoridad judicial y que lo declara como final y obligatorio sobre los puntos controvertidos entre las partes; el efecto de este procedimiento jurisdiccional es el de darle efectos jurídicos a los resolutivos de un laudo, aunque ello no involucre su ejecución activa, concepto que deriva de la noción de que existen diferencias entre el reconocimiento del laudo y su ejecución.

Facultades de los árbitros. Sentencia No. 89/2013. Tribunal Superior de Madrid. España. "Coincidimos con el árbitro en que no existe incongruencia extra petita, ya que, a propósito de la amplitud o flexibilidad del veredicto arbitral, que la jurisprudencia ha venido insistiendo en la flexibilidad

G

Garantía de audiencia en el procedimiento arbitral. Contradicción de tesis 7790/2019. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. Conforme con lo anterior, se ha dicho que en la fase denominada judicial, impera el derecho al debido proceso previsto en el artículo 14 constitucional, cuyo contenido, esta Sala ha considerado que en todo procedimiento jurisdiccional comprende un núcleo duro de formalidades esenciales, que en su conjunto integran la garantía de audiencia y que permiten al gobernado ejercer sus defensas antes de que la autoridad modifique su esfera jurídica en forma definitiva a través de un acto de privación de sus libertades o derechos subjetivos considerado que en todo procedimiento jurisdiccional comprende un núcleo duro de formalidades esenciales, que en su conjunto integran la garantía de audiencia y que permiten al gobernado ejercer sus defensas antes de que la autoridad modifique su esfera jurídica en forma definitiva a través de un acto de privación de sus libertades o derechos subjetivos. En vista de ello, la pregunta que se formula en el caso, es si este parámetro de control del derecho de audiencia, mediante garantías procesales, o formalidades esenciales del procedimiento, emanado de del artículo 14 constitucional, propio del proceso jurisdiccional ante autoridad estatal competente, que permite analizar la observancia del derecho de audiencia en relación con los actos del proceso y no propiamente en función del contenido de la sentencia, puede trasladarse con la misma caracterización, en términos análogos, en los procedimientos arbitrales en materia de comercio o si no es así. Se recuerda, decidir tal cuestión se propone como necesaria por las recurrentes, para poder fijar la correcta interpretación de los artículos 1434 y 1457, fracción I, inciso b), del Código de Comercio, y determinar si "el derecho a ser oído" mediante "la plena oportunidad para hacer valer los derechos" en el arbitraje, a que se refieren esas normas legales, puede recibir un trato semejante al de la garantía de audiencia en el proceso jurisdiccional, para el concreto efecto de estimar que dichos preceptos se refieren a las actuaciones procesales del arbitraje y a que se realice la emisión del laudo per se y no propiamente al contenido de la decisión arbitral, como lo sustentó el tribunal colegiado, o si esos derechos en el arbitraje, deben recibir el trato diferenciado que proponen las recurrentes,

para entender que su vulneración también se puede producir directamente con el contenido del laudo mismo y por tanto, que ello encuadra en el supuesto de nulidad previsto en la segunda norma. (...) De las consideraciones hechas en los diversos precedentes citados con antelación, se colige que esta Sala, en alguna ocasión admitió hacer un examen de constitucionalidad de un precepto del código de comercio relativo a la regulación del arbitraje, a la luz del debido proceso y el derecho de audiencia en los términos que lo prevé el artículo 14 constitucional, y conforme a la interpretación hecha en la jurisprudencia 47/95 del Pleno de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Sin embargo, posteriormente, esta Sala estableció que en el arbitraje comercial, por sus caracteres, principalmente, el hecho de que los árbitros no son autoridades porque no actúan por delegación de la función jurisdiccional del Estado, por ende, el arbitraje no es un proceso judicial y el laudo no es una resolución de autoridad pública; no son aplicables a los árbitros exigencias propias de la garantía o derecho de legalidad, como es el deber de fundamentación y motivación de los actos de autoridad en términos de los artículos 14 y 16 constitucionales; o la prohibición de tribunales especiales que dispone el artículo 13 de la Constitución General. De modo que, aunque existe el deber de motivar el laudo si las partes no han dispuesto otra cosa, como lo establece el Código de Comercio en forma supletoria (artículo 1448), ello no es exigible como garantía constitucional con base en esos dispositivos. Por otra parte, en relación con el derecho al debido proceso mediante la observancia de las formalidades esenciales del procedimiento que integran la garantía de audiencia; como se observa, lo que sostuvo esta Sala en el amparo directo 71/2014, fue que en el arbitraje comercial, el debido proceso no puede exigirse en forma idéntica a como se exige a una autoridad judicial; por las mismas razones ya referidas, derivadas de los caracteres del arbitraje. Es decir, esta Sala no rechazó propiamente que en el arbitraje comercial (voluntario y privado) deba imperar un debido proceso, sino que éste no puede ser idéntico, con las mismas exigencias que el artículo 14 constitucional prevé para el proceso jurisdiccional ante autoridad estatal. No obstante, para los efectos del caso que allí se analizó, esta Sala sí retomó el núcleo duro de formalidades esenciales que, como garantías de procedimiento, jurisprudencialmente esta Suprema Corte ha considerado necesarias para hacer posible el derecho de audiencia previa a la emisión del acto privativo, y estimó que esas garantías mínimas, se habían cumplido en aquel procedimiento arbitral. De lo anterior podemos colegir entonces que, la línea doctrinal de este Alto Tribunal en materia de arbitraje comercial (voluntario y privado), se ha encaminado o inclinado, a considerar que el debido proceso

y la legalidad del procedimiento arbitral, incluida su decisión final, no están directamente regidas por los artículos 14 y 16 constitucionales que regulan los actos de las autoridades públicas. Lo anterior, desde luego, de ningún modo significa que en el arbitraje no exista un derecho al debido proceso, por ende, a que las actuaciones arbitrales no deban respetar determinados derechos para satisfacerlo, sino únicamente que su protección no se funda directamente en esas normas constitucionales. El arbitraje, evidentemente, por su naturaleza voluntaria y privada, ha de apegarse a la norma individualizada (el acuerdo arbitral y el Tampoco se dice que los principios y derechos esenciales que imperan en el arbitraje comercial, como los aquí involucrados de igualdad de trato a las partes y el derecho a ser oídas con plena oportunidad de hacer valer los derechos, o el referido debido proceso arbitral, no tengan una protección constitucional, pues además de que el arbitraje como medio alternativo de solución de controversias, como se ha visto, tiene ahora el reconocimiento y protección del artículo 17 constitucional, el marco jurídico del arbitraje comercial internacional encuentra alojo en los tratados internacionales, en el caso de México, principalmente en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el diez de junio de mil novecientos cincuenta y ocho y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, celebrada en Panamá el treinta de enero de mil novecientos setenta y cinco, de las cuales nuestro país es parte, y que están incorporadas en el sistema jurídico nacional como Ley Suprema de la Unión, en el artículo 133 de la Constitución General. Lo que se sostiene,se reitera, es que los principios y derechos que rigen al arbitraje, en particular los que aquí se examinan relativos al derecho a ser oído mediante el ejercicio de la defensa, a la igualdad de trato, y en general a un debido proceso arbitral, no están regidos directamente por los artículos 14 y 16 constitucionales a efecto de exigir en el arbitraje comercial garantías "de procedimiento" y de "legalidad", en forma idéntica a las que se exigen a las autoridades del Estado en los procesos jurisdiccionales, sino que, el contenido y alcances de los derechos en el arbitraje y, por ende, su parámetro de regularidad, se debe establecer conforme a su propia producción normativa, de carácter convencional internacional y legal, que rija en el arbitraje de que se trate, optimizando esos principios y derechos conforme a los valores por ellos protegidos, atento a la propia naturaleza del arbitraje como medio privado de resolución de conflictos, diverso de la justicia estatal. En ese sentido, puede decirse que, una interpretación de algún principio o derecho que rija en el arbitraje comercial haciendo uso de la analogía con algún principio o derecho establecido expresamente o que emane de los artículos 14 y 16 constitucionales para el proceso jurisdiccional y conforme a la doctrina jurisprudencial que

ha desarrollado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de esos preceptos constitucionales, y/o atendiendo a los derechos humanos sobre garantías judiciales y protección judicial que recogen los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a efecto de atribuir a los principios o derechos arbitrales un determinado contenido y alcances, sería viable en la medida en que dicha interpretación admitiera claramente la compatibilidad o se hicieran las modulaciones apropiadas y necesarias para respetar la naturaleza y fines del procedimiento arbitral, distinguiendo siempre la fuente de la que emana el principio o derecho que se interpreta. Demanera que esta Primera Saladesde luego no rechazaqueel debido proceso en el arbitraje, y los derechos de las partes a la igualdad de trato y a ser oídas, con plena oportunidad de hacer valer sus derechos, pueda admitir una interpretación semejante al debido proceso y a la garantía de audiencia mediante formalidades esenciales del procedimiento en su núcleo duro, a la que éstos tienen en un proceso jurisdiccional bajo la dirección de una autoridad del Estado conforme al artículo 14 constitucional y conforme a los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el arbitraje, con todas sus características, sigue siendo un medio al que se acude para alcanzar la justicia, por ende, es válido sostener que en él imperan los principios fundamentales de igualdad procesal y audiencia del sistema de justicia constitucional. Sin embargo, esa interpretación y aplicación analógica será viable, siempre y cuando, respecto de algún principio o derecho en el arbitraje, se adopten las necesarias adecuaciones en su interpretación, para que sean acordes a la naturaleza, fines y particularidades esenciales del procedimiento arbitral: o bien, no se descarte que pueda excluirse la analogía precisamente porque la configuración convencional o legal del arbitraje en algún punto evidencie que no se trata de principios o derechos a los que pueda reconocérseles igual o similar contenido y alcances en el procedimiento arbitral, al que se les atribuye en el procedimiento ante autoridad pública jurisdiccional; sobre todo, ante la premisa básica de que, en el arbitraje, la prevalencia de la voluntad de las partes es un principio toral, que les da la libertad de diseñar en consenso el propio procedimiento arbitral, o de sujetarse a uno establecido en reglamentos arbitrales de carácter privado. Con esos matices, debe decirse que puede tener cabida la aplicación analógica al arbitraje, del parámetro del debido proceso y la garantía de audiencia que a partir del artículo 14 constitucional ha desarrollado esta Suprema Corte en su jurisprudencia respecto del proceso judicial regido por dicha norma, así como de los preceptos convencionales en materia de justicia, pero asegurando que la fijación de tal parámetro, se adecue y no resulte contraria o exceda los principios y derechos esenciales que rijan al arbitraje, pues se reitera, éste no está normado directamente por dicha norma constitucional.

GARANTÍA DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN EN EL ARBITRAJE- SENTENCIA NO. 3/2026–ATSJ 9/2026. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID. ESPAÑA. "Cuestión relevante, sin duda, relacionado con lo anterior y el orden público procesal, es la necesaria posibilidad de que la parte demandada pueda intervenir en el proceso, con efectiva contradicción y ejercicio de los medios de prueba que estime oportunos en defensa de sus intereses, lo que nos sitúa en el trámite del correcto emplazamiento para contestar a la demanda. La importancia de dicho trámite ha sido destacada desde el principio de sus resoluciones por el Tribunal Constitucional. Así, en su STC 81/1996, de 20 de mayo, señala: «Desde las primeras Sentencias hemos afirmado que este derecho implica la posibilidad de un juicio contradictorio, cuyo soporte instrumental básico es el acto procesal de comunicación, pues sin un debido emplazamiento las partes no podrían comparecer en juicio ni defender sus posiciones; asimismo hemos reiterado que este precepto constitucional contiene un mandato implícito al legislador y al intérprete para promover la defensa procesal mediante la correspondiente contradicción, lo cual lleva a exigir en lo posible, el emplazamiento personal de los demandados, y que tal emplazamiento ha de ser realizado por el órgano judicial con todo cuidado, cumpliendo las normas procesales que regulan dicha actuación a fin de asegurar la efectividad real de la comunicación (STC 157/1987). No cabe la menor duda de que en este caso, tal y como se dijo antes, el Estado de Libia frente al que se pretende la homologación del Laudo pronunciado por virtud de lo dispuesto en el Mecanismo Complementario del CIADI pudo oponerse ya que le fue entregada la Comisión Rogatoria que contenía la documentación de la solicitud de execuátur formulada a este Tribunal y que, pese a ello, no lo hizo". "(...) La aplicación de la anterior doctrina y consideraciones que hemos expuesto al caso presente, nos lleva a descartar, incluso desde una perspectiva de examen de oficio, que se hayan vulnerado derechos fundamentales, en orden al derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, de la demandada. Todo ello se verá a continuación. Particularmente, se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de la Constitución al darse una respuesta ampliamente motivada tanto en el Auto del 4 noviembre 2025 como en el del 20 enero 2026, aunque no satisfaga a la parte demandada de homologación del Laudo"."

GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DEL DEBER DE INFORMACIÓN–SENTENCIA C-305/13. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "El deber de información busca garantizar la imparcialidad y la independencia de árbitros y secretarios, proveyéndose al efecto una regulación aplicable al arbitraje que comporta la administración de justicia

de manera transitoria o temporal y que ameritó un tratamiento distinto del correspondiente a la administración de justicia que se presta de manera permanente, lo cual se inscribe dentro de las posibilidades que al legislador le brinda su potestad de configuración."

Garantía del debido proceso en el proceso arbitral–Sentencia T-800/04. Corte Constitucional. Colombia. "El proceso arbitral, como mecanismo alterno de solución de conflictos, no releva a quienes han sido nombrados árbitros, del estricto cumplimiento de todos los elementos que conforman el debido proceso conforme a la reglamentación legal propia del procedimiento arbitral. De allí que en el trámite arbitral, cuyo propósito es restablecer los derechos alegados por quienes en virtud de la decisión voluntaria de someter sus controversias actuales o futuras al conocimiento y decisión de esta clase de procedimiento, daban acoger todos los principios procesales, y, en cuanto a las pruebas, garantizar el derecho de publicidad y contradicción."

Garantías en el arbitraje.–Sentencia No. 29/2019–STSJ M 6988/2019. Tribunal Superior de Madrid. España. "El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce en el ámbito citado. "

Garantías en el proceso arbitral–Sentencia 77/2021- STSJ M 10535/2021. Tribunal Superior de Madrid. España. "El arbitraje, no por su condición de institución sustitutiva del proceso judicial puede obviar el cumplimiento de las garantías esenciales que la Constitución reconoce en el ámbito citado. El carácter flexible del procedimiento arbitral no puede desligarse, de la consecuencia de cosa juzgada que resulta inherente al laudo que le pone fin de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje. De ahí que la obtención de un laudo en el seno de un procedimiento que, sin contar con las garantías del proceso judicial sí venga obligado a respetar los principios esenciales, resulta una exigencia indispensable para dotar de validez al arbitraje."

Gastos de funcionamiento del arbitraje. Amparo en revisión 755/2011. Suprema Corte de Justicia de la Nación. México. "El tribunal arbitral y los peritos tendrán derecho a cobrar los honorarios razonables y costos del procedimiento, los testigos solamente sus costos, los cuales comprenderán todo gasto y expensa realizado y que sean aprobados por el tribunal arbitral, a los cuales podrán ser condenadas las partes vencidas si hubiera reclamo al respecto (artículo 1416, fracción IV), para lo cual las partes

H

Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento como causal de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020160013800 (57.785). Colombia. "A modo de conclusión puede afirmarse que la actual causal nueve de anulación se configura cuando el laudo arbitral se encuentra en alguna de las siguientes situaciones: (i) Haber recaído sobre materias que no eran susceptibles de ser sometidas al arbitramento, bien porque se trataba de asuntos que no eran de libre disposición o porque no estaban autorizados por la ley. En relación con este punto debe precisarse que antes de la expedición de la Ley 1285 de 2009, la cual modificó la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de la Administración de Justicia– el ordenamiento jurídico exigía de manera expresa que el pacto arbitral a través del cual las partes consentían en someter la solución de sus controversias a un "Tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral", tuviera como objeto la solución de conflictos de carácter transigible, exigencia que dejó de tener vigor en el marco de las normas legales vigentes, puesto que ese presupuesto para acudir a la Justicia Arbitral desapareció del ordenamiento jurídico. (ii) La decisión incluyó puntos no pedidos en la demanda arbitral o en su respuesta. (iii) No se refirió a los hechos y a las pretensiones formuladas en la demanda, como tampoco a las excepciones que aparezcan probadas y que, cuando la ley así lo exige, hubieren sido alegadas. De acuerdo con lo antes expuesto, constituye tarea del juez del recurso de anulación, en relación con la alegada causal, efectuar la comparación de lo decidido en el laudo arbitral, a la luz de los hechos y las pretensiones de la demanda, así como de las excepciones que hubieren sido alegadas o que hubieren sido probadas, de conformidad con la ley."

HABER RECAÍDO EL LAUDO SOBRE PUNTOS NO SUJETOS A LA DECISIÓN DE LOS ÁRBITROS O HABERSE CONCEDIDO MÁS DE LO PEDIDO COMO CAUSAL DE ANULACIÓN (ANTES DE LA LEY 1563 DE 2012) – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 12202. COLOMBIA.
"En relación con la causal invocada, ha sido criterio jurisprudencial que la misma tiene aplicación en los siguientes casos: a) Cuando el laudo decide más allá de lo pedido, esto es, ultra petita; b) Cuando el laudo decide sobre puntos no sometidos a la de cisión arbitral, es decir, extra petita, y, c) Cuando el laudo omite pronunciarse sobre alguna de las causales contenidas en la convocatoria del tribunal o de las excepciones propuestas por el demandado, esto es, citra o minus petita. Conviene igualmente señalar, que si dentro de un proceso, el hecho aparece debidamente demostrado, aun cuando no se haya pedido, pero el mismo resulta como consecuencia legal de lo solicitado, en tal ocurrencia, del pronunciamiento del Juez no podría decirse que fué un fallo extra petita."

HABERSE FALLADO EN CONCIENCIA DEBIENDO SER EN DERECHO, SIEMPRE QUE ESTA CIRCUNSTANCIA APAREZCA MANIFIESTA EN EL LAUDO COMO CAUSAL DE ANULACIÓN–CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 41001-23-31-000-2000-9334-01(19334). COLOMBIA.
"En reiteradas providencias la Corporación ha precisado los supuestos de procedibilidad de esa causal. Así explicó: "El arbitramento puede ser en derecho, en conciencia o técnico; tanto el fallo en conciencia como en derecho tiene que reposar sobre un motivo justificativo. El laudo en derecho que carezca de motivación no se convierte en fallo en conciencia. La diferencia entre estos fallos no radica en ese aspecto formal o accidental, sino que toca con el marco de referencia normativo que condiciona la conducta del juzgador en uno y otro. Es cierto que el juez de derecho debe motivar sus fallos y que dentro de esa motivación las pruebas merecen tratamiento especial. Pero si incumple ese deber en forma absoluta el fallo podrá ser anulable, pero no cambiará su esencia para convertirse en fallo en conciencia. Esto como principio procesal general, porque frente a los laudos arbitrales esa falta de motivación no aparece contemplada dentro de las causales de anulación de los mismos y menos cuando no se niega sino que se clasifica como deficiente o irregular. Solo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado en forma ostensible, el marco jurídico que deba acatar para basarse en la mera equidad podrá asimilarse a un fallo en conciencia; porque si el juez adquiere la certeza que requiere para otorgar el derecho disputado con apoyo en el acervo probatorio y en las reglas de la sana crítica, ese fallo será en derecho, así no hable del mérito que le da a determinado medio o al conjunto de todos". Por consiguiente, si en el laudo se hace la más mínima referencia al derecho,

entendido en su más amplia acepción (normas de derecho positivo, principios generales, doctrina constitucional, o jurisprudencia) es calificable como "en derecho" y no en conciencia. El fallo en conciencia se caracteriza porque el juez dicta la providencia sin efectuar razonamientos de orden jurídico; toma determinaciones siguiendo lo que le dicta su propia conciencia, basado o no en el principio de la equidad, de manera que bien puede identificarse con el concepto de verdad sabida y buena fe guardada."

Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso como causal de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2011-00064-01. Colombia. "Si los particulares pretenden administrar justicia antes de haber sido investidos como árbitros por las partes y de haber asumido la competencia, o después de que su función ha cesado, las decisiones tomadas en tales oportunidades no vinculan ya que habrán sido adoptadas en esos casos por quien o quienes carecen de poder jurisdiccional. Como esa función es transitoria la ley ha precisado, entre otros aspectos, la forma de determinar el momento en que ella cesa."

Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para el proceso como causal de anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 52556. Colombia. "Esta causal se encontraba prevista en términos similares en el numeral 5o del Decreto 1818 de 1998 pero sólo hacía referencia a la anulación del laudo arbitral cuando éste se profiriera después del término fijado para el proceso arbitral sin incluir en dicho término las decisiones que resolvían sobre su aclaración, adición corrección. Con la inclusión de ésta causal se procuró dar solución a las problemáticas presentadas frente aquellos casos en los cuales se discutía si el laudo arbitral debía anularse cuando éste había sido proferido en término pero las decisiones mediante las cuales se resolvían las solicitudes sobre su aclaración, adición o corrección eran expedidas de forma extemporánea. (...) Resulta claro que la providencia que debe anularse en este caso es exclusivamente la extemporánea y por lo tanto si el laudo se expidió en oportunidad, este permanecerá incólume. Por último, es de precisar que para determinar la configuración de la causal a la que se alude no sólo debe tenerse en cuenta el artículo 10o de la Ley 1563 de 2012 que dispone que salvo pacto en contrario, el término máximo de duración del proceso arbitral será de 6 meses, el cual podrá ser prorrogado por 6 meses más. También deben tenerse en cuenta los términos de suspensión del proceso arbitral

previstos en el artículo 11 del mismo Estatuto arbitral, términos que en todo caso no podrán exceder el máximo de 120 días. Adicionalmente, la ley establece un requisito legal para su procedencia consistente en que debe alegarse oportunamente ante el Tribunal de arbitramento una vez haya expirado el término máximo previsto en la ley para proferir el laudo arbitral respectivo."

HABILITACIÓN ARBITRAL – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001032600020070001200. COLOMBIA. "Otro aspecto que merece especial relevancia radica en la naturaleza del acto habilitante, esto es del pacto arbitral, ora en la modalidad de cláusula compromisoria ora en la de compromiso, el cual como fuente es en sí mismo un contrato o negocio jurídico que genera un vínculo inescindible, pues es sólo a partir de ese preciso negocio jurídico que se demarcan los límites tanto temporales como materiales de las competencias que de allí se derivan. Por consiguiente, no podrá someterse a la decisión de árbitro asuntos que no tengan vinculación directa con dichos contratos, tanto desde el punto de vista material, como temporal, caso en el cual se corroboraría la inexistencia de habilitación".

HABILITACIÓN CONVENCIONAL PARA EL ARBITRAJE–SENTENCIA C-242/97. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "La realización de funciones jurisdiccionales por los árbitros requiere por exigencia constitucional de la habilitación por las partes en conflicto para que puedan proferir, en cada caso en concreto, los fallos en derecho o en equidad en los términos legalmente establecidos; lo que indica que para que sea procedente al utilización de este mecanismo en la misión esencial de administrar justicia por particulares investidos transitoriamente de dicha facultad, se requiere indefectiblemente del consentimiento o la habilitación por parte de aquellos que han optado por someter sus conflictos a la decisión arbitral. Debe darse a través de un acuerdo interpartes de escoger el mecanismo del arbitramento como el instrumento adecuado y competente para resolver sus diferencias, a causa de la espontánea y libre voluntad de someterse al proceso arbitral, a cambio del conocimiento de las mismas por la jurisdicción ordinaria. Disponer por vía legal y genérica, a manera de mandato obligatorio, que el instrumento que debe utilizarse para resolver las diferencias surgidas entre los asociados o con la sociedad, con motivo del contrato social, sea el del procedimiento arbitral, desconoce el mandato de la Constitución Política, según el cual "son las partes" las únicas que pueden investir transitoriamente y en cada caso específico a los particulares, a fin de que sirvan de árbitros para que decidan en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley."

I

Identidad del procedimiento para el reconocimiento y la ejecución de laudos. Contradicción de tesis 8/2015. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México. De lo anterior, queda de manifiesto la naturaleza accesoria del juicio de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral, el cual no podría existir sin que previamente se hubiese agotado un procedimiento arbitral y se hubiese dictado el laudo arbitral respectivo, máxime que en el procedimiento de reconocimiento y ejecución no pueden dilucidarse cuestiones de fondo, propias del laudo arbitral, sino únicamente de forma. Lo anterior lleva a concluir que la sentencia que se emita a fin de resolver un juicio especial de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral, es un fallo que resuelve una cuestión accesoria, con posterioridad a la conclusión del procedimiento principal.

Identidad objetiva de las pretensiones en el arbitraje- Sentencia No.410/2010. Tribunal Supremo. España. "La comparación de lo que fue objeto de las controversias entre las que se pretenden los efectos de cosa juzgada exige el examen de lo resuelto en el primer litigio y lo pretendido en el segundo, para lo que ha de tenerse en consideración que los hechos que sirvieron de base a la reclamación en cada caso fueran los mismos y no tanto la clase de acción ejercitada, la cual puede ser distinta en uno y otro pleito, ya que la identidad de la acción no depende de la fundamentación jurídica de la pretensión, sino de la identidad de la causa petendi [causa de pedir], es decir, del conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora".

Idoneidad del recurso de anulación para impugnar el laudo–T-972/07. Corte Constitucional. Colombia. "(...) no significa que se exima a los demandantes de cumplir con el agotamiento de los medios judiciales a su disposición para atacar los laudos, especialmente el recurso extraordinarios de anulación, antes de acudir a la acción de tutela, por el contrario se insiste en que esta carga sigue siendo la regla general para que proceda la garantía constitucional contra un laudo arbitral, sin embargo, en ciertos casos, cuando los medios judiciales sean manifiestamente ineficaces para controvertir los

defectos alegados en sede de tutela, por no encajar éstos dentro de las causales legalmente señaladas, podrá acudirse directamente al amparo constitucional".

IGUALDAD DE LAS PARTES EN EL TRÁMITE ARBITRAL. CONTRADICCIÓN 22/2019 – REGISTRO 29711. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. Este principio implica que las partes puedan ejercer su derecho de defensa durante el proceso arbitral en igualdad de condiciones; siendo una obligación de los árbitros dar un trato idéntico a los actores del arbitraje ante situaciones similares. Esto implica que el tribunal arbitral cuando adopte decisiones que afecten a las partes respete el principio de igualdad debiendo otorgarles las mismas oportunidades y condiciones para ejercer, por ejemplo, su derecho de defensa y contradicción, plazos procesales, tiempo para las alegaciones orales, entrevistas, etc.

IGUALDAD DE TRATO EN EL ARBITRAJE COMO CAUSA DE NULIDAD DEL LAUDO. TESIS AISLADA, REGISTRO 2025648. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MÉXICO. Los dispositivos legales referidos estatuyen el derecho a la igualdad de trato y a la plena oportunidad de hacer valer los derechos como garantía procedimental, para que sean respetados y prevalezcan en la sustanciación del arbitraje; por tanto, permiten examinar como causa de nulidad violaciones de procedimiento que hubieren impedido el pleno ejercicio de esos derechos, o incluso violaciones cometidas en el laudo pero directamente vinculadas con la oportunidad de defensa en la sustanciación de las actuaciones arbitrales previas.

IMPARCIALIDAD DE LOS ÁRBITROS.–SENTENCIA NO. 21/2014. TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "En segundo término, hay que apuntar que la imparcialidad que se predica en la Ley de Arbitraje viene siempre referida a los árbitros, no a la institución administradora del arbitraje. Así se señala en la exposición de motivos de esa ley al mencionar (apartado IV, párrafo tercero) 'el deber de todos los árbitros, al margen de quien los haya designado, de guardar la debida imparcialidad e independencia frente a las partes en el arbitraje', refiriéndose posteriormente en su artículo 17, al regular la abstención y recusación, al deber personal de todo árbitro de ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial, sin que, en todo caso, pueda mantener con las partes relación personal, profesional o comercial, estando obligada 'la persona propuesta para ser árbitro' 'todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia', teniendo obligación 'el árbitro, a partir de su nombramiento', de revelar a 'las partes sin demora cualquier circunstancia sobrevenida'. Siendo así personales los motivos de recusación del árbitro, no colectivos de la institución administradora del

J

Juicio de anulación del laudo arbitral–Sentencia No. 3/2025–STSJ CLM 1168/2025. Tribunal Superior de Castilla la Mancha. España. "Según constante doctrina del Tribunal Constitucional (por todas la reciente STC 146/2024, de 2 de diciembre), queda vedado en el juicio de anulación del laudo arbitral revisar el fondo del asunto sometido a arbitraje ni sustituir la decisión del árbitro por la suya propia, al amparo de un entendimiento extensivo del concepto de orden público del art.41.1 f) LA, favorecida por la falta de nitidez del mismo, que no puede ser tomado como un cajón de sastre o una puerta falsa que permita el control de la decisión arbitral. Si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la noción de orden público. Y, en relación con la motivación, procede controlar, desde luego, su existencia -pues las partes tienen derecho a conocer las razones de la decisión- pero no su suficiencia, pues nos cumple una función similar a la del Tribunal Constitucional cuando revisa en amparo las revisiones judiciales, pero sin constituirnos en una segunda instancia. Finalmente, queda también vedado a este Tribunal y en este procedimiento el debate sobre el contenido de las pruebas practicadas en el proceso arbitral, sobre la eficacia probatoria y sobre su fuerza".

Juicio de congruencia en materia arbitral (antes de la ley 1563 de 2012)–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001032600020030005 01. Colombia. "Para detectar la presencia del vicio de la incongruencia es imperioso comparar lo decidido con lo litigado por las partes, entendiéndose por lo decidido la parte de la sentencia verdaderamente vinculante, O SEA LA RESOLUTIVA, teniendo en cuenta que esta causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes del fallo; que la disonancia a que refiere la ley como violatoria del principio de congruencia nunca puede consistir en que el juez haya considerado la cuestión de manera diferente a como la aprecia una de las partes litigantes, o en que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de ellas ya que la mencionada causal no permite

entrar en el fondo de la decisión; que la decisión emitida por el Tribunal de Arbitramento debe ajustarse a más de la competencia atribuida constitucional y legalmente, a la fijada en forma especial por las partes en el compromiso o en la cláusula compromisoria, según sea el caso, y en la demanda arbitral, ya que son las partes quienes de manera expresa precisan los límites dentro de los cuales los árbitros pueden actuar válidamente; que no puede hablarse de fallo extra petita respecto del hecho declarado por el juez, que si bien no fue alegado expresamente por las partes, aparece debidamente consagrado en su efecto por la ley y es consecuencia de lo solicitado. El juicio de congruencia en materia de laudos arbitrales comprende, en principio, la decisión arbitral, por una parte, y las materias señaladas tanto en la cláusula compromisoria del contrato (como objeto del arbitramento) como las pretensiones contenidas en la demanda de convocatoria del Tribunal, pero esos extremos no son sólo los que demarcan la competencia del Tribunal de Arbitramento, como ya se explicó. Por ello el hecho de que el laudo se aparte de la calificación jurídica o de la interpretación dada a los hechos objeto de controversia o a las normas de aplicación obligatoria no significa que se esté dictando un fallo incongruente, porque es al juez a quien le corresponde aplicar las disposiciones dentro del marco señalado por las partes y la ley pero con el alcance fijado en el ordenamiento jurídico".

JUICIO DE LA ANULACIÓN.–SENTENCIA NO. 88/2013. TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "Dicho lo anterior, no puede aceptarse su planteamiento, pretendiendo en definitiva abordar el fondo del asunto, dado que el carácter revisor de la jurisdicción ordinaria sólo alcanza a emitir un juicio externo acerca de la observancia de las formalidades esenciales, y sometimiento de los árbitros a los límites de lo convenido, anulando lo que constituya exceso en el laudo, pero sin entrar en la controversia que deriva del cumplimiento y ejecución del contrato suscrito en su día entre las partes, sustraída al control de los Tribunales, justamente por el efecto propio del contrato de compromiso en el que éstas, por voluntad concorde, han renunciado expresamente a someter sus divergencias a la Jurisdicción Civil Ordinaria atribuyendo la resolución de las mismas a la Arbitral a la que han de atenerse, debiendo pasar por sus decisiones, según reiterada doctrina y jurisprudencia (SS. TS de 22-9-2010, num. 624/2010, rec. 4/2008 , 20-1-1.982 , 14-7 y 13-10-1.986 , 15-12-1.987 y 20-3-1.990), de plena aplicación al actual marco normativo configurado por la Ley de Arbitraje 60/2.003 de 23 de diciembre, reconduciéndose por otro lado al ámbito del orden público, que en nada se ha visto afectado, por la observancia de todas las garantías procedimentales".

JUICIO ESPECIAL DE EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL. CONTRADICCIÓN DE TESIS 250/2019. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MÉXICO. Luego, señaló que los lineamientos del juicio especial de ejecución de laudo arbitral se encuentran contemplados en los capítulos denominados "Reconocimiento y ejecución de laudos" y "De la Intervención Judicial en la Transacción Comercial y el Arbitraje" del Código de Comercio, y destacó para el contenido de los artículos 1461, 1462 y 1471; y, estableció que de tales disposiciones legales, se seguía que un laudo arbitral puede ser reconocido como vinculante y ejecutado por un juez, para lo cual no es necesario que exista homologación, bastando el desahogo del juicio especial cuya tramitación contemplan los artículos 1472 a 1476 del Código de Comercio, al que deberá allegarse el original del laudo debidamente autenticado o su copia certificada, así como el acuerdo de arbitraje respectivo, destacándose al respecto que sólo la existencia de circunstancias muy precisas podrá ocasionar el que se deniegue el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.

JUSTICIABILIDAD DE LOS LAUDOS ARBITRALES CUANDO UN SUJETO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AFIRMA QUE SE VIOLA EL ORDEN PÚBLICO. SOLICITUD FACULTAD DE ATRACCIÓN 30/2017. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MÉXICO. La porción normativa establece que un laudo podrá ser anulado cuando el juez compruebe que, según la legislación mexicana, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que el laudo es contrario al orden público. En precedentes se ha determinado que se actualiza esta causa de nulidad, cuando la cuestión dilucidada se coloque más allá de los límites de dicho orden, es decir, más allá de las instituciones jurídicas del Estado, de los principios, normas e instituciones que lo conforman y que trasciende a la comunidad por lo ofensivo y grave del yerro cometido en la decisión. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la decisión de la Administración Pública Federal de acudir a un arbitraje, tiene consecuencias normativas que los jueces deben considerar al momento de evaluar la referida causal de nulidad. En primer lugar, la decisión de suscribir una cláusula arbitral es una decisión de política pública, en virtud de la cual deliberadamente se decide que las indeterminaciones semánticas del contrato se reservan a los árbitros y se acepta que las decisiones que éstos tomen pueden impactar la política pública de que se trate, por lo que los jueces constitucionales deben respetar esta decisión y no deben valorar los méritos de las decisiones tomadas por los árbitros al resolver las dudas interpretativas, pues las consideraciones de política pública no deben entenderse incluidas en el concepto de orden público. Lo determinante es verificar que el tribunal arbitral haya resuelto los términos de la controversia dentro de su margen de acción.

Así, con el fin de lograr la optimización del mandato de preservar el arbitraje como expresión de la libertad de las personas para resolver controversias, tratándose de una causal de nulidad que se funda en violación al orden público, ésta sólo se actualizará cuando del laudo se advierta que se atenta directamente contra los principios o instituciones jurídicas fundamentales. Si no obstante lo anterior, se considerara que la decisión arbitral es contraria al diseño original de la política pública, ello no necesariamente actualiza la referida causal, ya que debe recordarse que al tratarse de un contrato público, el Estado cuenta con un régimen exorbitante de derecho público que permite la modificación o extinción del contrato.

JUSTIFICACIÓN DEL ARBITRAJE. AMPARO EN REVISIÓN 755/2011. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MÉXICO. "En cuanto a su justificación, se ha dicho que, el crecimiento demográfico, la concentración de la población y el aumento del tráfico de negocios y servicios han llegado a tal grado que el Estado se ha visto en la necesidad de permitir la posibilidad de instaurar ciertos procedimientos alternos que resuelvan determinados conflictos que se suscitan en la sociedad. Así, la creación de procedimientos convencionales como medios e instrumentos alternos para la solución de controversias se ha debido a la noción del Estado en el sentido de que la acción de administrar e impartir justicia es una atribución establecida en aras de satisfacer el interés y la protección de los particulares, puesto que su finalidad primordial es garantizar pródigamente el acceso a la justicia de sus gobernados. Luego entonces, no debe entenderse que tal atribución de administrar e impartir justicia es única y exclusiva de los jueces o tribunales estatales, pues la propia legislación instituye el derecho de los particulares de someter determinados conflictos a alguno de los referidos procedimientos alternos de solución de controversias, siempre que éstas no impliquen cuestiones propiamente de orden o interés público Ahora bien, el arbitraje al ser el medio alterno de solución de controversias con mayor desarrollo, demanda e instauración en el ámbito mercantil, tanto en la esfera nacional como internacional, representa un instrumento viable y eficaz por el cual los particulares pueden valerse para resolver determinadas controversias que no impliquen cuestiones propiamente de orden o interés público y prescindir así del accionar del Poder Judicial del Estado".

JUSTIFICACIÓN DEL ARBITRAJE. TESIS AISLADA, REGISTRO 2022900. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito establece que el arbitraje es un mecanismo de solución de controversias en virtud del cual las partes acuerdan, mediante la celebración de un convenio arbitral, someter la solución de determinados conflictos que hayan surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una

L

Labor del juez de la anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 32.903. Colombia. "... observa la Sala que se trata de ataques de mérito o de fondo al laudo y no sobre la actividad in procedendo de los árbitros, motivo por el cual no puede ser de recibo para quebrar la validez del laudo en estudio, por cuanto esta Corporación no se encuentra autorizada por la ley para entrar a analizar si las consideraciones de los árbitros cayeron o no en error jurídico o vicio in iudicando cuando decidieron sobre las materias que le fueron sometidas en el pacto arbitral y la convocatoria al proceso, toda vez que este asunto se encuentra por fuera del análisis del recurso extraordinario de anulación de laudos, según se explicó a propósito de las generalidades del mismo al comienzo de esta providencia."

Laudo arbitral agota la actuación de los árbitros. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México. El laudo arbitral constituye la culminación de un procedimiento seguido en forma de juicio, que vincula a las partes contendientes, quienes se sometieron a la decisión de un tercero en ejercicio de la autonomía de su voluntad.

Laudo arbitral con falta de congruencia–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2002-0010-01(22193). Colombia. "Ahora bien, si ese incumplimiento se quiere derivar de lo expresado en la parte motiva y la interpretación que la recurrente buscó darle a la expresión "por las consideraciones y con los alcances señalados en la parte motiva del presente laudo", debe precisarse que la falta de congruencia entre la parte resolutiva y la parte motiva no es, en principio, causal de nulidad del laudo, a no ser como lo ha reconocido la sala, que sea imposible prescindir de la parte motiva para entender la decisión contenida en la resolutiva."

LAUDO ARBITRAL CON INCONGRUENCIA CITRA PETITA–CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001-03-26-000-2008-00032-00(35288). COLOMBIA. "El artículo 311 del CPC prevé que la solicitud de adición procede cuando la sentencia judicial omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento y que es menester adoptar mediante una sentencia complementaria, para que a través de ésta se adopte la decisión que dejó de resolverse, y de esta manera se agregue o añada la providencia incompleta. Hay entonces incongruencia por citra petita (Ne eat iudex citra petita partium) cuando la sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones formuladas y por ello la doctrina no duda en señalar que el órgano jurisdiccional incumple su oficio, dando lugar al vicio de incongruencia cuando no resuelve todos los puntos litigiosos que han sido objeto de debate. Por lo mismo la adición únicamente es procedente cuando se presentan uno o varios puntos no decididos dentro del pronunciamiento judicial y constituye un remedio procesal necesario para dar cumplimiento al mandato estatutario según el cual las sentencias judiciales deben referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales (art. 55 Ley 270 de 1996 LEAJ)."

LAUDO ARBITRAL CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO.–SENTENCIA NO. 33/2019–STSJ GAL 7455/2019. TRIBUNAL SUPERIOR DE GALICIA. ESPAÑA". Por ende, a los efectos previstos en el citado artículo, debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el artº 9.3 de la Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión...' "

LAUDO ARBITRAL CONTRARIO AL ORDEN PÚBLICO. AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 71/2014. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MÉXICO. Así, en base en lo expuesto, se concluyó que un laudo arbitral es contrario al orden público y que, por ende, constituye una causa de nulidad, cuando la cuestión dilucidada se coloque más allá de los límites de dicho orden, es decir, más allá de las instituciones jurídicas del Estado, de los principios, normas e instituciones que lo conforman y que trasciende a la comunidad por lo ofensivo y grave del yerro cometido en la decisión. Un laudo de ese tipo estaría alterando el límite que marca el orden público, a saber, el mecanismo a

M

Marco de acción de la anulación de laudo arbitral–Sentencia No. 46/2019–STSJM 12788/2019. Tribunal Superior de Madrid. España. "En este mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en las SSTC 62/91, de 22 de marzo (EDJ1991/3180), 295/1993 de 23 de julio (EDJ1993/9180), 228/93 de 4 de octubre, 259/93 de 23 de julio (EDJ1993/7399) y 176/96 de 11 de noviembre (EDJ1996/7029) 'ni siquiera permite al órgano jurisdiccional entrar a conocer el fondo de la decisión arbitral pues ni transfiere ni atribuye a los órganos judiciales la jurisdicción ordinaria y exclusiva de los árbitros' (...) es un juicio externo por cuanto el Órgano Judicial es juez sólo de la forma del juicio o de sus garantías procesales tal y como se desprende del apartado VIII del preámbulo de la Ley de Arbitraje 60/2003 de 23 de diciembre actualmente vigente en el que se advierte que (en la nueva Ley) se sigue partiendo de la base de que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros'."

Marco de acción de la función del juez de la anulación–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2012-00087-00(45791). Colombia. "El juez del recurso de anulación no puede entrar a cuestionar, plantear o revivir el debate probatorio, ni establecer si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas, como tampoco el alcance que le imprimió el juzgador arbitral al contenido obligacional acordado por vía de su interpretación del negocio jurídico. Una vez analizados los argumentos facticos – jurídicos que tuvo en cuenta el Tribunal de Arbitramento para proferir el Laudo, no es acertado decir que en este caso se configura la causal de anulación invocada por el censor; porque de la anterior exposición se demuestra que no existe argumento alguno para esgrimir que el Laudo en referencia se hubiese proferido en conciencia, o sea, con absoluto desconocimiento de las normas jurídicas y ausencia total de valoración del acervo probatorio que obra en el proceso; porque verificado el contenido del laudo arbitral acusado salta a la vista todo lo contrario, esto es, que fue proferido con base en el derecho positivo vigente, dado que cumple

con los presupuestos de esa modalidad arbitral, por cuanto se encuentra estructurado en normas jurídicas y en las pruebas obrantes en el expediente, sin que sea menester entrar a juzgar en sede de este recurso extraordinario de anulación el acierto o desacierto de los razonamientos jurídicos de los árbitros, de la aplicación de la ley y del mérito que le otorgó al acervo probatorio, pues ello no está previsto dentro de las causales de anulación de laudos arbitrales, en conformidad con lo explicado al comienzo de la parte considerativa de esta providencia."

MARCO DE ACCIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ARBITRAJE – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001-03-26-000-2007-00061-00(34543). COLOMBIA. "El principio de congruencia exige que el fallo de los árbitros recaiga sobre puntos que sean susceptibles de decisión, por ser materias constitucional y legalmente transigibles y encontrarse dentro del objeto del pacto compromisorio que otorga la competencia a los árbitros para conocer y pronunciarse en relación con la materia que voluntariamente las partes les han confiado para su decisión, de manera que los quebrantos a esa regla de atribución por exceso o por defecto, se encuentran tipificados como hechos pasibles para la invocación de las causales previstas en la legislación para censurar estos eventos. Por consiguiente, los árbitros en los precisos términos y límites del pacto arbitral y la ley, están en la obligación de decidir y proveer sobre cada uno de los extremos del litigio bajo su conocimiento y que surgen de las pretensiones y hechos de la demanda, como de las excepciones del demandado, para que el fallo garantice la debida correspondencia con lo que se pide en la demanda, los hechos en que se fundan esas pretensiones y las excepciones que aparecen probadas, so pena que ante una omisión incurra la providencia en la citada causal de nulidad. Por lo demás, esta causal de anulación ("no haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento"), debe ser analizada conforme a la competencia que la Constitución y la Ley, el pacto o convención arbitral y la relación jurídico procesal que emana del propio conflicto particular que presentan las partes con la convocatoria del Tribunal, les otorga a los árbitros como materia de conocimiento y decisión. De otra parte, es claro que en virtud de la filosofía del recurso de anulación de laudos, edificado por errores in procedendo y no in iudicando, el análisis de este vicio de construcción formal de la providencia debe realizarse de manera objetiva, es decir, verificar que formal y objetivamente el fallo se ajuste a las peticiones de las partes, independientemente si éste es acertado o erróneo, para concluir si efectivamente se presentó o no una omisión de decidir algún extremo de la Litis."

Marco de acción del principio *Kompetenz-Kompetenz* –Sentencia SU500/15. Corte Constitucional. Colombia. "La competencia del tribunal de arbitramento está dada, inicialmente, por el hecho de que las partes hayan manifestado su voluntad en el someterse a esa justicia especial. Posteriormente, una vez pactada la justicia arbitral, la determinación del ámbito de competencia del tribunal de arbitramento se rige por un segundo criterio, que obedece al principio de origen internacional denominado kompetenz-kompetenz, y que indica que es el mismo tribunal arbitral a quien corresponde determinar su competencia para pronunciarse sobre las pretensiones en torno a las cuales hay un conflicto. Este principio comulga con la regla general de autonomía que se concede a los árbitros cuando las partes se someten a su competencia, y determina que "los tribunales tienen un carácter autónomo de interpretación para determinar su propia competencia".

Marco de la anulación del laudo–Sentencia No. 29/2012 -STSJ CAT 5856/2012. Tribunal Superior de Cataluña. España. "El art. 41 LA declara que " sólo " podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe alguno de los motivos tasados establecidos en dicho precepto, lo cual comporta, como estable la Exposición de Motivos de la LA (VIII) que ".. se sigue partiendo de la base que los motivos de anulación del laudo han de ser tasados y no han de permitir, como regla general, una revisión del fondo de la decisión de los árbitros ..", es decir, como declara el ATC 231/1994, de 18 de julio (rec. 3412/1993) (referido a la anterior LA 36/1988, pero aplicable igualmente a la vigente) que las causas de anulación judicial de un laudo no se extienden: "... a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al caso, y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo. Cierto que, con el actual sistema de fiscalización judicial, es posible la atribución de efectos idénticos a la cosa juzgada a Laudos dictados en arbitraje de Derecho que, sin embargo, adolezcan de incorrecciones materiales. Con todo, ha de oponerse a lo anterior que queda garantizada, en todo caso, la corrección del Laudo desde la perspectiva del derecho constitucional sustantivo, habida cuenta de que es posible, por vía de la causa de anulación "ex" art. 45.5 L 36/1988, conceptuar incorrecciones de esa naturaleza como contrarias al orden público (ATC 116/1992 , f. j. 3º)...". Por lo expuesto, resultan improcedentes las alegaciones realizadas en la demanda instando la anulación del laudo, por afectar al fondo del asunto, al no integrar supuesto alguno para su estimación."

N

Naturaleza contractual del convenio arbitral. Sentencia No. 73/2013. Tribunal Superior de Madrid. España. "No podemos olvidar la naturaleza contractual del convenio arbitral, por tanto, presidido por la autonomía de la voluntad que consagra el artículo 1.255 del Código Civil, aunque con determinadas matizaciones, como es que la denominación de los contratos no depende de la voluntad de las partes, sino de su contenido real, pero que permite, como señala la Sentencia de 30 de abril de 2.002: 'a los contratantes a establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público, consagra, como ha recogido la sentencia de esta Sala de 24 de septiembre de 1987, el principio de autonomía de la voluntad y autoriza a modificar el esquema del contrato tipo previsto por el legislador hasta el punto de deformarlo mediante la combinación o adición de pactos especiales, dando así vida a un contrato distinto'."

Naturaleza convencional del arbitraje. Tesis aislada, Registro 2020940. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. México. Los árbitros cuando tienen la facultad de resolver los conflictos jurídicos que las partes someten a su consideración, como emana de un compromiso formado entre particulares, su función es privada, esto es, los actos que emiten derivan del acuerdo de voluntades celebrado entre las partes que da origen al procedimiento arbitral; por tanto, se trata de un arbitraje privado voluntario o contractual, debido a que las partes renunciaron al conocimiento de la controversia por una autoridad judicial para someterse a la decisión de un particular; de ahí que no son funcionarios del Estado ni tienen jurisdicción propia o delegada, dado que sus facultades no derivan de una norma general, sino de la voluntad de los contratantes expresada en el acuerdo que la ley reconoce, y como quien nombra a los árbitros y determina los límites de su oficio no obra en interés público, o sea, en calidad de órgano del Estado, sino en interés privado, lógicamente sus funciones no son públicas, sino privadas, lo que significa que carecen de imperio, de manera que los árbitros no pueden conceptuarse como autoridades del Estado ni sus actos son equivalentes a los de una autoridad.

NATURALEZA DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL ANDINA – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001-03-26-000-2016-00063-00 (56845). COLOMBIA. "Se ha dicho, en cuanto hace a las vicisitudes de la interpretación prejudicial obligatoria dentro del proceso judicial, que ésta no tiene la naturaleza de una petición probatoria (de ahí que ninguno de los trámites, cargas u oportunidades probatorias sean de recibo para este instrumento), por el contrario, se le ha asimilado a un incidente procesal que suspende la actuación hasta tanto se obtenga la interpretación del Tribunal de Justicia, siendo un presupuesto inexcusable e indispensable para la validez del fallo del juez nacional, pues no puede sentenciar el pleito hasta no obtener la interpretación de la norma comunitaria. Ha dicho el Tribunal de Justicia que el fallo que se dicte con violación a este requerimiento implica la sanción de nulidad de esa providencia. De otra parte, el procedimiento de interpretación puede surtirse en cualquier etapa del proceso judicial siempre que sea anterior al momento de emitir fallo; en este sentido hay lugar a entender el término "prejudicial" no como anterior al inicio de la actuación judicial sino precedente al momento en que se dicte providencia que resuelva el litigio".

NATURALEZA DE LA ANULACIÓN. SENTENCIA NO. 3/2012–STSJ ICAN 1033/2012.TRIBUNAL SUPERIOR DE CANARIAS. ESPAÑA. "En este sentido hay que recordar la doctrina del Tribunal Constitucional (STC de 18-7-1994) que en relación con las causas de anulación previstas por la ley en el anterior art. 45 de la LA dijo '....en el art. 45 se contemplan las causas de anulación judicial de un laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje, necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje (aps. 1º a 4º art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24 CE (art. 45.5), sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al caso, y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo'. Así lo recuerda también la STS de 22-6-2009 cuando proclama que: 'Por otra parte, la esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder judicial, determinan que la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales

(SSTC 9/2005, y 761/1996 y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones (SSTS 17 de marzo de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990).' De este modo los diferentes motivos de la acción de impugnación pueden agruparse del siguiente modo: *a)* Control de la existencia y validez del convenio arbitral en tanto la renuncia a la jurisdicción debe ser cierta, aceptada libremente por las partes y admisible desde el punto de vista de las materias susceptibles de arbitraje; *b)* control de la regularidad del procedimiento arbitral en especial en garantía del derecho de defensa y de los principios constitucionales previstos en el art. 24 de la CE entre ellos los principios de igualdad entre las partes, audiencia, contradicción y seguridad jurídica; y *c)* un excepcional control sobre el fondo, estrictamente limitado a la garantía del orden público en sentido material que vendría constituido por aquellos principios políticos, económicos, morales y sociales que conforman el marco jurídico identificador de un estado o un país en cada momento histórico. O dicho de otro modo aquellos principios o normas que configuran la organización general de la comunidad y que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada. De ahí que, salvo el supuesto indicado del orden público en sentido material, el examen judicial debe limitarse a un juicio externo atinente al respeto al convenio arbitral y al cumplimiento de los principios esenciales de todo proceso (STS 13- 10-1986 o STC 20-7-1993)."

NATURALEZA DE LA FUNCIÓN ARBITRAL. CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2015. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. El arbitraje es una convención que la ley reconoce, lo que constituye una renuncia de los particulares para que la autoridad judicial conozca de una controversia, por lo que tiene una importancia procesal negativa, en cuanto que las partes confían la decisión de sus conflictos a uno o más particulares, llamados árbitros; sin embargo, éstos no son funcionarios del Estado ni tienen jurisdicción propia o delegada, y sus facultades derivan únicamente de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo a la ley, y si bien el laudo arbitral no puede revocarse a voluntad de uno de los interesados, no es ejecutivo en sí mismo, ya que sólo puede considerársele como una obra de la lógica jurídica que es acogida por el Estado, por lo que sólo puede ejecutarse a través de un acto realizado por un órgano jurisdiccional que, sin quitarle su naturaleza privada, asume su contenido, y es entonces que se equipara a un acto jurisdiccional.

O

Objeción a institución arbitral. Sentencia No. 26/2012–STSJ M 9664/2012. Tribunal Superior de Madrid. España. "A lo acabado de exponer ha de añadirse que, respecto de la cuestionada imparcialidad, que no se alegó en momento alguno por el demandante de anulación, no bastan las alusiones a la intervención colegial en la percepción de cuotas prevista legalmente en el artº 51 del citado Real Decreto, ni a una especie de interés en dar la razón a la demandada, puesto que la percepción tiene lugar en todo caso como obligación colegial derivada de la interinidad prevista estatutariamente, que no pasan de ser meras indicaciones, conjeturas, sin acreditación alguna que determinen la falta de imparcialidad objetiva o subjetiva del órgano colegial que dictó el Laudo. Además, debe tenerse en cuenta que, como se ha anticipado, no se cumplieron al respecto y respecto de la recusación del mismo, y sin que hubiera óbice alguno para ello, con las prescripciones contenidas en el artº 18 de la Ley de Arbitraje, no constando falta de imparcialidad alguna exigida por el artº 17 de la misma. Y, para finalizar, que lo dicho en su momento sobre la actividad institucional del arbitraje realizado por la Junta de Gobierno del Colegio ha de prevalecer, ya que las menciones efectuadas por el demandante de anulación suponen una pretensión tendente a desvirtuar el convenio arbitral contenido en los Estatutos al que voluntaria y conscientemente se sujetó en su momento por estar integrado en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, no existiendo elementos de juicio ajenos a la propia actividad institucional y de Administración Corporativa y Colegial de aquella, que la hagan desmerecer para ejercer las funciones de arbitraje que le fueron legalmente conferidas por los Estatutos válidos, no impugnados y aprobados por norma reglamentaria que obliga, por igual, a todos los colegiados, sin que existan, por último, motivos que deban llevar a su inaplicación en contemplación de lo establecido en el artº 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otra parte, como señala la demandada en su escrito de contestación, y se colige del examen del expediente arbitral, este motivo no se suscitó en el procedimiento arbitral, incumpliéndose así la obligación establecida al respecto en el artº 17 de la Ley de Arbitraje, pudiéndose constatar una falta de lealtad procesal al respecto puesto que el

demandante ante la Sala también presentó la demanda arbitral sin cuestionar la imparcialidad del órgano colegial arbitral en ningún momento. También hubo un arbitraje precedente entre las partes litigantes en éste que no fue cuestionado en momento alguno, siendo actos propios evidentes con eficacia jurídica impeditiva en éste caso. Dado que no alegó la recusación arbitral en el procedimiento arbitral, tampoco puede ahora suscitarse por vez primera en la demanda de anulación (artº 18 de la Ley de Arbitraje)."

OBJETIVO DE LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO ARBITRAL. CONTRADICCIÓN 22/2019 – REGISTRO 29711. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. Y a la ejecución de un laudo la conceptualizó como el medio para que se materialicen los efectos de lo resuelto en él, incluso de manera coactiva y aún en contra de la voluntad de las partes comprometidas a cumplirlo; constituye el mecanismo, en virtud del cual mediante la intervención judicial y con la posible utilización de la fuerza pública se conmina a materializar y consumar hasta sus últimas consecuencias los efectos del fallo arbitral; el conocimiento de esta vía corresponde al Juez del orden común o federal con jurisdicción territorial en el domicilio del demandado o en su defecto en el de ubicación de los bienes que serán objeto de la ejecución.

OBJETIVO DE LA REGULACIÓN ARBITRAL. REGISTRO: 30473149–OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. La intención de la propuesta del Ejecutivo Federal de reformar el título cuarto, del libro quinto del Código de Comercio que regula el arbitraje comercial en México, adoptada en mil novecientos noventa y tres por el legislador, fue la de tener un sistema jurídico que acogiera al arbitraje como medio preferido de solución de las disputas en el comercio internacional, que fuera acorde con lo que el derecho y los tratados internacionales ya preveían. A virtud de ello, se buscó que el derecho arbitral estuviera diseñado bajo el principio de la no intervención o de la mínima intervención de un órgano jurisdiccional, privilegiando la voluntad de los particulares a través de un proceso más flexible, eventualmente más rápido y sobre todo en el que se contara con la posibilidad de escoger a las personas más preparadas y capacitadas para decidir un conflicto de intereses. Sobre esa cimentación, las normas arbitrales se eligieron herméticas, restrictivas, de auto contenido, constituyen un cuerpo que contiene todas sus piezas sin necesitar apoyarse en otros ordenamientos, a través de la supletoriedad, porque dentro del mismo están los elementos para resolver cualquier eventualidad que surja respecto de un procedimiento arbitral. Son en consecuencia, disposiciones creadas exclusivamente para regular esa forma de heterocomposición y por lo tanto, constituyen una legislación especializada, excluyente de toda regla general

que, por ende, inhibe cualquier posibilidad de interpretación integral de las leyes, de aplicación supletoria de otras normas, incluso de las de orden común y de los principios generales de derecho.

OBJETIVO DEL DEBER DE INFORMACIÓN–SENTENCIA C-305/13. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "Como se desprende del texto demandado el deber de información busca garantizar la imparcialidad y la independencia de árbitros y secretarios, proveyéndose al efecto una regulación aplicable al arbitraje que comporta la administración de justicia de manera transitoria o temporal y que ameritó un tratamiento distinto del correspondiente a la administración de justicia que se presta de manera permanente, lo cual se inscribe dentro de las posibilidades que al legislador le brinda su potestad de configuración. Sobre el particular procede anotar que, a propósito de medidas legislativas que guardan cierta similitud con las contempladas en el precepto acusado, la Corte ha tenido ocasión de pronunciarse sobre cargos que consisten en la posible violación del principio de buena fe por el legislador. Al respecto la Corporación ha indicado que los ordenamientos jurídicos existen en gran medida como un reconocimiento de las imperfecciones del ser humano, que hace necesaria la imposición coactiva de ciertos comportamientos y del cumplimiento de determinadas obligaciones, precisamente porque es razonable pensar que algunas personas estarían dispuestas a no acatar esas pautas normativas."

OBJETIVOS DE LA ANULACIÓN – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001032600020080003100 (35.287). COLOMBIA. "Como se tiene estudiado por la jurisprudencia de esta Sala, el recurso de anulación se funda en el principio cardinal de preservar la legalidad del procedimiento, de forma que la decisión arbitral se revise únicamente por errores in procedendo y no por errores in iudicando, lo cual implica que sólo de manera excepcional el juez de la anulación podrá modificar o adicionar el laudo en caso de que llegare a prosperar la causal de incongruencia por no haberse decidido algunas o todas las cuestiones sometidas a arbitramento o por haber decidido sobre puntos no sujetos a la decisión de árbitros o cuando se concede más de lo pedido. De allí que se trate de un recurso de naturaleza extraordinaria, que no se constituye en una instancia más dentro del respectivo proceso arbitral."

OBJETO DE EXAMEN EN LA ANULACIÓN–SENTENCIA NO. 51/2021–STSJ 7799/2021.TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "La acción de anulación, por consiguiente, sólo puede tener como objeto el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral,

P

Pacto arbitral como manifestación del principio de voluntariedad del arbitramento–Sentencia T-511/11. Corte Constitucional. Colombia. "El arbitramento se rige por el principio de voluntariedad o habilitación, el cual establece como requisito sine qua non para su procedencia, que las partes hayan manifestado previa y libremente su intención de deferir a un grupo de particulares la solución de sus diferencias. Para la Corte, la celebración de dicho negocio supone no solamente la decisión de someter una determinada controversia a consideración de un grupo de particulares, en los cuales depositan su confianza de que la decisión que adopten – cualquiera que ella sea – se ajuste al orden constitucional y legal; sino también la obligación de acatarla plenamente. La determinación de habilitar a los árbitros para poner fin a una determinada disputa se materializa a través de un negocio jurídico de derecho privado denominado pacto arbitral, el cual, según la normativa vigente, puede tomar las formas de cláusula compromisoria o compromiso. Aquel puede abarcar una controversia determinada o referirse de manera general a todos los conflictos de naturaleza transigible que puedan surgir de una relación jurídica. Esta Corporación ha señalado que el pacto arbitral, en tanto negocio jurídico, puede encontrarse viciado de nulidad cuando quiera que la voluntad de las partes esté distorsionada o gravemente comprometida. No obstante, la consecuencia derivada de tal circunstancia es aún más trascendental que aquella originada en la nulidad de cualquier otro acto o declaración de voluntad. En efecto, los vicios del consentimiento de los suscriptores de un pacto arbitral no solo afectan la validez de dicho negocio jurídico, sino que comprometen adicionalmente la legitimidad de cualquier decisión que los árbitros adopten en virtud de él. Es por ello que para la jurisprudencia constitucional es indispensable que el pacto arbitral resulte de la voluntad libre y autónoma de las partes de someter sus diferencias a la decisión de particulares, y no de la imposición de la parte más fuerte en la relación negocial. En adición, el pacto debe ser sumamente claro e inequívoco de la intención de los contratantes de deferir sus conflictos a la decisión de la justicia arbitral."

PACTO ARBITRAL E INEXISTENCIA–CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556). COLOMBIA. "La inexistencia es la "situación de hecho" en la que queda un negocio jurídico que se proyectaba celebrar pero que no alcanzó a formarse por la omisión de un elemento estructural. Pero no puede entenderse que la inexistencia es la "nada absoluta", pues de ser así resultaría "intrascendente para el ordenamiento jurídico", lo que debe entenderse es que existe un proyecto de negocio jurídico pero en el cual se omitió algún elemento indispensable para su formación, omisión que impidió que éste pudiera estructurarse. La inexistencia del negocio jurídico se produce por: *I)* La omisión de alguno o algunos de los elementos esenciales del negocio jurídico que se proyecta celebrar; *II)* Por la ausencia de objeto; *III)* Por la ausencia de la causa; *IV)* Por la ausencia del querer dispositivo; *V)* Por la omisión de la solemnidad requerida para el perfeccionamiento del negocio; y *VI)* Por la falta de entrega de la cosa sobre la cual versa el negocio, si el proyectado es real. Con todo, la inexistencia no se constituye en una sanción impuesta por el ordenamiento, pues al omitirse el elemento estructural no se contraviene ninguna norma imperativa ni se atenta contra las buenas costumbres, sólo que no se realiza lo debido para la formación del acto, es decir, no se reúnen los requisitos para que este se estructure. A diferencia de la nulidad, la inexistencia no requiere declaración judicial, pues se configura o constituye una vez que se omite cualquiera de los elementos necesarios para su formación. Pero lo anterior no implica que el juez no pueda pronunciarse sobre la situación de hecho a la que se hace alusión, al contrario, puede hacerlo pero no para constituir la inexistencia del negocio jurídico sino para constatarla. Por último, es de resaltar que la inexistencia no es susceptible de ser saneada ni por ratificación, ni por prescripción. En efecto, si bien el inciso 1º del artículo 898 del Código de Comercio establece que la "ratificación expresa de las partes dando cumplimiento a las solemnidades pertinentes perfeccionara el acto inexistente a la fecha de tal ratificación…", de la lectura de dicha norma mal puede entenderse que en realidad se encuentre referida a esa figura, pues "sólo puede ratificarse el acto que jurídicamente tiene existencia; y es por esto que lo que allí hay que entender que se dice es que si se ha pretendido celebrar un negocio jurídico y este devino en inexistente, el negocio se perfeccionará si tal elemento se incluye y en la fecha en que se llene. Pero como lo que allí se dispone es protuberantemente obvio, resulta notoriamente inútil semejante previsión". Tampoco puede sanearse el vicio de la inexistencia por prescripción, pues el solo transcurso del tiempo no puede hacer aparecer el elemento estructural que requiere el negocio para su formación. Ahora bien, si se entiende que el objeto del negocio jurídico es el interés que es materia

de la regulación con el respectivo negocio, la carencia del objeto determina la inexistencia del negocio, lo que específicamente significa en cuanto al pacto arbitral que este sería inexistente si no se contempla el objeto o materia que quiere someterse a la decisión de los árbitros, o cuando éste no existe y se cree equivocadamente que sí. También puede ocurrir que la causa, entendida ésta como la necesidad que se pretende satisfacer o la finalidad que se pretende alcanzar con la celebración del negocio, que en el caso del arbitraje se concreta en sustraer de la competencia de los jueces la solución de las controversias originadas entre las partes, no exista, caso en el cual también se originara la inexistencia del negocio jurídico."

PACTO ARBITRAL E INOPONIBILIDAD – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556). COLOMBIA. "En desarrollo del principio de la relatividad de los contratos o negocios jurídicos, estos sólo producen efectos, por regla general, entre las partes que lo celebran y no respecto de terceros. El principio al que se alude se funda en la autonomía dispositiva y en la protección de la esfera de la libertad de todo sujeto, en virtud de lo cual el titular de los intereses es el llamado a disponer de ellos en la oportunidad y en la forma que a bien lo tenga, teniendo en cuenta que, en primer lugar, esa libertad dispositiva tiene límites y que, en segundo lugar, no disponer de ellos es otra forma de disposición. Sin embargo, el anterior postulado se ha visto matizado porque hay eventos en que los efectos de un determinado negocio jurídico no sólo se producen entre las partes disponentes, sino que también se extienden a terceros, esto es a personas que no han participado en la celebración del acto o negocio. Con otras palabras, los efectos de un negocio jurídico normalmente se producen frente a las partes pero sólo excepcionalmente en relación con quienes no han sido parte en él, caso éste último en el cual entonces se dirá que el acto o negocio celebrado es oponible a terceros. Así las cosas, la oponibilidad de los negocios jurídicos se traduce en la virtualidad de estos para incidir en la esfera jurídica de los terceros, es decir produciendo efectos jurídicos frente a personas ajenas al negocio, ya sea creando, modificando o extinguiendo las posiciones jurídicas de estos. Así que, por consiguiente, la inoponibilidad, o ineficacia relativa del negocio jurídico, se reduce a que, como los efectos de los actos de disposición de intereses, por regla general, sólo tienen vocación de afectar a las partes disponentes y no a quienes no han participado en su celebración, los efectos o consecuencias de la celebración del acto dispositivo no pueden afectar a estos o, con otras palabras, les son inoponibles. De ésta forma, por regla general, el negocio jurídico tendrá una eficacia relativa puesto que afectará a

las partes pero no a los terceros, es decir, será relativamente ineficaz ya que en principio no vincula a quienes no participaron en su celebración. Así, se entiende que el negocio jurídico existe, es válido y produce sus efectos frente a las partes que lo celebran pero las consecuencias del negocio no alcanzan a quienes son ajenos a dicha relación. Ahora bien, teniendo en cuenta que el pacto arbitral es un negocio jurídico, es consecuencia obligada que en principio él sólo produce efectos jurídicos frente a las partes que lo celebran y no a quienes no han sido parte en él, razón por la cual tal negocio, por regla general, es inoponible frente a estos."

PACTO ARBITRAL Y NULIDAD ABSOLUTA – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556). COLOMBIA. La nulidad absoluta se produce por alguno de los siguientes vicios a saber: *I)* Por objeto ilícito; *II)* Por causa ilícita; *III)* Por la Incapacidad absoluta de alguna de las partes y; *IV)* Por la omisión de alguna de las "solemnidades que la ley pida para la validez del acto en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las partes que lo celebran". Es de aclarar que configuran nulidad absoluta la omisión de solemnidades exigidas para "el valor" del acto en atención a su naturaleza y no por la omisión de solemnidades constitutivas. Teniendo en cuenta que por medio de la nulidad absoluta se "protege el orden público, las normas imperativas, las buenas costumbres, a los absolutamente incapaces y, ocasionalmente, el negocio en los eventos de nulidad parcial", ésta puede ser alegada por las partes, por todo aquel que conozca el vicio y aún por el Ministerio Público en salvaguarda del interés de la "moral o de la ley". También puede ser declarada de oficio por el juez cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, siempre y cuando estén presentes en el proceso todas las partes del negocio cuya nulidad se pretende decretar oficiosamente, según lo disponen los artículos 1742 del Código Civil, 306 del C.P.C. y 282 del C. G. P. Se considera que hay objeto ilícito o causa ilícita cuando estos se encuentran prohibidos por la ley o son contrarios a las buenas costumbres o al orden público. El objeto del pacto arbitral son los intereses que las partes deciden someter a la decisión de los árbitros, es decir la controversia en torno a la cual gira el proceso arbitral. En anteriores Estatutos se señalaba que sólo podían someterse a la decisión de los árbitros asuntos que fueran susceptibles de transacción, sin embargo por medio del artículo 1° de la Ley 1563 de 2012 se extiende el panorama de materias que pueden someterse a su decisión al disponer que las controversias a solucionar pueden versar sobre "asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice".

Pacto arbitral y nulidad relativa–Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2014-00162-00(52556). Colombia. "La nulidad relativa puede originarse por: I) La incapacidad relativa de alguna de las partes; II) La omisión en el cumplimiento de algún requisito exigido por la ley para el valor del negocio jurídico en atención a la calidad o estado de las personas que lo celebran y; III) El consentimiento viciado por el error, la fuerza o el dolo. En efecto, según lo dispone el artículo 1508 del Código Civil los vicios de los que puede adolecer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Según los artículos 1510 a 1512 del mismo Estatuto el error es la "discordancia entre la realidad y lo que una de las partes cree sobre la identidad de las cosas, las calidades esenciales o accidentales de ellas, la naturaleza del negocio jurídico que se celebra, o la persona con la que se celebra". La fuerza conforme a los artículos 1513 a 1514 del Código Civil es la presión física o moral de carácter grave y determinante que se ejerce sobre una persona bajo las consideraciones de su sexo, edad o condición, para que celebre un determinado contrato. El dolo según el artículo 1515 del Código Civil es la maquinación fraudulenta o engañosa que despliega una persona con el objeto de obtener el consentimiento de otra u otras para celebrar un determinado negocio jurídico. Ahora bien, para que el dolo se constituya en un vicio que afecta el consentimiento de las partes contratantes debe estar debidamente acreditado y debe ser determinante para la celebración del acto o negocio jurídico, es decir debe constituirse en el móvil que indujo a la persona a contratar. A diferencia de la nulidad absoluta, la relativa sólo puede ser alegada por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes, sus herederos o cesionarios y no puede ser declarada de oficio por el juez. Esta puede ser saneada por ratificación o por el transcurso del término de 4 años, en materia civil, o de 2 años, en materia mercantil."

Pacto arbitral y principio de planeación del contrato estatal – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 5001-23-31-000-1998-00135-01(17859). Colombia. "Si se acude al pacto arbitral es porque, previamente y conforme al principio de planeación del contrato, se ha analizado su necesidad y/o conveniencia y, por lo mismo, no puede, de la noche a la mañana, dejarse de lado lo acordado, con el pretexto de que una de las partes acudió al juez institucional y la otra no formuló la excepción de pacto compromisorio. En efecto, el consentimiento forjado por la Administración sobre bases de planeación del negocio y de razonabilidad, consolidado en el acuerdo documental de voluntades de las partes contratantes, se traduce materialmente –como ya se vio- en la existencia de una cláusula compromisoria contenida en el contrato, o en un

Q

Quebrantamiento del concepto de orden público atribuido a desequilibrio en el arbitraje–Sentencia No. 22/2014. Tribunal Superior de Madrid. España. "En segundo lugar se alega que 'el laudo es contrario al orden público' (art. 41.1 f), ya que la demandante se ha encontrado en una situación discriminatoria y de desamparo, pues no ha existido plano de igualdad al someterse al arbitraje, por falta de imparcialidad. En cuanto a lo que se debe entender por orden público, como ya dijo esta Sala en Sentencia de 23 de Mayo de 2.012, Recurso 12/2011, entre otras muchas posteriores '.. por orden público han de estimarse aquel conjunto de principios, normas rectoras generales y derechos fundamentales constitucionalizados en el Ordenamiento Jurídico español, siendo sus normas jurídicas básicas e inderogables por la voluntad de las partes, tanto en lo social como en lo económico (Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala 2ª, nº 54/1989, de 23-2), y por ende, a los efectos previstos en el citado artículo, debe considerarse contrario al orden público, aquel Laudo que vulnere los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el Capítulo II, Título I de la Constitución, garantizados a través de lo dispuesto en términos de generalidad en el artículo 24 de la misma, incluyendo la arbitrariedad patente referida en el artº 9.3 de la Constitución, y desde luego, quedando fuera de éste concepto la posible justicia del Laudo, las deficiencias del fallo o el modo más o menos acertado de resolver la cuestión...'."

Quebrantamiento del deber de motivación en el arbitraje.–Sentencia 50/2022. Tribunal Constitucional. España. "La sentencia ahora recurrida en amparo ha anulado el laudo arbitral por entender que es contrario al orden público por haber realizado una motivación errónea respecto a la posible prejudicialidad penal relativa al objeto sometido al procedimiento arbitral, la resolución de un contrato de ejecución de obra y sus consecuencias económicas".

QUEBRANTAMIENTO DEL DEBER DE REVELACIÓN DE UNO DE LOS ÁRBITROS–SENTENCIA 11/2026- STSJ M 5458. TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "Considera la parte demandante que el cumplimiento de dicho deber afecta a la imparcialidad de la Sra. Árbitra. Dicha falta al deber de revelación se contrae a los siguiente: La petición de declaración de independencia se formula por la parte Demandante una vez dictado el Laudo Final y con ocasión de solicitarse el dictado de un Laudo aclaratorio, planteándose "la necesidad de extender dicha declaración de independencia [en relación a la inicialmente realizada al comienzo del procedimiento arbitral] de extender dicha declaración de independencia e imparcialidad en relación con D. Oscar , socio director del despacho RTK Legal Abogados, que representa a la parte demandante, así como respecto de AMPER, sus admnistradores, accionistas y directivos, dada la implicación de un interés directo por parte de la misma sociedad." A la vista de las alegaciones realizadas por la Árbitra, cabe hacer por esta Sala las siguientes consideraciones: *a)* Con carácter general se aprecian dos circunstancias que nos llevan a rechazar la imputación de falta de imparcialidad que se formula por la parte Demandante. Sin duda, la independencia e imparcialidad el árbitro, es uno de los pilares sobre los que descansa la legitimación y confianza en el sistema arbitral, como forma eficaz de resolución de conflictos. Así deriva de la previsión contenida en el art. 17.1 LA: "Todo árbitro debe ser y permanecer durante el arbitraje independiente e imparcial." No sólo se hace dicha proclamación, sino que se impone en el apdo. 2 del citado artículo, la obligación de revelar todas las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad e independencia." Obligación que permanece durante todo el desarrollo del procedimiento arbitral. Las partes, a través de dicho deber de revelación o del conocimiento que puedan tener, puede ejercer su derecho a un árbitro imparcial e independiente, formulando en su caso la oportuna recusación".

QUEBRANTAMIENTO DEL PRECEDENTE EN UN LAUDO–SENTENCIA T-186/15. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "La Sala reitera, conforme fue señalado en la sentencia SU-556 de 2014, que el desconocimiento del precedente establecido por la Corte Constitucional, derivado de la aplicación directa de una regla que tiene su origen en la propia Carta Política y cuya infracción conduce a la vulneración de una norma de raigambre superior, hace parte de las causales específicas de prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y, debido a que esta doctrina es aplicable a las decisiones de los Tribunales de Arbitramento, cobija también los laudos arbitrales. En este orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, la función judicial ha de ejercerse en

cumplimiento de los principios de independencia y autonomía. Con todo, la Corte ha definido el carácter vinculante del precedente constitucional, por virtud de la garantía de la seguridad jurídica, la coherencia y razonabilidad del sistema jurídico, la protección del derecho a la igualdad y la salvaguarda de la buena fe y la confianza legítima. Por esta razón, los jueces de la República no pueden apartarse de un precedente establecido por esta Corporación, a menos que exista un principio de razón suficiente que justifique su inaplicación en un caso concreto, previo cumplimiento de una carga mínima de argumentación. En este sentido, el precedente constitucional asegura la coherencia del sistema jurídico, pues permite determinar de manera anticipada y con plena certeza la solución aplicada a un determinado problema jurídico, de suerte que los sujetos están llamados a ajustar su actuar a las normas y reglas que los regulan, en concordancia con la interpretación que se ha determinado acorde y compatible con el contenido de la Constitución Política. Por lo demás, la aplicación del precedente garantiza la igualdad ante la ley, a través de la uniformidad en la aplicación del derecho."

QUEBRANTAMIENTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL ARBITRAJE. SENTENCIA NO. 29/2012 -STSJ CAT 5856/2012. TRIBUNAL SUPERIOR DE CATALUÑA. ESPAÑA. "Por lo expuesto, establecido el diferente plano de igualdad en que las partes se han encontrado para someterse al arbitraje, en el caso examinado, cabe inferir, para aquellos supuestos en los que conforme al art. 14 LA se le asigna la administración de arbitraje y la designación de árbitros a una asociación de arbitraje, es claro que desaparece la base misma de la independencia e imparcialidad -requisito sine qua non para el correcto desarrollo del procedimiento arbitral- pues si bien dichas cualidades se predican de los árbitros que han sido designados (art. 17 LA) en casos, como el presente, " ... en los que la vinculación entre la entidad de arbitraje y los letrados que asesoran a una de las contrapartes es patente, la parcialidad puede predicarse también de la entidad arbitral viciando de partida cualquier procedimiento arbitral que se formalice ..." (SAP Barcelona -Sec. 15- 270/2007, de 15 de mayo), pues "...una cosa es elegir la forma o medio a través del cual se ha de decidir aquélla y otra muy distinta es que en el propio contrato se inserte de modo obligatorio una determinada cláusula arbitral con designación preconstituida de quien ha de administrar el arbitraje, máxime cuando la inclusión de tal cláusula, análoga en una masa de contratos, pone de manifiesto la concertación previa entre una parte contratante y la Asociación elegida para llevar a cabo el arbitraje ..." (SAP Madrid -Sec. 13ª- 253/2010, de 4 de mayo)."

R

Rasero de análisis para el juez de la anulación o de la ejecución del laudo. Contradicción 22/2019 – Registro 29711. Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. México. Esto es, los órganos jurisdiccionales que han de pronunciarse sobre la oposición a la ejecución del laudo o su nulidad, según sea el caso, únicamente puede denegar la ejecución del laudo, o bien, declarar su nulidad, si se dictó bajo alguna de las circunstancias que refiere el artículo 635 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, que se pueden resumir de la siguiente forma: *a)* Una de las partes en el acuerdo de arbitraje estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido, en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto; *b)* La parte contra la que se pide la ejecución no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no pudo, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; *c)* El laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; *d)* La composición del tribunal o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a la ley del país donde se efectuó el arbitraje; *e)* El laudo no sea aún obligatorio para las partes o hubiere sido anulado o suspendido por el Juez del país, en que o conforme a cuyo derecho hubiere sido dictado ese laudo; o, *f)* El Juez compruebe que el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje; o que el reconocimiento o la ejecución del laudo son contrarios al orden público. No podría ser de otra forma, esto es, el juzgador no está facultado para declarar la nulidad de un laudo arbitral o del procedimiento respectivo con base en causas ajenas a la previstas en el artículo 635 del ordenamiento en cita, ya que ello implicaría extender los motivos que el legislador previó para oponerse a la ejecución del laudo –que se ha estimado también dan acción para solicitar su nulidad–, lo que de alguna manera tornaría de facto dejar sin efectos el límite establecido en el referido precepto, por cuanto que para evitar la ejecución de laudo por razones diversas a los supuestos mencionados, bastaría con que la parte contra

quien ésta se pide se anticipara y reclamara la nulidad del laudo precisamente con base en motivos ajenos a los señalados en el mencionado dispositivo legal, lo cual resultaría inadmisible.

RASGOS DISTINTIVOS DEL LAUDO ARBITRAL. CONTRADICCIÓN 22/2019 – REGISTRO 29711. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. Por tanto, el laudo es la resolución dictada en el procedimiento arbitral, con eficacia equiparable a las sentencias judiciales, que dirime el conflicto surgido entre las partes por efecto del compromiso por el que éstas acordaron atribuir la resolución de sus controversias a dicho procedimiento, renunciando a someterlas a la jurisdicción ordinaria civil, por lo que debe tratarse de cuestiones relativas a materias sobre las cuales puedan disponer las partes, por lo que la actuación del árbitro tiene un contenido material similar al ejercicio de la función jurisdiccional, y el laudo dictado produce los mismos efectos que una resolución jurisdiccional, esto es, produce efectos de cosa juzgada y tiene fuerza ejecutiva, aunque no sea firme.

RAZÓN DEL ARBITRAJE. CONTRADICCIÓN 22/2019 – REGISTRO 29711. PLENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. MÉXICO. Debe tomarse en cuenta que el arbitraje es un medio jurídico de arreglo de litigios, basado en la voluntad de las partes, que eligen a particulares a quienes se les confía la toma de una decisión de suyo obligatoria. En todo caso, lo que buscan las partes que se someten al arbitraje es la rapidez, la economía, la imparcialidad, etcétera. El arbitraje, como negocio jurídico, en gran medida sustituye a la jurisdicción civil del Estado, por ello el auténtico arbitraje es el que participa de la voluntad de los sujetos obligados, quienes acuden a él buscando evitar un procedimiento ante los tribunales, que puede resultar lento, complicado, costoso, demasiado formal y sin la especialización que las partes esperarían de un tribunal. La Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional (Convención de Panamá, 1975), se refiere al arbitraje como el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral, las diferencias que pudieran surgir o que hayan surgido entre ellas, con relación con un negocio de carácter mercantil. El laudo arbitral constituye la decisión tomada por el árbitro o por un tribunal arbitral, encaminada a resolver el conflicto de intereses que llevó a las partes a someterse a dicha decisión arbitral.

RAZÓN DEL RECURSO DE ANULACIÓN – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 110010326000 2006 00012 00 (32.514). COLOMBIA. "El Estado ejerce directamente su función de administrar justicia a través del trámite del recurso extraordinario de anulación

del laudo arbitral, que fue creado por el legislador como un mecanismo de tutela de la justicia arbitral, puesto que su finalidad es la de permitir que el juez estatal verifique si en la tramitación de los procesos arbitrales se cumplieron las normas legales que los rigen; así mismo, la ley estipuló las causales por las cuales aquel procede, y que corresponden precisamente a vicios que se pueden presentar en la tramitación del proceso arbitral. Se trata entonces, de un mecanismo mediante el cual la jurisdicción estatal puede asumir el conocimiento de la decisión producida como culminación de dicho proceso arbitral, aunque exclusivamente con la finalidad de verificar que éste se haya adelantado conforme a las estipulaciones que lo rigen y que en él se haya garantizado y respetado el derecho de contradicción y de defensa de las partes, verificando así mismo que la decisión se haya tomado dentro de los precisos límites impuestos por éstas y por la ley y resolviendo todas las cuestiones sometidas al conocimiento de los árbitros; es decir que el recurso extraordinario de anulación procede únicamente por errores in procedendo, o sea aquellos en los que formalmente hubiera podido incurrir el tribunal en el trámite del proceso y la decisión, sin que el juez del recurso pueda adentrarse en las cuestiones de fondo resueltas en el laudo. Como culminación de ese estudio que adelanta la jurisdicción en virtud del recurso extraordinario, puede producirse la anulación total o parcial del laudo arbitral acusado, si se comprueba la existencia de alguna de las causales de anulación taxativamente consagradas por la ley; no obstante, existen algunas de ellas, que permiten al juzgador del recurso proceder a corregir el laudo, tal y como lo dispone el inciso 2° del artículo 40 del Decreto 2279 de 1989 -reformado por el artículo 129 de la Ley 446 de 1998-, en el sentido de que cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1°, 2°, 4°, 5° y 6° del artículo 38 del mismo decreto , se declarará la nulidad del laudo y "...en los demás casos se corregirá o adicionará" ."

RAZONABILIDAD Y COHERENCIA DE LA DECISIÓN ARBITRAL–SENTENCIA T-244 DE 2007. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "Al respecto cabe señalar que si bien la interpretación que hizo el juez arbitral resulta discutible, tampoco carece absolutamente de respaldo normativo ni es irrazonable, por lo cual tampoco ha de prosperar en este extremo el amparo constitucional solicitado. En definitiva, en el caso concreto existían diversas opciones valorativas e interpretativas tanto de los hechos como de las pruebas y de las disposiciones normativas que se debatieron en el trámite arbitral. Ahora bien, de las diversas opciones interpretativas y valorativas la mayoría de los miembros del tribunal arbitral acogieron aquellas que eran contrarias a los intereses del F.R.A. y que favorecían las pretensiones de la parte convocante,

sin embargo, ninguna de las posturas acogidas en el laudo arbitral configura un defecto de entidad suficiente para que prospere el amparo constitucional solicitado. Se reitera que la tutela en materia de providencias judiciales, dentro de las cuales se incluye los laudos arbitrales, no tiene la naturaleza de un recurso ordinario ni el juez de protección de los derechos fundamentales actúa en estos casos como una instancia superior del órgano que profirió la decisión examinada, facultado para realizar nuevas valoraciones probatorias o para reemplazar la interpretación fáctica y normativa que hizo el juez competente en el caso concreto."

RAZONAMIENTO PARA LA MAYOR RIGIDEZ DE IMPOSICIÓN DE COSTAS EN LA ANULACIÓN ARBITRAL–CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001-03-26-000-2001-0027-01 (20.356). COLOMBIA. "La Sala entiende que el fundamento de esa especial disposición, que regula la materia de las costas judiciales respecto del recurso de anulación de laudos arbitrales, radica en la garantía de los principios del proceso arbitral, en especial de los que tienen que ver con la celeridad, la economía procesal y la descongestión de la justifica [sic]. En efecto, la interposición y trámite de un recurso de anulación mediante la invocación de causales que no tienen vocación de prosperidad entorpece la agilidad que caracteriza el proceso arbitral. Recuérdese que uno de los principales motivos que conducen a que los sujetos de derecho sustraigan del conocimiento de la justicia ordinaria los litigios, es la necesidad de una decisión pronta; propósito que se ve contrariado cuando, sin justificación, se interponen recursos de anulación que ab initio no tienen vocación de prosperidad. Es por ello que la norma que regula las costas en este trámite procesal es más estricta. El legislador sancionó objetivamente la conducta de quien interpone el recurso de anulación invocando causales que no prosperan y lo hizo merecedor, por esa sola circunstancia, de la condena en costas."

REAFIRMACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN EL ARBITRAJE.– SENTENCIA NO. 18/2022- STSJ M 5894/2022. TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "Es ineludible la cita de las Sentencias del Tribunal Constitucional 46/2020, de 15 de junio de 2020, 17/2021, de 15 de febrero de 2021, y 65/2021, de 15 de marzo de 2021, que han insistido con especial rigor en los fundamentos del procedimiento arbitral: la autonomía de la voluntad de las partes como base, el alcance limitado del concepto de 'equivalente jurisdiccional', la naturaleza excepcional de la acción de nulidad, el ámbito reducido de control de los Tribunales de Justicia sobre los laudos arbitrales, y una llamada especial al riesgo de expansión del concepto de orden público.

S

Saneamiento de la ocurrencia de vicio en la actuación arbitral. Sentencia No. 22/2014. Tribunal Superior de Madrid. España. "La anterior Jurisprudencia debe ser aplicada al supuesto analizado, y así, y en primer término, debemos decir que hay que tener en cuenta que el artículo 6 de la LA dispone que 'Si una parte, conociendo la infracción de alguna norma dispositiva de esta ley o de algún requisito del convenio arbitral, no la denunciare dentro del plazo previsto para ello o, en su defecto, tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a las facultades de impugnación previstas en esta ley'. De lo anterior se desprende que no cabe invocar una infracción cometida en el procedimiento como motivo de anulación si no se dio con anterioridad oportunidad a los árbitros de corregirla. Este entendimiento de la acción de anulación como remedio subsidiario parece haberse decantado en la práctica judicial española. Las SSAP Madrid de 28 septiembre 2002 (sec. 10), de 18 marzo 2004 (sec. 10ª) y de 26 abril 2005 (sec. 2ª) entienden que la acción de anulación no autoriza a la parte perjudicada por el laudo a suscitar sorpresivamente cuestiones que no fueron planteadas en el arbitraje. Y, en este caso, la parte demandante en su escrito de contestación a la demanda de arbitraje no puso de relieve la supuesta falta de imparcialidad de árbitro, ni de la Corte Arbitral, a la que ahora se refiere copiando Jurisprudencia existente al respecto, en consecuencia, la demandante admitió implícitamente la imparcialidad e independencia del árbitro y/o de la Corte Arbitral, conociendo las circunstancia generales que ahora se alegan, sin que se ponga de relieve por la misma causa alguna posterior, por la que el árbitro no es imparcial."

Selección del secretario de la lista del centro de arbitraje en el que se adelanta el procedimiento arbitral–Sentencia C-305/13. Corte Constitucional. Colombia. "La selección del secretario del tribunal de una lista conformada por quienes llenan las condiciones para hacerlo garantiza la idoneidad y confianza que exige la importante labor desarrollada por los centros de arbitraje al apoyar a los árbitros en la misión de administrar justicia, debiéndose destacar, finalmente, que los requisitos exigidos a quienes aspiren a ser secretarios de tribunal arbitral son los de ley y que se dirigen a salvaguardar la moralidad pública y el interés general."

SEMEJANZAS ENTRE LA DECISIÓN JUDICIAL Y LA ARBITRAL.–SENTENCIA NO. 12/2024–STSJ CL 5005/2024. TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LEÓN. ESPAÑA. "En otro orden de cosas, cumple recordar que las semejanzas entre una decisión judicial y otra arbitral no van más allá de los efectos que se predican de ambas, a saber, el de cosa juzgada y el de su propia ejecutividad; pero ello no significa que el procedimiento arbitral se pueda ver sometido a las exigencias propias del llamado derecho a la tutela judicial efectiva -ex. art. 24 CE-, puesto que ni es un procedimiento judicial ni los árbitros ejercen jurisdicción -cometido atribuido a la exclusiva competencia de Jueces y Magistrados-. Quiere ello decir que no está sometido a las exigencias y garantías que establece el artículo 24 de la Constitución. Todo lo contrario; cuando las partes deciden voluntariamente de acuerdo con la autonomía de su voluntad eludir la jurisdicción y someterse a un procedimiento de esta índole, lo que eligen es sustraerse a las normas que rigen el procedimiento judicial. La STS 65/2021 afirma textualmente que quienes se someten libre, expresa y voluntariamente a un arbitraje, como método heterónomo de solución de su conflicto, eligen dejar al margen de su controversia las garantías inherentes al artículo 24 CE y regirse por las normas establecidas en la Ley de arbitraje."

SENTIDO DE LA ANULACIÓN FRENTE A LAUDO ARBITRAL–SENTENCIA NO. 2/2025–STSJ MU2243/2025. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA. ESPAÑA. "Por lo que se refiere a los aspectos formales o procedimentales, las causas de anulación judicial de un laudo, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje, referido siempre a objetos de libre disposición para las partes, necesariamente deben limitarse, como señala el Auto TC 116/1992, a los supuestos de contravención grave de las garantías esenciales de procedimiento aseguradas por el artículo 24 CE, sin extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al caso carentes de relevancia constitucional."

SENTIDO DE LA ANULACIÓN.–SENTENCIA NO. 27/2022- STSJ M 10137/2022. TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "Con carácter general cabe señalar, como tiene declarado esta Sala, entre otras en nuestra sentencia de fecha 16 de enero de 2019, con cita de nuestras sentencias de fechas 13 de diciembre de 2018 y 4 de julio de 2017 que: 'la acción de anulación no configura una nueva instancia, como si este Tribunal estuviese habilitado por la ley para revisar, con plenitud de jurisdicción, el juicio de hecho y la aplicación del Derecho efectuados por los árbitros al laudar."

T

Taxatividad de la anulación de laudos – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 15623. Colombia. "Es característico del recurso de anulación de laudos arbitrales la taxatividad en la aplicación de las causales expresamente contempladas en la ley. De igual manera acontece en el trámite común y ordinario de nulidades, en las cuales el legislador hace énfasis en el principio de taxatividad de las causales. Este rigor en la aplicación de las causales de nulidad, tiene fundamentos basados en el principio de la especificidad legal, que se aplica de manera particular respecto de las nulidades, en la mayoría de países de tradición jurídica romano germánica. En materia del recurso extraordinario de anulación, nuestra legislación dispone que el juez debe estarse única y exclusivamente a las causales perentoriamente señaladas como susceptibles de fundar la anulación eventual del laudo (...)."

Taxatividad de la anulación. Sentencia No. 16/2012–STSJ CV 3916/2012. Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. España. "Se ejercita por la parte demandante, al amparo de los artículos 40 y siguientes de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, acción tendente a la anulación del laudo arbitral mencionado en los antecedentes de hecho de la presente resolución. Dicha acción debería haberse fundado en uno o varios motivos de los establecidos en el artículo 41 de la referida Ley al constituir los mismos la causa de pedir de la pretensión anulatoria".

Taxatividad de los motivos de anulación.–Sentencia No.78/2014. Tribunal Superior de Cataluña. España. "En este sentido hay que recordar la doctrina del Tribunal Constitucional (STC de 18-7-1994) que en relación con las causas de anulación previstas por la ley en el anterior art. 45 de la LA dijo: '...en el art. 45 se contemplan las causas de anulación judicial de un laudo, las cuales, en atención a la naturaleza propia del instituto del arbitraje, necesariamente deben limitarse a los supuestos de contravención grave del propio contrato de arbitraje (aps. 1º a 4º art. 45) o de las garantías esenciales de procedimiento que a todos asegura el art. 24 CE (art. 45.5), sin

extenderse a los supuestos de infracción del Derecho material aplicable al caso, y ello porque, de lo contrario, la finalidad última del arbitraje, que no es otra que la de alcanzar la pronta solución extrajudicial de un conflicto, se vería inevitablemente desnaturalizada ante la eventualidad de que la decisión arbitral pudiera ser objeto de revisión en cuanto al fondo'. Así lo recuerda también la STS de 22-6-2009 cuando proclama que: 'Por otra parte, la esencia del arbitraje y el convenio arbitral, en cuanto expresa la voluntad de las partes de sustraerse a la actuación del poder judicial, determinan que la intervención judicial en el arbitraje tenga carácter de control extraordinario cuando no se trata de funciones de asistencia, pues la acción de anulación, de carácter limitado a determinados supuestos, es suficiente para la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva, en su modalidad de acceso a los tribunales (SSTC 9/2005 , y 761/1996 y 13/1927) y, según la jurisprudencia esta Sala, tiene como objeto dejar sin efecto lo que pueda constituir un exceso del laudo arbitral, pero no corregir sus deficiencias u omisiones (SSTS 17 de marzo de 1988, 28 de noviembre de 1988, 7 de junio de 1990).' De este modo, los diferentes motivos de la acción de impugnación pueden agruparse del siguiente modo: a) Control de la existencia y validez del convenio arbitral en tanto la renuncia a la jurisdicción debe ser cierta, aceptada libremente por las partes y admisible desde el punto de vista de las materias susceptibles de arbitraje; b) control de la regularidad del procedimiento arbitral en garantía del derecho de defensa y de los principios constitucionales de igualdad entre las partes, audiencia y contradicción; y c) un excepcional control sobre el fondo, estrictamente limitado a la garantía del orden público en sentido material (no procesal) que vendría constituido por aquellos principios políticos, económicos, morales y sociales que conforman el marco jurídico identificador de un estado o un país en cada momento histórico. O dicho de otro modo aquellos principios o normas que configuran la organización general de la comunidad y que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada."

TAXATIVIDAD DEL RECURSO DE ANULACIÓN–CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 17797. COLOMBIA. "Es característico de los recursos extraordinarios, entre ellos el de anulación de los laudos arbitrales, la limitante legal respecto de las causales expresamente contempladas. Tal situación limitante también se da en otras materias, como son las nulidades sustanciales y procesales, en las cuales el legislador hace énfasis en el principio de taxatividad, el cual se fundamenta en el principio de la especificidad legal, aplicable en la mayoría de países de tradición jurídica romano germánica. (...) Con fundamento en lo expuesto, la Sala se abstiene de estudiar las argumentaciones expuestas por el recurrente que no corresponden

a las causales expresamente invocadas en la formulación del recurso o que no están contempladas como tales en la norma aplicable al caso concreto."

Técnica del recurso de anulación – Consejo de Estado, Sección Tercera. Radicación o expediente número: 11001-03-26-000-2017-00007-00 (58.527). Colombia. "El artículo 40 de la ley 1563, dispone que el recurso de anulación deberá interponerse por escrito ante la secretaría del tribunal arbitral, debidamente sustentado dentro de los 30 días siguientes a la notificación del laudo, o de la notificación del auto que decida la solicitud de aclaración, corrección o complementación, con indicación de las causales de anulación invocadas, las que deben ceñirse a las que taxativamente señale la ley. Para detallar las exigencias formales de este recurso, la jurisprudencia de la Sala ha dicho que para la interposición, la admisibilidad y el estudio del recurso extraordinario de anulación deben cumplirse los siguientes requisitos: *a)* que su presentación sea oportuna; *b)* que se haga por escrito ante el respectivo tribunal de arbitramento; *c)* que se ciña a las causales de anulación legalmente previstas, y *d)* so pena de que el recurso sea declarado desierto, que las causales sean sustentadas. La sustentación del recurso, entonces, deviene necesaria para que el juez en sede de anulación pueda, de manera efectiva, acometer su estudio y decisión, en tanto que allí se explicitan los motivos de reproche, se muestra, en forma argumentada la configuración del vicio o vicios del laudo arbitral que da o dan lugar a la tipificación de cada una de las causales de anulación invocadas, se fija el alcance del recurso interpuesto, y se delimita la competencia del juez del recurso en cuanto se precisa e identifica la materia que se somete a su consideración. Sobre este aspecto del recurso ha dicho la jurisprudencia de la Sección Tercera "que las razones que indique el recurrente deben configurar la causal que aduce y por lo tanto la causal invocada será la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no su nombre o denominación. "Conjugando todo lo que se acaba de expresar resulta que la sustentación del recurso no consiste en la sola indicación del texto legal que consagra una determinada causal, como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna o de varias de las causales enlistadas en la ley, se aduzcan argumentaciones que en verdad no configuran ninguna de las previstas por el legislador". De la misma manera, debe entenderse que la exigencia que hace el legislador al recurrente, de precisión y sustentación de las causales invocadas, entraña, necesariamente, un imperativo de sustentación individual y autónoma de cada causal que se proponga para sustento de la pretensión anulatoria, sin que pueda trasladarse esta carga al juez para que sea él quien oficiosamente sustente o integre el recurso, puesto que éste es un recurso extraordinario, de carácter dispositivo y rogado."

V

Validez de la renuncia al pacto arbitral luego de emitido el laudo–Sentencia No.410/2010. Tribunal Supremo. España. "El documento emitido por el árbitro es un laudo firme y ejecutable, por las siguientes razones: *(i)* el arquitecto que lo suscribe plasmó en su contenido el resultado de la función arbitral que se le encomendó y que había aceptado tras la protocolización ante notario del compromiso arbitral asumido por la actora y la empresa constructora codemandada en el contrato de ejecución de obra, *(ii)* es irrelevante que el árbitro haya denominado al documento «informe», pues en el mismo se consigna expresamente que su elaboración es consecuencia del desempeño de la función arbitral, *(iii)* siendo el arbitraje de equidad, se ajusta, en lo esencial, a lo dispuesto en el artículo 32.1 LA 1988, aplicable al litigio por razones temporales, y la conclusión del árbitro permite conocer mediante una simple operación aritmética la cantidad de la que es acreedora la aquí demandante, *(iv)* el laudo fue protocolizado y notificado a las partes, conforme al artículo 33.2 LA 1988, las cuales no instaron la subsanación o corrección de errores u omisiones como las facultaba el artículo 36.1 LA 1988, por lo que la alusión a supuestas omisiones de pronunciamientos necesarios para la ejecución de lo resuelto no ampara la apertura de un proceso posterior (STS de 28 de julio de 1995), *(v)* que en el compromiso arbitral incorporado al contrato de obra se dejara abierta la vía judicial para la resolución definitiva de las posibles controversias entre las partes es irrelevante a los efectos que ahora interesan, ya que consta la intención de las partes de renunciar a la vía judicial, puesta de manifiesto por la formalización del arbitraje, su compromiso expreso de aceptación de la decisión del árbitro y las sucesivas prórrogas que pactaron para la emisión del laudo, *(vi)* las partes no han promovido la anulación ni la revisión del laudo, y *(vii)* la renuncia al compromiso arbitral que hicieron las partes en acto de conciliación carece de relevancia, conforme al artículo 31 LA 1988, pues se efectuó con posterioridad a que se dictara el laudo".

VALIDEZ DEL CONVENIO ARBITRAL CONTENIDO EN UN CONTRATO DE ADHESIÓN – SENTENCIA NO. 20/2018–STSJ M 3981. TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "En cuanto a la validez del supuesto convenio arbitral vinculante para las partes cabe señalar lo siguiente, el art. 9.2 de la ley arbitral, establece que: si el convenio arbitral está contenido en un contrato de adhesión, la validez de dicho convenio y su interpretación se regirán por lo dispuesto en las normas aplicables a este tipo de contrato. Por consiguiente habrá de estarse a lo previsto sobre cláusulas de sumisión por la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, en cuyo artículo 8 declara la nulidad de aquellas que perjudiquen al adherente. En la misma línea son de aplicación los artículos 5 y 7 de la LCGC, que son de aplicación a los contratos celebrados entre profesionales, por lo que al no estar firmado por todas las partes contratantes no puede surtir efectos vinculantes. (...) 4º.- La interpretación de la existencia de convenio arbitral en estos casos, deba ser restrictiva, evitando de este modo el desequilibrio en perjuicio del franquiciado, que pierde su derecho de acceso a la justicia ordinaria y a las reglas generales de la competencia territorial".

VALIDEZ DEL PACTO ARBITRAL – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 18.673. COLOMBIA. "Por consiguiente, el pacto arbitral comporta una naturaleza jurídica contractual, la habilitación que en él hagan las partes a un tercero para ejercer función jurisdiccional, necesariamente debe ser válida, ya que como todo contrato, está sujeto a las normas generales que determinan la validez de ese tipo de negocios jurídicos, entre otras, las relativas a la capacidad de las partes y a la licitud de la causa y el objeto, según lo dispuesto en el artículo 1502 del Código Civil, normatividad ésta aplicable tanto a la actividad contractual de los particulares como a la que desarrollen las entidades estatales".

VALOR DE PRECEDENTES JUDICIALES EN LAUDOS ARBITRALES – CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. RADICACIÓN O EXPEDIENTE NÚMERO: 11001032600020160013800 (57.785). COLOMBIA. "Al contrario de lo expresado en el recurso extraordinario de anulación que mediante la presente providencia se desata, en criterio de la Sala los laudos arbitrales son decisiones de las cuales se deriva la existencia de precedentes judiciales habida consideración *(i)* de la asimilación que desde el punto de vista jurídico cabe realizar entre la sentencia judicial y el laudo arbitral, circunstancia determinante de que *(ii)* a los tribunales de arbitramento resulte exigible la observancia de idénticos principios constitucionales y derechos fundamentales que justifican, para los jueces, el deber de respetar sus propios precedentes, de suerte que los tribunales arbitrales se hallan en la obligación de tener en cuenta

los precedentes derivados de las decisiones proferidas por otro(s) tribunal(es) de arbitramento. La identidad, en cuanto a su naturaleza jurídica, entre el laudo arbitral y la sentencia judicial. La asimilación que cabe preconizar, en punto de su naturaleza jurídica, entre el laudo arbitral y la sentencia judicial, resulta posible desde la consideración que ha de tenerse presente, como punto de partida, de acuerdo con la cual tanto la justicia institucional como la arbitral gozan de pleno respaldo constitucional y de ingentes desarrollos normativos de orden no sólo legal sino también reglamentario. Así pues, del propio texto de la Carta Política se deriva que el arbitramento es un mecanismo a través del cual las partes involucradas resuelven voluntaria y libremente sustraer de la jurisdicción institucional la solución de un conflicto, a fin de que un tercero particular, después de conducir la instrucción del trámite procesal definido por el legislador para tal efecto, emita una decisión que, al igual que la sentencia, resulta de carácter definitivo y vinculante para las partes. (...) Sin embargo, no puede perderse de vista que así como la naturaleza procesal -al igual que la estirpe y la regulación constitucional y legal- del arbitramento ha servido de fundamento para concluir que el árbitro y el juez tienen a su alcance idéntico entramado de facultades para cumplir con sus funciones, también es verdad y como contrapartida, que árbitro y juez comparten igualmente un significativo núcleo de deberes en punto del acatamiento del orden jurídico, de suerte que, para continuar con la referencia a los planteamientos del Tribunal Constitucional, "la Corte ha considerado que la justicia arbitral también se caracteriza por su naturaleza procesal, debido a que está sujeta a las reglas básicas de todo proceso: el respeto por los derechos fundamentales de las partes, especialmente de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, y el acatamiento de las normas de orden público que reglamentan las actuaciones de los árbitros y de las partes". (...) Dicho en otros términos: así como de forma incuestionable y pacífica "se tiene que materialmente los laudos arbitrales son equiparables a las sentencias judiciales", no puede resultar menos verídico e irrefutable "que la actividad de los jueces y árbitros es similar en cuanto al deber de garantizar la prevalencia de los derechos fundamentales", además de resultar absolutamente "claro que los árbitros están sujetos al cumplimiento de los parámetros mínimos dispuestos en la Constitución"."

VALORACIÓN DE LA CAUSA LITIGIOSA POR LOS ÁRBITROS.–SENTENCIA NO. 3/2014. TRIBUNAL SUPERIOR DE ASTURIAS. ESPAÑA. "La calificación que efectúan los árbitros del contrato y las consecuencias inherentes a ella, se hallan intrínsecamente vinculadas a la cuestión central del objeto del presente arbitraje, y teniendo presente que, según reiterada doctrina jurisprudencial

consolidada, los árbitros pueden resolver no sólo las cuestiones que han sido configuradas en el convenio arbitral (thema decidendi), sino también las que deban reputarse comprendidas en el mismo (modulaciones). En el presente caso, los árbitros hicieron lo que debían, no incurriendo en vicio o defecto de incongruencia."

VALORACIÓN DE LAS CAUSAS DE ANULACIÓN DEL LAUDO–SENTENCIA NO.47/2022–STSJ M 15598/2022. TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID. ESPAÑA. "En el mismo sentido el Tribunal Constitucional, Sentencia 174/1995, de 23 de noviembre (EDJ 1995/6552), señala que "el posible control judicial derivado del artículo 45 de la Ley de Arbitraje -hoy art. 41- está limitado al aspecto externo del laudo y no al fondo de la cuestión sometida al arbitraje, al estar tasadas las causas de revisión previstas y limitarse éstas a las garantías formales"; razón por la cual únicamente procede conocer de las causas de nulidad tasadas que, además dice la STS de 23 de abril de 2001 (EDJ 2001/6431), en su Fundamento Séptimo, con remisión a la de 16-2-68, "han de ser interpretadas y aplicadas estrictamente a fin de evitar la acusada tendencia de quienes renunciaron a las garantías que les brindaba la severa aplicación del Derecho, de lograr su anulación por los órganos jurisdiccionales de carácter oficial cuando no logran el éxito de sus aspiraciones.""

VALORACIÓN DE PRUEBAS EN ARBITRAJE Y CONFIGURACIÓN DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO–SENTENCIA T-466 DE 2011. CORTE CONSTITUCIONAL. COLOMBIA. "En consecuencia, no basta con que el panel arbitral haya dejado de valorar alguna prueba irrelevante, o que no se haya pronunciado sobre la totalidad de los elementos probatorios obrantes en el expediente. En realidad, para que se configure una vía de hecho por defecto fáctico, es indispensable que el error en la apreciación probatoria sea de tal magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante, sin que quepa margen de objetividad alguno que permita explicar razonablemente la conclusión a la cual llegó el Tribunal de Arbitramento. En igual sentido, es imprescindible que tal yerro tenga una trascendencia fundamental en el sentido del fallo, de manera que si no se hubiera incurrido en él, los árbitros hubieran adoptado una decisión completamente opuesta".

VALORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL. CONTRADICCIÓN DE TESIS 7790/2019. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. MÉXICO. El órgano de amparo precisó, en concreto, luego de exponer algunas reflexiones sobre el arbitraje y sobre la garantía de audiencia que se establece en el artículo 14 constitucional, aplicada por analogía al arbitraje, que la pretendida aplicación de "estándares probatorios y exigencias de juicio distintos" o la pretendida

Esta obra
se terminó de imprimir
en el mes de agosto de 2026,
en los talleres gráficos de
Grupo Editorial Ibáñez,
Cra. 69 Bis No. 36-20 Sur
Tels.: 6012300731 - 6012386035
Bogotá D.C. - Colombia

Hernando Herrera Mercado: Se ha desempeñado como presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, presidente de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, y ha sido conjuez de todas las jurisdicciones y altas Cortes colombianas: conjuez de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, conjuez de la Corte Constitucional, conjuez de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Fue miembro del Comité Global de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París CCI e integrante de la Honorable Comisión de Revisión de Laudos del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid - Centro Iberoamericano de Arbitraje. Ha sido árbitro designado en más de ciento cincuenta trámites arbitrales en controversias nacionales e internacionales ligadas a la contratación estatal y la privada, en los campos de las concesiones: infraestructura vial, telecomunicaciones, infraestructura aeroportuaria, sistemas de transporte masivo, servicios públicos (acueducto, electricidad, telefonía, aseo público, tratamiento de residuos), en torno a disputas en los sectores de hidrocarburos, energía y minería, la agencia mercantil, los contratos de distribución, y en otras controversias de diferentes ámbitos empresariales y estatales. Es integrante de los listados oficiales de reconocidos centros de arbitraje en el ámbito nacional e internacional, ex director del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, ex vicepresidente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC), ex integrante de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la Asociación de Exmagistrados de las Cortes –Asomagister–, miembro de la Asociación Latinoamericana de Arbitraje. Fue distinguido como árbitro y amigable componedor destacado por el Centro de Arbitraje Internacional. Con otorgamiento de status de residencia especial en los Estados Unidos por calidades profesionales excepcionales. Se desempeño como director fundador del postgrado de Arbitraje y resolución de controversias de la Universidad del Rosario y director fundador de la Maestría de Arbitraje Nacional, Internacional y de Inversión de la Universidad del Rosario y de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es miembro fundador del Comité Colombiano de Arbitraje. Igualmente, fue presidente (e) y secretario general de Telecom, asesor y secretario del Ministerio de Justicia y del Derecho, asesor de la Comisión Especial Legislativa -órgano reglamentario de la Constitución 1991-, asesor jurídico de la empresa Bavaria S.A., y primer director del Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario. Ha ejercido la cátedra universitaria en pregrado y postgrado en las universidades: Externado, Javeriana, La Sabana y el Rosario y en universidades internacionales. Las cátedras que ha regentado en dichas universidades han sido las de Arbitraje, Arbitraje Internacional, Derecho Constitucional, Contratos, Derecho Comercial, Derecho Económico, Derecho Administrativo, Derecho de las Telecomunicaciones y Régimen Legal de los Servicios Públicos. Ha hecho parte de varias comisiones de reforma judicial y estatutos arbitrales. Igualmente, ha sido columnista y colaborador de varios medios como analista experto en temas de derecho y de justicia, incluidos los periódicos: El País (España – América), El Tiempo y Ámbito Jurídico, la Revista Semana y la cadena Caracol Radio (Grupo Prisa de España). Posee numerosos escritos y monografías en publicaciones individuales y colectivas, y es autor de diversas publicaciones jurídicas de las que se destacan: "Los juicios ante las Cortes", "La impugnación de los laudos arbitrales", la presente obra "Definiciones jurisprudenciales arbitrales (Colombia, España y México)", y la primera enciclopedia arbitral del mundo: "Arbitraje 360°".

ISBN: 978-958-502-853-1
9 789585 028531